



Fascículo IV

Año 1952

INDICE ALFABETICO

37856

Accidentes del Trabajo.

Enfermedad (Asistencia por el Seguro Obligatorio de).

Se establece la obligación de que el Seguro de Enfermedad atienda a los trabajadores accidentados, sin perjuicio del reintegro de las entidades aseguradoras. (O.) Ref. 223.

— *Tarifas mínimas.*—Se rectifican los errores advertidos en el texto oficial de las tarifas mínimas. (R.) Referencia 218.

Agricultura.

Seguros y Subsidios Sociales.

Normas sobre cotización de los trabajadores en el Régimen Especial Agropecuario. (O.) Ref. 211.

Ahorro y Previsión.

Montepío Laboral.

Rectifica los Estatutos en cuanto a la composición de los Organos de Gobierno. (O.) Ref. 231.

Alimentación (Industria de la).

Montepío Laboral.

Molido, Tueste y Mezcla de Harinas. — Se incorporan estas actividades al Montepío de Alimentación. (R.) Ref. 219.

— Se rectifica la disposición anterior. (R.) Ref. 225.

Caja de Jubilación y Subsidios de la Industria Textil.

Montepío Laboral.

Rectifica los Estatutos en cuanto a la composición de los Organos de Gobierno. (O.) Ref. 231.

Carbón (Minas de).

Montepío Laboral.

Rectifica los Estatutos en cuanto a la composición de los Organos de Gobierno. (O.) Referencia 231.

Enfermedad (Seguro Obligatorio de).

Accidentes del Trabajo.

Se dispone que se preste la asistencia a los obreros accidentados, sin perjuicio del reintegro por parte de las Entidades Colaboradoras. (O.) Ref. 223.

Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

Se autoriza la constitución de una Caja de Empresa a los efectos de la prestación del Seguro Obligatorio de Enfermedad. (D.) Ref. 214.

Especies (Molido, Tueste y Mezcla de).

Montepío Laboral.—Véase Alimentación (Industrias de la).

— *Reglamento de Trabajo.*

Véase Pimentonera (Industria).

Familiar (Subsidio).

Funcionarios, Empleados y Obreros del Estado.

Su concepto a efectos de Seguros y Subsidios Sociales. (D.) Ref. 215.

Viudedad y Orfandad (Seguro de).

Compatibilidad con otras pensiones. (O.) Ref. 228.

Madera (Industria de la).

Reglamento de Trabajo.

Cestería y objetos de mimbre. Se modifican los artículos 21 y 61 de sus Normas de trabajo. (R.) Ref. 207.

Magistratura de Trabajo.

Alguaciles.

Se les atribuye el carácter de Agentes de Autoridad. (O.) Ref. 212.

Días inhábiles.

En Barcelona. (O.) Ref. 217.

Secretarios.

Se establece el distintivo del cargo. (O.) Ref. 210.

Minería Asturiana.

Montepío Laboral.

Se rectifican sus Estatutos en cuanto a los Organos de Gobierno. (O.) Ref. 231.

Mutualidades y Montepíos Laborales.

Registro e Ins-

cripción (*Derechos de*).— Para el año 1952. (O.) Referencia 222.

Papelera (Industria).— *Montepío Laboral*.— Rectifica los Estatutos en cuanto a la composición de los Organos de Gobierno. (O.) Referencia 231.

Paro por Escasez de Energía Eléctrica (Subsidio de).— *Caja de Compensación*.— Normas complementarias sobre la supresión de esta Caja y obligaciones de las empresas que venían realizando la recaudación del recargo especial. (O.) Ref. 217.

Periodistas (Mutualidad Laboral de).— *Montepío Laboral*.— Rectifica los Estatutos en cuanto a la composición de los Organos de Gobierno. (O.) Ref. 231.

Pesca Marítima.— *Seguros y Subsidios Sociales*.— Concepto de salario-base. (O.) Ref. 226.

Pimentonera (Industria).—

Reglamento de Trabajo.— Molido, Tueste y mezcla de Especies.— Se declara de aplicación a estas actividades el Reglamento de Trabajo para la Industria Pimentonera. (R.) Ref. 209.

Porteros de Fincas Urbanas.— *Montepío Laboral*.— Estatutos. Texto. (O.) Referencia 232.

Propiedad Inmobiliaria (Colegios Oficiales de la).— *Incorporación*.— Se concede un último plazo para la incorporación al Colegio Provincial respectivo a los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. (O.) Ref. 216

Químicas (Industrias).— *Montepío Laboral*.— Estatutos. Texto. (O.) Ref. 208. — Rectifica los artículos 5, 20 y 76. (R.) Ref. 221

Readmisión en el puesto de Trabajo.— *Rehabilitación física*.— Se dictan normas para la reincorporación al puesto de trabajo, cuando el cese no se derivó de en-

fermedad profesional o accidentes del trabajo. (O.) Referencia 230.

Sedero de la Industria Textil (Sector).— *Reglamento de Trabajo*.— Recogedora, reparadora y repartidora de carretes. Funciones y salarios. (R.) Ref. 220.

Transportes de Madrid (Empresa Municipal de).— Véase Enfermedad (Seguro Obligatorio de).

Transportes y Comunicaciones.— *Montepío Laboral*.— Estatutos. Rectifica la denominación del Montepío y los artículos 67, 76, 88, 96 y 100. (R.) Ref. 224.

Turrónes, Mazapanes y Obradores de Confitería, Pastelería y Masas Fritas (Industrias de).— *Reglamento de Trabajo*.— Rectifica los artículos 8 y 93. (O.) Ref. 229.

Viviendas.— *Protegidas*.— Se declaran urgentes en determinadas localidades. (D.) Ref. 213.

Art. 23. Para ser Vocal electivo de los Organos de Gobierno de esta Institución se precisará: ser asociado, mayor de edad, estar en pleno disfrute de sus derechos civiles y profesionales, tener una antigüedad laboral mínima de diez años y pertenecer a la Organización Sindical.

No podrán ostentar cargos representativos en la Entidad aquellos socios que no cumplan normalmente las diversas obligaciones que estos Estatutos imponen.

Para ser Vocal de las Comisiones Provinciales Permanentes se preferirá a aquellas personas que residan en la localidad donde tenga su sede la respectiva Comisión o en sus cercanías.

Art. 24. La Asamblea General estará constituida por Vocales electivos de las Comisiones Provinciales Permanentes, y elegirá de entre sus miembros los componentes de la Junta Rectora.

La Junta Rectora elegirá de entre sus miembros electivos los cargos de Presidente y Vicepresidente, que lo serán de todos los Organos de Gobierno Nacionales.

El Servicio de Mutualidades Laborales podrá poner su veto a los nombramientos efectuados, previas las informaciones que considere precisas para fundar su resolución.

Art. 25. Los miembros de los Organos de Gobierno percibirán por su asistencia a las reuniones reglamentariamente convocadas, dietas de asistencia o de asistencia y desplazamiento, según los casos. La cuantía de estas dietas será fijada por la Junta Rectora.

CAPITULO II

De los Organos de Gobierno nacionales

SECCIÓN 1.ª—De la Asamblea General.

Art. 26. La Asamblea General es el Organismo supremo de la Institución, constituida por representantes de los socios protectores y beneficiarios. En ella concurren la orientación del presente y futuro de la Entidad, la adopción de medidas y estudio de sugerencias que entrañen modificación de estos Estatutos y la superior vigilancia de los Organos de Gobierno de ella derivados en el cumplimiento de sus misiones.

Art. 27. Será competencia de la Asamblea General:

- 1.º Elegir los miembros que han de constituir la Junta Rectora.
- 2.º Conocer la actuación de la Junta Rectora y de sus miembros en relación con el ejercicio de las funciones propias de sus cargos.
- 3.º Intervenir, en la forma que corresponda, en todos aquellos asuntos del Montepío cuya competencia no esté reservada a otros Organos del mismo.
- 4.º Examinar y aprobar, si procede, la Memoria, presupuestos, cuentas, inventarios y balances del Montepío que le someta la Junta Rectora.
- 5.º Estudiar, bien a propuesta de la Junta Rectora o por iniciativa propia, la reforma general de estos Estatutos o la concesión de otros beneficios que mejoren los establecidos, elevando la propuesta al Servicio de Mutualidades Laborales.
- 6.º Resolver sobre las propuestas que le

someta la Junta Rectora y las Comisiones Provinciales Permanentes por mediación de aquélla.

Art. 28. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias o extraordinarias. Las reuniones ordinarias tendrán lugar una vez al año; las extraordinarias, siempre que, con la suficiente justificación, lo acuerde la Junta Rectora por su iniciativa o por solicitarlo la tercera parte de los asambleístas.

En las reuniones extraordinarias sólo podrán tratarse aquellos asuntos expresamente consignados en el orden del día, el que deberá ser sometido a la previa aprobación del Servicio de Mutualidades Laborales.

Art. 29. Las convocatorias de la Asamblea General se harán por su Presidente con una antelación mínima de veinte días y por duplicado, a fin de dejar un ejemplar en poder del convocado y de que el otro sirva para poder acreditar en cualquier circunstancia el momento en que fué recibido por su destinatario.

A las convocatorias deberá acompañarse el orden del día de la sesión correspondiente.

Art. 30. Las reuniones de la Asamblea General podrán celebrarse en primera o segunda convocatoria. Desde el momento en que debiera haberse celebrado en primera convocatoria, al señalado para celebrar sesión en segunda, mediará un espacio de veinticuatro horas, sin que por ningún motivo ni en ningún caso pueda reducirse este lapso de tiempo.

Art. 31. Para que la Asamblea General se considere válidamente constituida será necesaria la asistencia de la mitad más uno de sus componentes en primera convocatoria; en segunda será suficiente con que asista la tercera parte de sus miembros.

Art. 32. Los miembros de la Asamblea General podrán hacer uso de la palabra:

- 1.º Para una cuestión previa o de orden.
 - 2.º Para defender o impugnar una proposición.
 - 3.º Para contestar cuando hayan sido aludidos personalmente.
 - 4.º Para rectificar una sola vez, cuando hayan tomado parte en algún debate.
- Art. 33. Siempre que los miembros de la Junta Rectora hagan uso de la palabra en reuniones de la Asamblea General, se entenderá que no consumen turno a los efectos reglamentarios.

Art. 34. Cuando un miembro de la Asamblea General se halle en el uso de la palabra no podrá ser interrumpido sino para ser llamado al orden por la Presidencia.

El Presidente podrá retirar la palabra al miembro de la Asamblea General a quien hubiese llamado al orden, e incluso ordenará su expulsión del local, si ello fuese necesario.

Art. 35. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría de votos entre los miembros que se hallen presentes. Cuando resulte empate en una votación decidirá con su voto el Presidente.

Art. 36. Las votaciones serán nominales cuando así lo solicite la tercera parte de los miembros asistentes.

Art. 37. De las deliberaciones de la Asamblea General se harán constar en el Libro de Actas correspondiente —debidamente diligenciado por la Delegación de Trabajo— las conclusiones y acuerdos adoptados, autorizándose las actas con las firmas del Presidente y Secretario.

SECCIÓN 2.ª—De la Junta Rectora

Art. 38. La Junta Rectora es el órgano que, en nombre de la Asamblea General, tiene a su cargo el gobierno constante y directo del Montepío.

Art. 39. Será competencia de la Junta Rectora:

1.º Cumplir y hacer cumplir los preceptos contenidos en los presentes Estatutos y los de carácter general que sean aplicables al Montepío.

2.º Proponer a la Asamblea General la creación de nuevos beneficios cuando las posibilidades económicas del Montepío lo permitan, y la reforma de estos Estatutos, si lo estimare necesario.

3.º El estudio y resolución, previo informe de la Comisión Provincial respectiva y de la Dirección del Montepío de los expedientes sobre las siguientes prestaciones:

Pensión por Jubilación.

Pensión por Invalidez.

Pensión o Subsidio de Viudedad.

Pensión de Orfandad.

Pensión de Larga Enfermedad.

Igualmente resolverá los expedientes de prestaciones extrarreglamentarias con cargo al tanto por ciento que, del fondo a este fin destinado, le corresponde, según lo establecido en el artículo 80 de estos Estatutos.

4.º Acordar que sea mensual el pago de cuotas por parte de aquellas Empresas en las que concurren alguna de las circunstancias prevenidas en el artículo 64 de estos Estatutos.

5.º Conocer y aprobar, en su caso, las solicitudes formuladas por las Empresas, relativas al ingreso conjunto del importe total de cuotas correspondientes a Centros de Trabajo establecidos en distintas provincias.

6.º Nombrar el Vocal representante del Montepío en las Entidades de Previsión Social que pudieran constituirse por las Empresas.

7.º Estudiar y someter a la aprobación de la Asamblea General los presupuestos anuales de ingresos y gastos.

8.º Someter a la Asamblea General para su aprobación la Memoria anual, los estados de cuentas, inventarios y balances del Montepío.

9.º Aprobar la distribución de fondos.

10.º Acordar las inversiones.

11.º Imponer las sanciones procedentes con arreglo a lo establecido en el Título correspondiente de estos Estatutos.

12.º Proveer interinamente, hasta la inmediata renovación de los Organos de Gobierno, las vacantes que se produzcan con anterioridad a la extinción del mandato de sus miembros o los de la Asamblea General.

13.º Resolver o informar a la Superioridad, según los casos, en los desacuerdos entre las Comisiones provinciales permanentes y los Delegados provinciales.

14.º Resolver los recursos que sean de su competencia.

15.º En general, adoptar las resoluciones que considere convenientes, siguiendo la orientación y las normas señaladas en los presentes Estatutos, así como elevar a la Superioridad las sugerencias que estime oportunas para

la adopción de medidas que redunden en beneficio de los beneficiarios.

Art. 40. La Junta Rectora se reunirá, por lo menos, una vez cada tres meses, a fin de estudiar y resolver cuantos asuntos tenga pendientes.

Además de estas reuniones preceptivas, se reunirá siempre que sea convocada por el Presidente, bien por iniciativa de éste o por haberlo así solicitado la tercera parte de los miembros o porque el Director lo proponga atendiendo a razones justificadas.

Art. 41. Las convocatorias para las reuniones de la Junta Rectora deberán hacerse con una antelación mínima de ocho días y en la forma prevenida para la Asamblea General.

Art. 42. En todo lo referente al número de asistencia necesarios para que la Junta Rectora se considere válidamente constituida, deliberaciones, acuerdos y actas de las sesiones, se aplicarán las normas relativas a la Asamblea General.

Art. 43. Cuando por circunstancias especiales se hallen reunidos en el domicilio social la totalidad de los miembros de la Junta Rectora, sin previa convocatoria, podrán celebrar sesión y tener plena validez los acuerdos adoptados en la misma sin más requisito que la aprobación previa y por unanimidad de declarar la conveniencia de celebrarla en tal forma, debiendo levantarse el acta correspondiente al igual que en las demás reuniones.

SECCIÓN 3.ª—De la Comisión Permanente Nacional

Art. 44. La Comisión Permanente Nacional es el Órgano Delegado de la Junta Rectora, que se constituye para la más ágil y rápida resolución de los expedientes de prestaciones y asuntos de trámite de la Entidad.

Art. 45. Corresponden concretamente a la Comisión Permanente Nacional las funciones y cometidos que se regulan en los apartados primero, tercero y noveno del artículo 39 de los presentes Estatutos, así como todas aquellas funciones que, siendo de la competencia de la Junta Rectora, sean expresamente delegadas por ésta.

Art. 46. La Comisión Permanente Nacional se reunirá por lo menos una vez al mes.

Además de esta reunión preceptiva se reunirá siempre que sea convocada por el Presidente, atendiendo a razones justificadas bien por iniciativa de éste, por haberlo solicitado así la tercera parte de sus miembros o por proponerlo el Director.

Las convocatorias para las reuniones deberán hacerse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, y en la forma prevenida para la Asamblea General.

Art. 47. En todo lo referente al número de asistentes necesarios para que la Comisión Permanente Nacional se considere válidamente constituida, deliberaciones, acuerdos y actas de las sesiones, se aplicarán las normas relativas a la Asamblea General.

SECCIÓN 4.ª—Del Presidente, Vicepresidente y Secretario de Actas

Art. 48. En el Presidente de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional concurren la alta representación

y orientación de la Entidad de la que es primera jerarquía y máxima figura representativa de los asociados.

Serán funciones del Presidente del Montepío o de quien reglamentariamente le sustituya:

1.ª Representar al Montepío, en unión del Director del mismo, en todos los actos y contratos que se celebren.

2.ª Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional dirigiendo la discusión, así como decidir las votaciones en caso de empate.

3.ª Fijar el orden del día de las reuniones de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional.

4.ª Ejercitar funciones de fiscalización en todos los servicios y actividades del Montepío cuando lo considere oportuno, asistido del Director.

5.ª Designar, de acuerdo con la Junta Rectora, las personas que deban cubrir interinamente hasta la inmediata renovación de los Organos de Gobierno, las vacantes que se produzcan con anterioridad a la fecha de terminación del mandato de sus Vocales.

Art. 49. El Vicepresidente sustituirá al Presidente, con iguales atribuciones y deberes, en caso de ausencia, enfermedad, fallecimiento u otra cualquier circunstancia que así lo requiera, como igualmente en aquellos casos en que mediare delegación.

Art. 50. El Secretario del Montepío actuará como Secretario de Actas de la Asamblea General y de los Organos derivados de ésta, sin derecho a voto.

Art. 51. Serán funciones del Secretario de Actas:

1.º Actuar como tal en las sesiones que celebre la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional, redactando las actas, que habrán de ser autorizadas con el visto bueno del Presidente, así como llevar los correspondientes libros de las mismas.

2.º Asistir al Presidente en la redacción del orden del día de las sesiones y cursar las convocatorias para ellas.

3.º Autorizar, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones que se expidan en relación con el contenido de dichas actas.

CAPITULO III

De los Organos de Gobierno provinciales

Art. 52. Se constituirá Comisión Provincial Permanente en las provincias y en la forma que se indique en la resolución correspondiente del Servicio de Mutualidades Laborales.

También se constituirán Ponencias en las provincias que se determinen.

Art. 53. Las Comisiones Permanentes y las Ponencias se reunirán cada quince días, siempre cuando existan expedientes de prestaciones pendientes de resolver o informar.

Podrán celebrar sesión, aun cuando no se dé la circunstancia expuesta en el párrafo anterior si así lo acordase el Presidente de la Comisión o Delegado provincial del Mutualismo Laboral por estimar que existen asuntos urgentes a deliberar.

Art. 54. Las convocatorias se harán con

una antelación mínima de cuarenta y ocho horas y en la forma prevenida para la Asamblea General. Deberán constar el día y hora fijado para la reunión y se hará saber que de ser necesaria la sesión en segunda convocatoria se celebrará media hora después de la señalada para la primera.

Art. 55. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, siendo necesario para que tengan validez que concurren en primera convocatoria la mitad más uno de sus componentes con voto y un mínimo de la tercera parte de sus miembros en segunda.

Las Comisiones de cuatro miembros podrán reunirse en segunda convocatoria con solo dos de ellos.

En caso de empate decidirá con su voto el Presidente.

Art. 56. La constancia y cumplimiento o suspensión de los acuerdos adoptados se sujetará a lo prevenido en el artículo 7.º de la Orden de 19 de noviembre de 1948.

Art. 57. Las Comisiones Provinciales Permanentes, como delegadas de sus Organos jerárquicos nacionales, tendrán las misiones y facultades informativas, de representación, de vigilancia y resolutivas que regula el artículo 2.º de la Orden de 19 de noviembre de 1948.

CAPITULO IV

De los Organos Ejecutivos del Montepío

SECCIÓN 1.ª—Del Director

Art. 58. Corresponderán al Director y serán funciones del mismo:

1.º Representar al Montepío, en unión del Presidente, en todos los actos y contratos que se celebren, así como ante las Autoridades, Tribunales y Juzgados, Centros de Administración del Estado y particulares o cualquiera otros Organismos, Entidades, oficinas y personas, con los poderes oportunos de la Junta Rectora cuando sean necesarios a los indicados efectos.

2.º Asistir al Presidente, cuando proceda, en la fiscalización de las actividades y los servicios administrativos del Montepío.

3.º Ejecutar los acuerdos de los Organos de Gobierno.

4.º Proponer las reuniones de dichos Organos cuando lo estime oportuno.

5.º Ordenar los pagos correspondientes a la aplicación de los distintos conceptos presupuestarios y los derivados de la concesión de beneficios o prestaciones.

6.º Autorizar con su visto bueno los justificantes de ingresos y demás documentos análogos que se expidan por el Montepío.

7.º Ostentar la Jefatura del personal y de los servicios administrativos.

8.º Cumplir y hacer cumplir, respondiendo ante sus Organos de Gobierno y Servicio de Mutualidades Laborales, del fiel cumplimiento de los Estatutos, normas y procedimientos administrativos.

9.º Informar los expedientes y documentos que se determinen o así lo requieran.

10. Todas las atribuciones de Dirección y gestión que no estén específicamente reservados de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional.

SECCIÓN 2.ª—Del Delegado provincial

Art. 59. A efectos análogos a lo establecido con respecto al Director, el Delegado provincial del Mutualismo Laboral ostentará, dentro de su respectivo ámbito provincial, en unión del Presidente de la Comisión Provincial, la representación legal de la Institución ante las Autoridades, Tribunales, Juzgados, Centros de Administración del Estado y particulares y cualesquiera otros Organismos o personas.

Art. 60. Corresponden al Delegado provincial y son funciones del mismo:

1.º Realizar y ejecutar los acuerdos administrativos de los Organos de Gobierno nacionales y provincial, debiendo estar en contacto y dependencia con el Servicio de Mutualidades Laborales a los efectos de unificación, coordinación y régimen interior.

2.º Proponer al Presidente de la Comisión Provincial, siempre que lo considere preciso, la reunión de sus miembros.

3.º Asistir a las reuniones de la Comisión Provincial con derecho a voz, pero sin voto, con el carácter de asesor técnico.

4.º Suspender, en su caso, por considerarlos antirreglamentarios, los acuerdos adoptados por la Comisión Provincial, dando cuenta al Organo superior inmediato a los oportunos efectos.

5.º Coordinar la labor de los departamentos de la Delegación con los servicios del Montepío.

6.º Ordenar los pagos acordados.

7.º Ostentar la Jefatura del personal.

8.º Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, normas y procedimiento administrativo, respondiendo de su fiel cumplimiento ante los Organos de Gobierno del Montepío y Servicio de Mutualidades Laborales.

9.º Llevar el despacho de los asuntos e informar los expedientes y documentos que se determinen o así lo requieran.

10. Velar con el máximo interés para que los trabajadores de su ámbito territorial sean informados de todo lo referente a sus deberes y derechos cerca del Montepío.

11. Organizar, con la Comisión Provincial, los actos de entrega de pensiones y subsidios y disponer los medios para una eficaz y sincera propaganda que facilite el exacto conocimiento por los trabajadores de los fines y realizaciones del sistema mutualista.

TITULO IV

Régimen económico

CAPITULO PRIMERO

Recursos económicos

Art. 61. Los recursos económicos del Montepío Nacional de Previsión Social de Transportes y Comunicaciones son los siguientes:

1.º La aportación de las Empresas, consistente en el 6 por 100 de los salarios de los productores que estén a su servicio.

2.º La cuota de los productores, consistente en el 3 por 100 de los salarios por ellos devengados.

3.º El importe de cuantos donativos, subvenciones o legados le sean hechos al Montepío.

4.º Los intereses de los bienes patrimoniales de la Institución.

5.º Los ingresos de cualquier índole que puedan efectuarse con arreglo a los preceptos contenidos en los presentes Estatutos y demás de general aplicación.

Art. 62. La obligación de cotizar al Montepío por las Empresas y trabajadores en él encuadrados se inició en las fechas establecidas a continuación:

1.º Transportes por Carretera: 1 de octubre de 1947.

2.º Compañías y Agentes de Ferrocarriles de Uso Público: 1 de enero de 1947.

3.º Tranvías, Autobuses y Trolebuses: 1 de febrero de 1949.

4.º Contratas Ferroviarias: 1 de febrero de 1949.

5.º Pompas Fúnebres: En las fechas indicadas en las respectivas Reglamentaciones Provinciales.

6.º Líneas Aéreas y Entidades de Radio-comunicación: En las fechas indicadas en las respectivas resoluciones de incorporación y con las características en algunas de las mismas determinadas en cuanto a la distribución, a cargo de las Empresas y los trabajadores, de la cuota global del 9 por 100.

Art. 63. El haber o salario que ha de servir de base para la liquidación de las cuotas será el que para las Mutualidades y Montepíos Laborales se determine en la legislación vigente.

Art. 64. Las liquidaciones e ingresos de las cuotas patronal y obrera deberán realizarse por las Empresas en periodos trimestrales.

No obstante, la Junta Rectora podrá acordar que sea mensual la liquidación del pago de cuotas para aquellas Empresas en las que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) Frecuentes y numerosas altas y bajas en su personal.

b) Tener repetidas épocas de ceses o suspensiones en el trabajo.

c) Haber sido sancionadas repetidamente por demora en el pago.

d) Cualquier otra causa suficiente, a juicio de la Junta Rectora.

Art. 65. Los ingresos de cuotas deberán efectuarse en la forma y plazos que a continuación se expresan:

a) En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas a nombre del Montepío en las Cajas de Ahorro Provinciales, Municipales y demás de carácter benéfico-social.

b) Cuando no exista Caja de Ahorros de la índole citada en las cercanías del centro de trabajo de la Empresa, ésta deberá ingresar las aportaciones en la cuenta corriente abierta a nombre del Montepío en la Entidad bancaria autorizada.

c) Los ingresos se efectuarán dentro de los meses de abril, julio, octubre y enero; cada ingreso corresponderá a las liquidaciones del trimestre natural anterior.

Las Empresas que, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, deban efectuar sus ingresos mensualmente, los realizarán dentro del mes siguiente al que la liquidación corresponda.

d) Los ingresos se realizarán utilizando los modelos y cumpliendo las normas que por el Montepío se establezcan.

Art. 66. Las Empresas que cuente con

centros de trabajo situados en diferentes provincias podrán solicitar, y la Junta Rectora acordar, que las liquidaciones de cuotas se realicen totalmente en la capital de la provincia donde radique la sede central de la Empresa, siempre que ésta presente tantas hojas de liquidación, debidamente diligenciadas, como centros de trabajo que de la misma dependan, y atendiendo los requisitos que para el mejor servicio y funcionamiento consideren conveniente establecer los Organos de Gobierno de la Entidad.

Art. 67. Todo ingreso no realizado dentro de los plazos establecidos serán incrementado con el 10 por 100 del montante de la liquidación.

Para la exacción de las cuotas no satisfechas será de aplicación la Orden de 6 de octubre de 1949 (Ref. 237/49), correspondiendo al Director de la Entidad las facultades que en la misma se asignan a los Delegados del Instituto Nacional de Previsión.

Art. 68. Las Empresas responderán en todo caso ante el Montepío del pago de las cuotas correspondientes a todos los asociados en ellas encuadrados. Para ello, cuando aquéllas realicen el pago de los salarios a cada interesado descontarán las cuotas que les correspondan, y que, en unión de sus aportaciones, deberán ser ingresadas en la forma que determina el artículo 65.

Cuando las Empresas no retuvieren las cuotas de sus trabajadores o no las ingresasen, junto con sus aportaciones, en los plazos reglamentarios, el importe de las cuotas atrasadas y de los recargos será exigible exclusivamente a la Empresa, sin que ésta pueda efectuar a los trabajadores descuento alguno.

Art. 69. La obligación de pago de cuota al Montepío prescribirá a los cinco años, a contar de la fecha en que preceptivamente debieron ser abonadas.

Art. 70. Los asociados del Montepío que cesen en el servicio activo de las Empresas no tendrán derecho alguno a que les sean devueltas las cuotas ingresadas, salvo cuando cor carácter general y referido a un determinado sector o clase de asociados así lo ordene el Servicio de Mutualidades Laborales.

También procederá la devolución cuando por causa de afiliación errónea lo acuerde el Montepío. Si el erróneamente afiliado viniese en la obligación de pertenecer a otras Instituciones de Previsión Laboral, en lugar de acordarse la devolución de cuotas se verificará el oportuno traspaso de las mismas.

CAPITULO II

Presupuestos y gastos

Art. 72. De los ingresos totales que obtenga el Montepío por todos los conceptos se destinán los fondos necesarios para garantizar las pensiones que estos Estatutos conceden, para atender los auxilios y subsidios a los asociados activos y a sus derechohabientes y para el pago de los gastos de administración.

Art. 73. Los gastos de representación y administración de la sede central del Montepío no excederán del 1,50 por 100 de los ingresos que la Institución obtenga por todos los conceptos.

Con independencia del porcentaje anterior, y exclusivamente sobre la recaudación que por cuotas obtenga la Institución, se destinan los cánones de tutela y servicio oficial y canon de Delegaciones Provinciales, confor-

me a lo en cada momento establecido por disposiciones legales a este respecto vigentes.

El porcentaje correspondiente a la Delegación donde tiene su sede la Institución será administrado por los Organos centrales de la misma.

Art. 74. A la Junta Rectora correspondrá la confección y presentación a la Asamblea General del presupuesto de gastos e ingresos para cada ejercicio.

A estos efectos, en el mes de enero de cada año, la Dirección del Montepío elevará al Servicio de Mutualidades Laborales el censo técnico cerrado el 31 de diciembre anterior y el balance de saldos; también elevará el proyecto de presupuesto de gastos de administración.

A la vista de los documentos anteriores, el Servicio determinará, conforme a las disposiciones en vigor y a lo que estos Estatutos disponen, las reservas, fondos y amortizaciones a establecer.

Recibidas las oportunas instrucciones, la Junta Rectora confeccionará en el mes de febrero el proyecto de presupuesto definitivo, que someterá a la Asamblea General en unión del balance y Memoria del ejercicio anterior.

A los efectos anteriores, la Asamblea General deberá reunirse, si no existe causa suficiente que lo impida, en el mes de marzo de cada año.

CAPITULO III

De las reservas

Art. 75. Las reservas del Montepío estarán constituidas en la cuantía y forma que el Servicio de Mutualidades Laborales determine e invertidas por el sistema y orden de preferencia que establezcan las disposiciones legales.

Art. 76. Estas reservas serán las siguientes:

a) Para prestaciones concedidas y obligaciones pendientes de pago.

b) Reservas técnicas para garantizar el futuro pago de las pensiones y prestaciones reconocidas.

c) Reservas de seguridad para garantizar el pago de las prestaciones previstas para otorgar a los asociados en activo y a sus derechohabientes.

d) Fondos de estabilización, constituidos con el 0,50 por 100 de la cotización, más los saldos favorables y riesgos previstos y los reales, que se destinarán a cubrir las desviaciones desfavorables de aquella siniestralidad y a estabilizar la cotización en periodos y crisis económica incidental.

e) Fondo de reaseguro, que se constituirá con el 5 por 100 de la cotización, que se destinará a pagar a la Caja de Coordinación y Compensación las cuotas y primas que el Servicio de Mutualidades establezca, a fin de cubrir los excesos de riesgos que actualmente se determinen.

Art. 77. Las reservas comprendidas en los apartados b) y c) del artículo anterior están constituidas por los valores mobiliarios que determine y apruebe el Ministerio de Trabajo o por bienes inmuebles hasta el límite que permitan las disposiciones vigentes. Los depósitos de valores se efectuarán a disposición conjunta del Ministerio y de la Institución, pudiendo destinarse únicamente al fin para el que fueron depositados.

Art. 78. Todo acto de disposición que se realice sobre los bienes inmuebles de propiedad de la Entidad deberá ser autorizado ex-

presamente por el Ministerio de Trabajo. A estos efectos, en la escritura pública que se otorgue para la adquisición de dichos inmuebles, se hará constar la necesidad del cumplimiento de tal requisito; igualmente se hará constar tal circunstancia en la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad.

Art. 79. En el caso de que se acuerde la creación de una Obra asistencial o Institución que suponga inversiones permanentes no se podrá ejecutar dicho acuerdo sin la autorización expresa del Ministerio de Trabajo, el cual previamente estudiará la posible coordinación que pueda existir con proyectos análogos de otros Organismos o Instituciones.

Art. 80. El Montepío constituirá en cada ejercicio un fondo para prestaciones extrarreglamentarias, formado con el 2 por 100 de la cotización obtenida en el ejercicio anterior.

Dicho fondo se aplicará en la siguiente forma:

a) El 75 por 100 del importe procedente de cada provincia, a disposición de los Organos provinciales.

b) El 25 por 100 restante, a disposición de los Organos de Gobierno centrales. De este porcentaje se detraerá la cantidad que la Junta Rectora acuerde destinar a las atenciones previstas en el artículo 110.

Al finalizar cada ejercicio, el saldo del fondo de prestaciones extrarreglamentarias incrementará el del ejercicio siguiente.

Art. 81. Con los excedentes que resultaren después de constituir las reservas y fondos que se especifican en los artículos anteriores se formará un fondo de garantía, que se destinará a los fines que determine el Servicio de Mutualidades Laborales.

CAPITULO IV

Sistema contable

Art. 82. La Sede Central del Montepío organizará su contabilidad por el sistema de partida doble, desarrollándose en los siguientes libros:

- Libro Diario.
- Libro Mayor.
- Libro de Inventarios y Balances.
- Libro de Movimiento de Caja.
- Libro de cuentas corrientes con las Delegaciones.
- Libro de cuentas corrientes de Tesorería.
- Libro de cuentas técnicas.
- Registro de valores y reservas.
- Otros libros que la práctica haga necesarios.

Art. 83. Las Delegaciones Provinciales organizarán su contabilidad oficial por el mismo sistema que el de la Sede Central, y será común a todas las Instituciones que las Delegaciones representen.

TITULO V

Prestaciones

CAPITULO PRIMERO

De sus clases

Artículo 84. El Montepío concederá a sus beneficiarios las prestaciones que se enumeran a continuación, siempre que concurran las circunstancias y se cumplan los requisitos establecidos en los presentes Estatutos:

- Pensión por Jubilación.
- Pensión por Invalidez.
- Pensión o Subsidio de Viudedad.
- Pensión de Orfandad.
- Pensión por Larga Enfermedad.
- Auxilio por Defunción.
- Asistencia Sanitaria.
- Premio por Nupcialidad.
- Premio por Natalidad.

Art. 85. Asimismo la Institución concederá prestaciones extrarreglamentarias con los fondos previstos en el artículo 80 en las condiciones establecidas en la Orden de 13 de junio de 1950.

CAPITULO II

Pensión por jubilación

Art. 86. Se concederá una pensión vitalicia por jubilación a los socios beneficiarios que, al cesar en el servicio activo de las Empresas, reúnan las condiciones siguientes:

- Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.
- Tener una antigüedad mínima de diez años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.
- Tener cubierto el período mínimo de cotización que se preceptúa en el artículo 126 de estos Estatutos.
- Ser socio activo del Montepío.

Art. 87. También tendrán derecho a pensión por jubilación al cumplir los sesenta y cinco años de edad:

- Los pensionistas del Montepío por Larga Enfermedad.
- Los incapacitados por accidente de trabajo o enfermedad profesional indemnizable.

En ambos casos el beneficiario deberá reunir los requisitos de los apartados b), c) y d) del artículo anterior al tiempo de cesar en el trabajo activo por causa de accidente o enfermedad, y no le será computado el tiempo transcurrido desde aquel momento para determinar la cuantía de la pensión.

Art. 88. La cuantía de la pensión por jubilación dependerá de la edad del asociado y de su antigüedad laboral, determinándose conforme a la siguiente escala:

Con 10 años de antigüedad laboral, el 30 % del salario regulador.			
" 20 "	" "	40 %	" "
" 30 "	" "	50 %	" "
" 40 "	" "	60 %	" "
" 50 ó más años "	" "	70 %	" "

Si la total antigüedad laboral que se acredite se hallare comprendida entre dos de los periodos establecidos anteriormente, se aplicará el tanto por ciento que corresponda al periodo anterior, incrementándolo proporcio-

nalmente por cada año completo que excediere de dicho periodo. Se considerarán como año completo la fracción superior a seis meses. Si fuese inferior, no será tenida en cuenta.

El tanto por ciento que corresponda pli-

car conforme a la antigüedad laboral del asociado se verá, a su vez, incrementado en un 1 por 100 por cada año que el beneficiario se retrase en la solicitud de la pensión, con el tope del 5 por 100 de incremento, que se aplicará a los que se jubilen con setenta o más años.

Art. 89. La pensión de jubilación podrá ser solicitada con una antelación máxima de tres meses a la fecha en que el asociado desee disfrutarla. Caso de ser concedida la pensión, no producirá sus efectos hasta que el productor presente el certificado de baja definitiva en sus servicios profesionales.

Si el pensionista volviese a efectuar trabajo activo por cuenta ajena, se aplicará lo dispuesto en el artículo 17 de la Orden de 16 de mayo de 1950 (Ref. 422/50).

CAPITULO III

Pensión por invalidez

Art. 90. El Montepío concederá pensión vitalicia por invalidez a los socios beneficiarios que queden incapacitados absoluta y permanentemente para todo y con los requisitos y limitaciones que se establecen en este capítulo.

No tendrán derecho a este beneficio los asociados cuya incapacidad cause derecho a pensión, según la legislación de accidentes y enfermedades profesionales. No obstante, tendrán derecho a pensión por jubilación al cumplir los sesenta y cinco años de edad, según lo establecido en el artículo 87 de estos Estatutos.

Art. 91. Se concederá la pensión por invalidez al socio beneficiario que al tiempo de cesar en su trabajo reune los siguientes requisitos:

- a) Ser socio activo.
- b) Tener una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena. No se exigirá este requisito a los menores de diecinueve años.
- c) Tener cubierto un período de cotización de 500 días.

También se concederá esta pensión al asociado que quedare inválido siendo pensionista del Montepío por larga enfermedad y reune los requisitos de los apartados b) y c) al tiempo de cesar en el trabajo activo por causa de enfermedad.

Cuando la invalidez del asociado se haya producido por accidente o hecho súbito, la Junta Rectora podrá conceder pensión por invalidez sin que estén cubiertos los períodos mínimos de antigüedad y cotización, siempre que el asociado tenga efectuada la cotización anterior a la fecha del hecho causante.

Art. 92. La cuantía de la pensión de invalidez se determinará aplicando la escala establecida para la jubilación en el artículo 88, teniendo una cuantía mínima en todo caso, del 50 por 100 del salario regulador.

Art. 93. La pensión por invalidez quedará anulada si el beneficiario de la misma recobrara las condiciones físicas suficientes para realizar trabajo activo por cuenta ajena.

El Montepío revisará periódicamente los expedientes y se reserva el derecho de reconocimiento médico siempre que lo estime conveniente.

CAPITULO IV

Pensión o subsidio de viudedad

Art. 94. Causará derecho a la prestación de viudedad el socio beneficiario que reuniese a su fallecimiento las siguientes condiciones:

- a) Ser socio activo o pensionista de la Institución.
- b) Tener una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.
- c) Tener cubierto un período de cotización de 500 días.

Art. 95. Tendrá derecho al percibo de esta prestación la viuda del socio beneficiario fallecido que reuniese las siguientes condiciones:

- a) Haber contraído matrimonio con el socio causante con un año de antelación, por lo menos, a la fecha del fallecimiento. No se exigirá este requisito cuando quedaren hijos del matrimonio.

- b) Haber hecho vida conyugal con el causante hasta su muerte; o que en caso de separación careciese de culpabilidad.

- c) No haber abandonado a sus hijos y observar una conducta honesta y moral.

Art. 96. La naturaleza y cuantía de la prestación de viudedad, se determinará conforme a las siguientes normas:

- a) Viudas menores de cuarenta años de edad, sin hijos con derecho a pensión de orfandad y no incapacitados para el trabajo:

- 1.ª Si el causante fuese socio activo o pensionista por larga enfermedad: entrega de un capital consistente en veinticuatro mensualidades del salario regulador.

- 2.ª Si el causante fuese pensionista por jubilación o invalidez: entrega de un capital consistente en veinticuatro mensualidades de la pensión que aquél estuviese percibiendo.

- b) Viudas menores de cuarenta años, o menores de esta edad, pero con hijos con derecho a orfandad, o incapacitadas para el trabajo:

- 1.ª Si el causante fuese socio activo o pensionista por larga enfermedad: Pensión vitalicia de cuantía igual al 50 por 100 de la que por jubilación hubiera correspondido al causante al tiempo de su fallecimiento; la pensión de viudedad tendrá un importe mínimo del 25 por 100 del salario regulador.

- 2.ª Si el causante fuese pensionista por jubilación o invalidez: Pensión vitalicia de cuantía igual al 50 por 100 de la pensión que estuviese percibiendo el fallecido con igual importe mínimo.

Si la interesada tuviera derecho o estuviera percibiendo cualquier otra pensión de ésta u otra Institución de Previsión Laboral, sólo percibirá la de viudedad en cuantía que sumada a la anterior, no rebase el 100 por 100 del salario regulador del causante. Si la viuda dejase de percibir aquella pensión por cesar su derecho, percibirá la de viudedad en su cuantía total.

Art. 97. La viuda dejará de percibir la pensión por las causas siguientes:

- a) Contraer nuevas nupcias o adquirir estado religioso.
- b) Abandono comprobado de los hijos menores sometidos a su tutela.
- c) Observar una conducta deshonesto o inmoral.

Art. 98. Cuando el socio fallecido fuera

el viudo tendrá derecho a los beneficios que se establecen en este capítulo, siempre que se hallare incapacitado absoluta y permanentemente para toda clase de trabajo y no perciba pensión derivada de la legislación de accidentes del trabajo y enfermedad profesional, o del Mutulismo Laboral Obligatorio, y el socio fallecido reuniese las condiciones generales previstas para esta prestación. El viudo beneficiario dejará de percibir este beneficio si desapareciesen las causas de su incapacidad.

CAPITULO V

Pensión de orfandad

Art. 99. Causará derecho a esta pensión el socio beneficiario, varón o hembra, que reuniera a su fallecimiento las siguientes condiciones:

a) Ser socio activo o pensionista del Montepío.

b) Tener una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.

Art. 100. Tendrán derecho al percibo de esta prestación:

a) Los hijos legítimos —incluso los póstumos— legitimados, naturales reconocidos y adoptivos del asociado fallecido.

b) Los hijos legítimos, legitimados, naturales reconocidos y adoptivos que la viuda del asociado fallecido hubiese llevado al matrimonio, siempre que viviesen a expensas de aquél y no disfruten pensión de otra Institución de Previsión Laboral.

Los beneficiarios comprendidos en los apartados anteriores deberán reunir, al tiempo del fallecimiento del asociado causante, los requisitos de ser menores de dieciséis años o incapacitados de manera absoluta para el trabajo que no perciban ninguna otra pensión por este concepto.

Art. 101. La cuantía de la pensión de orfandad, cuando al mismo tiempo haya sido concedida prestación de viudedad, será del 10 por 100 del salario regulador del causante, por cada uno de los huérfanos con derecho a la misma. Como mínimo será de 75 pesetas mensuales por cada huérfano.

En caso de fallecimiento de la madre o padre viudo que percibiese pensión de viudedad, se revisará la cuantía de la orfandad, que se regulará por las siguientes normas:

a) A uno de los huérfanos se le acreditará la que por viudedad percibiese el padre o madre fallecido.

b) A los demás huérfanos se les acreditará el 10 por 100 a que se refiere el primer párrafo del presente artículo.

c) La suma total de las cantidades de los dos párrafos anteriores se dividirá por el número de beneficiarios.

d) Por cada beneficiario a quien se extinga el derecho se reducirá la suma dicha en un 10 por 100 del salario regulador del causante, ó 75 pesetas, según corresponda.

e) El último huérfano con derecho a pensión será el que conserve la de viudedad.

Art. 102. Cuando al fallecimiento del causante se produjese la orfandad absoluta, la prestación que corresponda a los huérfanos se dirigirá por lo establecido en el último párrafo del artículo anterior.

Por el contrario, si al fallecer el causante el otro cónyuge no tuviera derecho a pensión de viudedad, los huérfanos percibirán la pen-

sión en la cuantía establecida en el párrafo primero del artículo anterior.

Art. 103. En caso de orfandad absoluta la pensión se otorgará sin exigir periodos de antigüedad ni cotización en el socio causante fallecido, requiriéndose tan solo que tuviera la condición de socio activo o pensionista del Montepío al tiempo de su fallecimiento.

Art. 104. La pensión de orfandad se extinguirá cuando el beneficiario cumpliera la edad de dieciséis años o cesare la incapacidad, por su fallecimiento o por adquirir estado matrimonial o religioso. No obstante, continuarán percibiendo esta pensión después de cumplidos los dieciséis años, en el supuesto de que estuvieren realizando estudios oficiales que no pudieran costeárselos los familiares que los tuviesen a su cargo. Estos casos necesitarán la especial aprobación de la Junta Rectora, que juzgarán, a la vista de informes concretos y detallados y rigurosos y teniendo en cuenta muy especialmente el aprovechamiento y aptitud de los interesados.

Art. 105. Las pensiones de orfandad se entregarán al padre, madre, parientes o personas que acrediten los siguientes extremos:

a) Que el beneficiario viva en su compañía y a sus expensas al tiempo de solicitar la pensión.

b) Que en lo sucesivo se continuarán encargando del mantenimiento, educación y formación profesional de los huérfanos, lo que comprobará periódicamente el Montepío en la forma que considere más oportuna.

Art. 106. Si los huérfanos estuvieran totalmente abandonados, o las personas que los tengan a su cargo no mereciesen la confianza suficiente del Montepío, la Comisión Provincial Permanente que corresponda se constituirá en patronato tutelar de los mismos, sin perjuicio de lo que disponga la legislación vigente, y propondrá a la Junta Rectora las medidas que deban adoptarse para la mejor protección de los huérfanos hasta que cumplan los dieciséis años o cesarse la incapacidad, y que podrá consistir en la concesión de becas, ingreso en Colegios o Instituciones de Beneficencia, Escuelas de Aprendices u otras medidas análogas.

Esta propuesta deberá comprender, después de la exposición de motivos, un cálculo de los gastos que la protección de dichos huérfanos pueda ocasionar a la Institución.

CAPITULO VI

Pensión por larga enfermedad

Art. 107. Se concederá un auxilio por larga enfermedad a los socios beneficiarios que temporalmente estuvieran imposibilitados totalmente para el trabajo por causa de enfermedad y siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que hubieran agotado los plazos de disfrute del Seguro Obligatorio de Enfermedad o que hubiere transcurrido el plazo de veintiséis semanas si no hubiesen hecho uso o no se hallaren afiliados a dicho Seguro.

b) Que la enfermedad que los imposibilita totalmente para el trabajo no tenga carácter indemnizable y sea diagnosticada por los facultativos especialistas que designe el Montepío, cuando éste lo considere conveniente.

c) Que cumplan rigurosamente las prescripciones facultativas de los Médicos que los asistan; en caso de contravenir el plan o ré-

gimen de vida establecido por éstos perderán automáticamente el derecho a este auxilio.

d) Que el asociado tuviera una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.

No se exigirá este requisito a los productores menores de veinte años, siempre que la enfermedad hubiese sido contraída con posterioridad a su ingreso como asociado.

e) Que tenga cubierto el período mínimo de cotización que preceptúa el artículo 126 de estos Estatutos.

Se exceptúan los menores de veinte años a que se refiere el apartado anterior, a quienes sólo se exigirá un período mínimo de seis meses de cotización.

Art. 108. La cuantía de la pensión por larga enfermedad será equivalente al 50 por 100 del salario regulador.

Art. 109. Los períodos máximos por los que se concederá este auxilio serán los siguientes:

a) En el primer año de enfermedad, veintiséis semanas como máximo.

b) En el segundo año de enfermedad, cincuenta y dos semanas como máximo.

c) En el tercer año, cincuenta y dos semanas como máximo.

Art. 110. Agotados los plazos de duración a que se refiere el artículo anterior, el beneficiario que continuare enfermo será sometido a reconocimiento médico, y la Junta Rectora podrá acordar que se prolongue la percepción de la pensión, siempre que ello fuera posible por existir el remanente necesario en el fondo especial, que se establece a continuación:

Para cubrir estas atenciones se constituirá anualmente un fondo especial, formado por la cantidad que del fondo de que la Junta Rectora dispone para prestaciones extrarreglamentarias acuerde destinar a este fin, y con la parte de intereses que excedan del 3,5 por 100 de los producidos por el patrimonio de la Institución en el año anterior.

CAPITULO VII

Auxilio por defunción

Art. 111. Al ocurrir el fallecimiento de un asociado en activo o pensionista por jubilación, invalidez o larga enfermedad, se concederá un auxilio para gastos de entierro y sufragios en cuantía de 1.000 pesetas.

Art. 112. Para causar derecho a este auxilio el asociado fallecido no necesitará reunir otros requisitos que los de ser socio activo o tener la consideración de pensionista por jubilación, invalidez o larga enfermedad.

Art. 113. La cantidad señalada anteriormente se entregará inmediatamente después de ocurrir el fallecimiento a los familiares más próximos, parientes o personas que convivieran con el socio fallecido. Si no existiera ninguna de las personas señaladas anteriormente que pudiera atender al sepelio, la Comisión Provincial Permanente designará a uno de sus miembros, que se encargará de la organización del entierro y de los sufragios por el alma del fallecido.

CAPITULO VIII

Asistencia sanitaria

Art. 114. El Montepío concederá la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica a

sus pensionistas y familiares que convivieren con ellos y a sus expensas con anterioridad a la solicitud de la pensión y reúnan, además, las condiciones siguientes:

a) Si el pensionista hubiese estado inscrito en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, los familiares con derecho a esta prestación serán los inscritos en la cartilla de dicho Seguro al tiempo de solicitar la pensión, así como los hijos que naciesen posteriormente.

b) Si el pensionista no pertenecía al Seguro Obligatorio de Enfermedad tendrán derecho los familiares comprendidos dentro del tercer grado de consaguinidad y los hijos que naciesen posteriormente.

Art. 115. A los efectos de este beneficio, el Montepío, al conceder una pensión, vendrá obligado a notificar a los interesados el procedimiento que tenga establecido para la efectividad del mismo, sin que para ello sea precisa solicitud alguna por parte de los beneficiarios.

Art. 116. Los familiares de los pensionistas dejarán de disfrutar este beneficio tan pronto tengan obligación de estar inscritos en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, dejen de convivir con el asociado o cuando, por cualquier circunstancia, el pensionista deje de tener esta condición.

Art. 117. El Montepío coordinará sus servicios de asistencia sanitaria con los establecidos por otros Montepíos o Mutualidades, con los del Estado, Instituciones de Previsión y Organización Sindical.

CAPITULO IX

Premio por nupcialidad

Art. 118. El socio activo que contraiga matrimonio tendrá derecho a un premio de nupcialidad. Este premio podrá ser solicitado con quince días de antelación a la fecha en que vaya a efectuarse el matrimonio. También se concederá en caso de contraer estado religioso.

La cuantía del premio será de 1.000 pesetas y no podrá percibirse más que una sola vez por cada asociado.

Art. 119. Para otorgar esta prestación se precisará que el asociado beneficiario reúna los siguientes requisitos:

a) Ser socio activo del Montepío. En el caso de ser mujer el socio beneficiario que solicite el premio por matrimonio bastará con que haya sido socio activo hasta dos meses antes de la fecha de su matrimonio, por haber cesado en la empresa en la que prestaba sus servicios.

b) Tener una antigüedad laboral mínima de cinco años.

c) Tener cubierto el período de cotización previsto en el artículo 126 de estos Estatutos.

CAPITULO X

Premio de natalidad

Art. 120. Los socios beneficiarios tendrán derecho a la percepción de un premio de natalidad, consistente en 500 pesetas, por cada hijo que les nazca, con la condición de legítimos o fueran legitimados por subsiguiente matrimonio de los padres, y reúnan los requisitos establecidos en el artículo 30 del Código Civil.

En aquellos casos en que los hijos nacidos no alcanzasen la viabilidad legal, quedará al

justo criterio de la Junta Rectora la concesión o denegación del referido premio.

Para percibir esta prestación son requisitos indispensables los señalados en el artículo anterior y acreditar, fehacientemente, el hecho del nacimiento del hijo y el matrimonio de los padres.

CAPITULO XI

Disposiciones comunes a todas las prestaciones

Art. 121. Los beneficios que concede esta Institución son compatibles con los derivados de los Seguros Sociales Obligatorios y con los que puedan concederse por el Estado, Corporaciones, Compañías de Seguros y Empresas, con las excepciones derivadas de las disposiciones contenidas en los presentes Estatutos.

Art. 122. Los afiliados que obligatoriamente coticen a ésta y a otra u otras Instituciones de Previsión Laboral, o a este Montepío por dos o más Empresas, tendrán derecho a percibir las prestaciones en las condiciones previstas en el artículo 18 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Los que sean baja en esta Institución por pasar a pertenecer a otra, podrán percibir las prestaciones señaladas en estos Estatutos cuando concurren las circunstancias y se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 21 de la Orden de 16 de mayo de 1950 (Referencia 422/50).

Art. 123. Las prestaciones que concede el Montepío tienen carácter personal e intransferible y, en consecuencia, no podrán ser embargadas, objeto de cesión total o parcial ni servir de garantía de ninguna obligación.

Art. 124. Tendrán la consideración de socios efectivos de la Institución todas aquellas personas que presten sus servicios por cuenta ajena en actividades encuadradas en este Montepío.

Art. 125. Asimismo conservarán la condición de socios activos quienes, habiendo tenido este carácter, dejen de prestar sus servicios por cuenta ajena por alguna de las siguientes causas:

- a) Por enfermedad ininterrumpida.
- b) Por hallarse prestando el servicio militar.
- c) Por paro involuntario.

La concesión de prestaciones a quienes se encuentren en alguna de las situaciones previstas en los apartados anteriores, se sujetará a lo dispuesto en los artículos 20 y 22 de la Orden de 16 de mayo de 1950 y en la Orden de 24 de julio del mismo año (Ref. 652/50).

Art. 126. Para causar derecho a aquellas prestaciones que no tengan establecido de forma concreta el período de carencia exigible, será preciso que el asociado haya cotizado al Montepío durante un período de tiempo igual a la mitad del comprendido entre la fecha inicial de cotización en el sector laboral a que el asociado pertenezca y aquella otra en que se produzca el hecho causante de la prestación.

Como excepción a esta regla, el período mínimo de cotización será en todo caso de seis meses, durante el primer año de obligatoriedad en la cotización de cada sector laboral. A partir de la fecha en que se cumplan diez años de obligatoriedad de cotización, el pe-

riodo exigible será de cinco años mientras no se disponga otra cosa.

Art. 127. Se considerará como antigüedad laboral aquella que se acredite de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 128. El salario regulador para la concesión de prestaciones se hallará en la forma prevista en el artículo 25 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 129. Si las prestaciones concedidas por la Institución resultarán de cuantía superior a la que corresponda, como consecuencia de falsedad de las Empresas en las declaraciones que formulen a estos efectos, el Montepío podrá reclamar a la Empresa las diferencias resultantes ante la jurisdicción competente.

Si por la misma causa de falsedad de la Empresa en dichas declaraciones la prestación concedida fuese inferior a la que realmente corresponda, el productor perjudicado podrá reclamar contra la Empresa por el perjuicio sufrido.

Art. 130. Las prestaciones que la Institución otorga deberán solicitarse dentro de los plazos previstos en el artículo 26 de la Orden de 16 de mayo de 1950, utilizando los modelos que aquella tenga establecidos y acompañando los documentos que para cada caso se señalen.

Art. 131. Las prestaciones que se establecen en los presentes Estatutos no podrán satisfacerse por el Montepío si la Empresa, en el momento en que deben ser abonadas, no estuviere al corriente en el pago de todas las cotizaciones exigibles a la misma.

En estos casos se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 12 al 16 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 132. El devengo de las pensiones que conceda el Montepío se iniciará y finalizará de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 133. Los socios beneficiarios a quienes les haya sido concedida alguna prestación en virtud de declaraciones falsas o inexactas de los mismos, no tendrán derecho a su percibo. En el caso de que hubiesen percibido ya su importe, estarán obligados a su devolución, sin perjuicio de las sanciones a que hubiese lugar.

Art. 134. Las cantidades que correspondan a los beneficiarios por cualquiera de las prestaciones otorgadas por esta Institución podrán ser percibidas por aquéllos en la Empresa donde últimamente hubieran prestado sus servicios o en aquella otra que se halle más cerca de su domicilio, siempre que la organización del Montepío lo permita y así convenga.

Art. 135. Las mensualidades que un pensionista tuviera pendientes de cobro al tiempo de su fallecimiento se entregarán a la esposa, hijos, padres sexagenarios y familiares más próximos que conviviesen con el fallecido, previa la justificación que los Organos del Montepío considere oportuna, en cada caso.

La misma norma se aplicará respecto de cualesquiera prestaciones que un asociado tuviera pendientes de cobro al tiempo de su fallecimiento.

A falta de los citados familiares el importe de las pensiones o prestaciones revertirá al Montepío.

TITULO VI

Régimen disciplinario

CAPITULO PRIMERO

De las faltas y sus sanciones

Art. 136. Constituirán falta y darán lugar a la imposición de sanciones los siguientes hechos:

1.º Defraudar a sabiendas los intereses del Montepío o poner voluntariamente los medios que conduzcan a tal fin.

2.º Falsear las declaraciones ordinarias y extraordinarias que se hagan ante el Montepío o aportar datos inexactos al mismo, bien en orden a la concesión de beneficios o con respecto a otra cualesquiera manifestaciones de las actividades de esta Entidad.

3.º Realizar actos indecorosos o perjudiciales para la reputación o el buen crédito del Montepío.

4.º Entorpecer, intencionadamente, las actividades del Montepío. Se considerarán comprendidos en este apartado los que, habiendo sido elegidos Vocales de la Junta Rectora o restantes Organos de Gobierno, no asistan a sus reuniones o no presten la colaboración debida.

5.º No observar las normas, disposiciones o acuerdos emanados de los Organos competentes del Montepío, relativos al cumplimiento de sus fines o al buen desarrollo y orden de su actividad.

Art. 137. Las sanciones que podrá imponer el Montepío a sus asociados serán las consignadas en la siguiente escala:

1.º Apercibimiento privado, consistente en comunicación verbal o escrito al sancionado.

2.º Apercibimiento público. El grado de publicidad que proceda dar a esta sanción se determinará en cada caso por el Organo sancionador.

3.º Inhabilitación temporal para formar parte de los Organos de Gobierno de la Institución, u ocupar cargos de la misma. Esta sanción se entenderá por un tiempo comprendido entre los dos y los cinco años.

4.º Inhabilitación permanente para formar parte de los Organos de Gobierno de la Institución.

5.º Multa de veinticinco a cinco mil pesetas. Cuando se trate de un socio beneficiario la sanción se hará efectiva mediante descuento en los salarios del sancionado, cuya cuantía será fijada por la Junta Rectora, sin exceder del 2,5 por 100.

Si antes de completar el pago de la multa fuese concedida al sancionado alguna prestación de entrega de capital, se deducirá de su importe lo necesario para hacer efectiva la sanción. Si se tratase de pensiones se deducirá de cada mensualidad un 25 por 100 hasta completar dicho pago.

Asimismo, la Comisión Permanente Nacional podrá acordar se suspenda la efectividad de una pensión, en tanto se resuelva lo que corresponda, en los casos en que se hubieran producido anomalías en la tramitación del expediente o falsedades en los documentos aportados al mismo, así como cuando los beneficiarios de aquélla no cumplan

los requisitos establecidos en estos Estatutos para su percepción.

Art. 138. Siempre que haya de imponerse una sanción se atenderá para la determinación de la misma, en cada caso, a la gravedad de la falta cometida, al perjuicio que haya ocasionado o que haya pretendido ocasionar el sancionado, al criterio adoptado en resoluciones recaídas en casos anteriores y análogos y cualquiera otras circunstancias que deban tenerse en cuenta, a juicio del Organo sancionador.

CAPITULO II

Procedimiento y competencia para la imposición de sanciones

Art. 139. La imposición de sanciones será de competencia de la Junta Rectora.

Art. 140. Las Comisiones Provinciales Permanentes, tan pronto tengan conocimiento de haberse realizado algún hecho constitutivo de falta, lo pondrán en conocimiento de la Junta Rectora en escrito razonado, en el que expondrán los hechos y circunstancias anejas, proponiendo la oportuna sanción.

En la primera reunión que celebre la Junta Rectora después de recibir el expediente incoado, se pronunciará por la sanción que corresponde o declarará la no existencia de responsabilidad, devolviendo el expediente, una vez tomada debida nota, a la Comisión de procedencia, a los fines de su oportuno archivo y efectos.

Art. 141. En los casos en que la Junta Rectora o Asamblea General observasen posibles faltas sancionables entre los componentes de los Organos de Gobierno subordinados acomodarán sus procedimientos al enunciado en los artículos precedentes, pudiendo suspender en sus funciones a los miembros de las Comisiones o Junta Rectora, según los casos, interin se sustancia el oportuno expediente, dando cuenta de la medida a la Jefatura del Servicio.

TITULO VII

De los recursos contra los acuerdos de los Organos de Gobierno

Art. 142. Como trámite previo a la iniciación de las reclamaciones en vía contenciosa ante la Magistratura de Trabajo, podrán los interesados recurrir contra los acuerdos de los Organos de Gobierno, en las condiciones y cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 29, 30 y 31 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

TITULO VIII

De la inspección e intervención

Art. 143. La inspección, vigilancia e intervención del cumplimiento por el Montepío, Empresas y productores beneficiarios de las obligaciones de este Estatuto derivadas, está a cargo del Ministerio de Trabajo a través del Servicio de Mutualidades Laborales, Inspección Técnica de Previsión, Delegaciones Provinciales de Trabajo e Inspección Nacional de Trabajo, quienes podrán, cuando corresponda, imponer sanciones con arreglo a las disposiciones vigentes.

TITULO IX

Disposiciones generales

Art. 144. Para que el Montepío pueda proponer la reforma de estos Estatutos, será preciso que exista la conformidad de la mitad más uno de los miembros de la Asamblea General, en sesión convocada al efecto.

Art. 145. Cualquier modificación de estos Estatutos habrá de ser aprobada por el Ministerio de Trabajo, previo informe del Servicio de Mutualidades Laborales, a quien asimismo corresponde la interpretación de este texto.

Art. 146. El Montepío, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la celebración de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional, remitirá certificación de los acuerdos adoptados al Servicio de Mutualidades Laborales. Dichos acuerdos, para que tengan validez, serán confirmados por el Servicio de Mutualidades Laborales, antes de haber transcurrido los quince días siguientes a su recepción.

Se considerarán válidos los referidos acuerdos si después de transcurrido el plazo señalado, el indicado Servicio no hubiera hecho uso del derecho de veto.

La certificación de los acuerdos adoptados por las Comisiones Provinciales se remitirá, en los mismos plazos y a los mismos efectos señalados en este artículo, al inmediato Organó jerárquico nacional.

Art. 147. Los acuerdos de los Organos de Gobierno serán válidos y firmes una vez adoptados, salvo los que sobre veto del Servicio se establece en el artículo anterior sin necesidad de esperar a la aprobación del acta en sesión posterior.

DISPOSICION FINAL

Los presentes Estatutos comenzarán a regir el día 1 de abril de 1952, y se aplicarán íntegramente a las prestaciones causadas desde dicha fecha.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Todos los expedientes de prestaciones, instruidos y resueltos a tenor de las normas contenidas en los Estatutos de 31 de enero de 1949 (Refs. 43/49, 59/49 y 88/49), se considerarán firmes en su resolución.

Segunda.—Los derechos a prestaciones nacidos en virtud de hechos acaecidos con anterioridad al 1 de abril de 1952 y cuyos expe-

dientes no hayan sido iniciados o resueltos se registrarán por las normas contenidas en los Estatutos aplicables en la fecha de los hechos causantes.

207 REGLAMENTO DE TRABAJO.—INDUSTRIAS DE LA MADERA

Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 4 de abril de 1952, B. O. del E. número 109, de 18 de abril de 1952.

I. FABRICAS DE CESTERIA Y OBJETOS DE MIMBRE.—Se modifican los artículos 21 y 61, sobre categorías profesionales y salarios del personal de las fábricas y talleres de cestería y objetos de mimbre.

II. TEXTO LITERAL.—La práctica viene demostrando la conveniencia de modificar el Cuadro profesional que se establece para las fábricas o talleres de cestería y objetos de mimbre en la Reglamentación Nacional de Trabajo para las industrias de la madera volviendo a la clásica distinción de Oficial de primera, segunda y ayudantes, y asimismo a reducir para dichos trabajos a dos años el período de aprendizaje, tiempo que se estima bastante para adquirir en el oficio una perfecta capacitación profesional.

En su virtud, y en uso de las facultades a mí conferidas,

Esta Dirección General ha tenido a bien modificar el Cuadro profesional reajustando como consecuencia la Tabla de Salarios del personal empleado en las fábricas o talleres de cestería y objetos de mimbre a que se hace referencia en los artículos 21 y 61 de la Reglamentación Nacional de Trabajo, de 3 de febrero de 1947, en la forma siguiente:

Artículo 21. Cestería y objetos de mimbre.—Oficial 1.º—Es el operario que realiza toda clase de objetos de cestería y mimbre conociendo su proceso industrial y empezando y terminando completamente los mismos.

Oficial 2.º—Es el operario que sin los conocimientos del anterior realiza parte de dichos trabajos.

Ayudante.—Es el operario que ayuda en su cometido a los Oficiales antes mencionados siguiendo sus instrucciones.

Aprendiz.—Es aquel que, mediante el oportuno contrato ingresa en el taller para aprender el oficio. La duración del aprendizaje será de dos años.

Art. 61. Cestería y objetos de mimbre.—Salarios.

	Zona especial	Zona 1.ª	Zona 2.ª	Zona 3.ª
Oficial 1.º	21,00	19,55	18,15	16,75
Oficial 2.º	19,00	16,50	15,00	14,00
Ayudante	16,00	14,90	13,80	12,70
Aprendiz. {	Primer año	5,00	4,00	3,50
	Segundo año ...	9,25	8,60	7,95

208 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—INDUSTRIAS QUIMICAS

Orden del Ministerio de Trabajo de 24 de marzo de 1952, B. O. del E. núm. 110, del 19 de abril de 1952.

I. ESTATUTOS.—Se aprueban los nuevos Estatutos del Montepío Interprovincial de Previsión Social de los Trabajadores en las Industrias Químicas, con sujeción al siguiente índice general.

Orden Ministerial.—Aprobación de los nuevos Estatutos con efectos desde el 1.º de abril de 1952 y derogación de los anterio-

res (art. 1.º). Derogación de la Orden Ministerial de 12 de abril de 1947, sobre prestaciones del personal no fijo de la industria resinera (art. 2.º) y Normas transitorias (art. 3.º).

Título I.—Naturaleza y extensión del Montepío (arts. 1 al 7).

Título II.—De los socios beneficiarios.

Capítulo I.—De las clases de socios (art. 8.º). *Capítulo II.—De los socios protectores* (art. 9.º). *Sección 1.ª—De los socios protectores obligatorios* (arts. 10 al 12). *Sección 2.ª—De los socios protectores voluntarios* (arts. 13 y 14). *Capítulo III.—De los socios beneficiarios* (arts. 15 al 18). *Capítulo IV.—De los demás beneficiarios* (art. 19).

Título III.—Organización y funcionamiento.

Capítulo I.—Del Gobierno del Montepío (arts. 20 al 25). *Capítulo II.—De los Organos de Gobierno nacionales.* *Sección 1.ª—De la Asamblea General* (arts. 26 al 37). *Sección 2.ª—De la Junta Rectora* (arts. 38 al 43). *Sección 3.ª—De la Comisión Permanente Interprovincial* (arts. 44 al 47). *Sección 4.ª—Del Presidente, Vicepresidente y Secretario de Actas* (arts. 48 al 51). *Capítulo III.—De los Organos de Gobierno Provinciales* (arts. 52 al 57). *Capítulo IV.—De los Organos Ejecutivos del Montepío.* *Sección 1.ª—Del Director* (art. 58). *Sección 2.ª—Del Delegado Provincial* (artículos 59 y 60).

Título IV.—Régimen económico. *Capítulo I.—Recursos económicos* (arts. 61 al 71). *Capítulo II.—Presupuestos y gastos* (arts. 72 al 74). *Capítulo III.—De las reservas* (arts. 75 al 81). *Capítulo IV.—Sistema contable* (artículos 82 y 83).

Título V.—Prestaciones. *Capítulo I.—De sus clases* (arts. 84 y 85). *Capítulo II.—Pensión por jubilación* (arts. 86 al 89). *Capítulo III.—Pensión de invalidez* (arts. 90 al 93). *Capítulo IV.—Pensión o subsidio de viudedad* (arts. 94 al 98). *Capítulo V.—Pensión de orfandad* (artículos 99 al 106). *Capítulo VI.—Pensión por larga enfermedad* (arts. 107 al 110). *Capítulo VII.—Auxilio por defunción* (arts. 111 al 113). *Capítulo VIII.—Asistencia sanitaria* (arts. 114 al 117). *Capítulo IX.—Premio por nupcialidad* (arts. 118 y 119). *Capítulo X.—Indemnización especial* (art. 120). *Capítulo XI.—Disposiciones comunes a todas las prestaciones* (arts. 121 al 135).

Título VI.—Régimen disciplinario. *Capítulo I.—De las faltas y sus sanciones* (artículos 136 al 138). *Capítulo II.—Procedimiento y competencia para la imposición de sanciones* (arts. 139 al 141).

Título VII.—De los recursos contra los acuerdos de los Organos de Gobierno (art. 142).

Título VIII.—De la inspección e intervención (art. 143).

Título IX.—Disposiciones generales. *Reforma y modificación de los Estatutos* (artículos 144 y 145). *Eficacia de los acuerdos de los Organos de Gobierno* (arts. 146 y 147). *Disposición final. Fecha de entrada en vigor.* *Disposiciones transitorias.*

II TEXTO LITERAL.—En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 20 de junio de 1947, que modificó la Reglamentación Nacional de Trabajo de Química Industrial, quedaron constituidos los Montepíos Interprovinciales de Previsión Social de los Trabajadores

en las Industrias Químicas, cuyos Estatutos iniciales fueron aprobados por Orden ministerial de 11 de octubre de 1947.

Considerando como superado el período de organización de dichas Instituciones y alcanzada que fué la amplia base técnica que permitió posteriores estudios de modificación, se promulgaron con fecha de 30 de marzo de 1950 (Ref. 316/50) los segundos Estatutos para los referidos Montepíos.

Con posterioridad, y por distintas Ordenes ministeriales, se han incorporado a estas Instituciones nutridos censos de nuevos afiliados procedentes de diferentes sectores laborales, y siendo ambición permanente de este Ministerio el paulatino mejoramiento de los regímenes de previsión mutualista, atemperando los capítulos de prestaciones al máximo de las posibilidades que la situación económica y actual permita, se ha tendido a establecer las condiciones más beneficiosas, así como hacer partícipes del capítulo general de prestaciones a los trabajadores no fijos de la industria resinera, que se regían por un régimen especial mucho más modesto. Todo ello a la vista de la normal duración de la campaña laboral de dichos trabajadores y consiguientemente importancia de la colización que aportan.

Vistos los proyectos de reforma de los Estatutos en la actualidad vigentes aprobados por las Asambleas Generales de los Montepíos Interprovinciales de las Industrias Químicas, las conclusiones adoptadas por la Conferencia celebrada por sus representantes y los estudios realizados por el Servicio de Mutualidades Laborales, a su propuesta.

Este Ministerio ha tenido a bien resolver:

Artículo 1.º Se aprueban los nuevos Estatutos de los Montepíos Interprovinciales de Previsión Social de los Trabajadores en las Industrias Químicas, que comenzarán a regir el día 1 de abril de 1952, en sustitución de los actuales de 30 de marzo de 1950, que quedarán derogados en dicha fecha.

Art. 2.º En la fecha indicada quedará asimismo derogada la Orden ministerial de 12 de diciembre de 1947, aprobatoria del capítulo de prestaciones para los trabajadores no fijos de la industria resinera, que pasarán a regirse en todas sus partes por los Estatutos generales de la Institución.

Art. 3.º Los derechos a prestaciones nacidos en virtud de hechos acaecidos con anterioridad al 1 de abril de 1952, se regularán en cuanto a clases, cuantía y requisitos de las prestaciones, conforme a las normas contenidas en los Estatutos de 11 de octubre de 1947, 30 de marzo de 1950 y capítulo especial de prestaciones de 12 de diciembre de 1947, según corresponda, de acuerdo con las fechas de los hechos causantes y cualquiera que sea la de su solicitud.

ESTATUTOS DEL MONTEPIO INTER- PROVINCIAL DE PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES EN LAS IN- DUSTRIAS QUIMICAS, APROBADOS POR ORDEN MINISTERIAL DE 24 DE MARZO DE 1952

TITULO PRIMERO

Naturaleza y extensión del Montepío

Artículo 1.º El Montepío Interprovincial de Previsión Social de los Trabajadores en las In-

dustrias Químicas, constituidos en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ministerial de 20 de junio de 1947, se registrará por los presentes Estatutos y disposiciones sobre Mutualidades y Montepíos Laborales. Esta Institución podrá utilizar la denominación abreviada de "Montepío Interprovincial de Industrias Químicas".

Art. 2.º Esta Entidad tiene por objeto el ejercicio de la previsión social, siendo sus fines la más amplia protección y ayuda a sus asociados y familiares contra circunstancias fortuitas y previsibles, en la forma que disponen los presentes Estatutos, y de acuerdo con las órdenes y disposiciones que por el Ministerio de Trabajo se dicten por la concesión de beneficios que deba otorgar la entidad en atención a sus posibilidades económicas.

El Montepío no podrá ejercer más actividades que las de Previsión Social autorizadas o que se autoricen por el Ministerio de Trabajo.

Art. 3.º La duración de esta Entidad será indefinida.

Su disolución o incorporación a otro Montepío o Mutualidad de Previsión Laboral corresponderá al Ministerio de Trabajo, mediante disposición expresa.

Art. 4.º La jurisdicción territorial de la Institución y el lugar de su domicilio social serán los establecidos expresamente por el Ministerio de Trabajo, que podrá modificar dichos supuestos si lo estima conveniente para los intereses mutualistas.

Art. 5.º En este Montepío estarán encuadrados las Empresas y trabajadores afectados por las siguientes Reglamentaciones de Trabajo:

- Industrias Químicas.
- Industrias Resineras.
- Industrias de Material Plástico y Resinas Sintéticas.
- Industrias Fotográficas.
- Fábricas de botones, artículos de Vestido y Tocado y Juguetería de Celuloide.
- Industrias del Fósforo.
- Industrias de Muñecas de Cartón.
- Factorías Bacaladeras.

El Ministerio de Trabajo podrá disponer que den incorporados a este Montepío las Empresas y trabajadores afectados por otras Ordenanzas Laborales. También podrá acordar la segregación de Sectores Laborales en él encuadrados, por razones sociales económicas.

Art. 6.º El Montepío Interprovincial de Previsión Social de los Trabajadores en las Industrias Químicas tiene personalidad jurídica y, en consecuencia, gozará de capacidad plena para adquirir, poseer, gravar y enajenar bienes, así como realizar toda clase de actos y contratos relacionados con sus fines, sin más limitaciones que las establecidas en las disposiciones vigentes o que puedan establecerse en el futuro. Igualmente podrá promover y seguir los procedimientos que fueren oportunos y ejercitar los derechos y acciones que les correspondan ante los Juzgados y Tribunales de Justicia, ordinarios y especiales y Organismos y Dependencias de la Administración Pública.

Art. 7.º Esta Entidad estará sometida a la jurisdicción del Ministerio de Trabajo quien ejercerá sobre ella su ordenación, tutela, inspección e intervención a través de los Organismos competentes.

TITULO II

De los socios beneficiarios

CAPITULO PRIMERO

De las clases de socios

Art. 8.º Los socios de la Institución se clasifican en socios protectores y socios beneficiarios.

CAPITULO II

De los socios protectores

Art. 9.º Los socios protectores podrán ser:

- a) Socios protectores obligatorios.
- b) Socios protectores voluntarios.

SECCIÓN 1.ª—De los socios protectores obligatorios

Art. 10. Serán socios protectores obligatorios todas las Empresas a las que se refiere el artículo quinto de los Estatutos que, en virtud de las disposiciones aplicables coticen o deban cotizar preceptivamente a favor del Montepío.

Art. 11. Serán obligaciones de los socios protectores obligatorios:

1.º Su afiliación al Montepío, así como la del personal que trabaje a su servicio, siempre que reúnan las condiciones señaladas en los vigentes Estatutos.

El no uso por parte del productor de la facultad señalada en el apartado primero del artículo 16, no eximirá a la Empresa de la obligación reseñada anteriormente ni de la consiguiente responsabilidad.

2.º Remitir al Montepío, a través de la Delegación Provincial, relación de las altas y trabajadores a su servicio, conforme al modelo y con los datos que por aquél se señalen.

3.º Remitir al Montepío, a través de la Delegación Provincial, relación de las altas y bajas causadas en la Empresa, así como de las variaciones de salarios producidas por mejoras voluntarias o cambios de categoría profesional de los trabajadores dentro de los plazos que la Institución señale.

4.º Abonar las cuotas patronal y obrera en la cuantía, plazos y forma que se determinan en el Título de Régimen Económico de los presentes Estatutos.

5.º Presentar oportunamente y tener a disposición de sus trabajadores, en *sitio visible*, la liquidación de pago de cuotas.

6.º Proceder al abono de prestaciones—por cuenta y delegación expresa del Montepío—a los beneficiarios que residan en localidad donde la Empresa tenga Centros de Trabajo.

7.º Cumplir todas las obligaciones que se deriven de los presentes Estatutos y demás disposiciones aplicables, así como de los acuerdos que adopten los Organos de Gobierno de la Institución.

Art. 12. Los socios protectores obligatorios tendrán derecho a formar parte de los Organos de Gobierno de la Institución cuando fueren elegidos para ello.

SECCIÓN 2.ª—De los socios protectores voluntarios

Art. 13. Serán socios protectores voluntarios aquellas personas naturales o jurídicas que por donaciones a la Entidad o servicios

prestados a la misma se consideren con méritos suficientes para ser así conceptuadas.

Art. 14. El título de socio protector voluntario será honorífico, y el que lo ostente estará facultado para asistir, con derecho a voz a las reuniones que la Asamblea General celebre, a cuyos efectos deberá ser citado oportunamente.

La concesión del título de socio protector voluntario corresponderá a la Asamblea General a propuesta de la Junta Rectora.

CAPITULO III

De los socios beneficiarios

Art. 15. Tendrán la consideración de socios beneficiarios obligatorios de este Montepío los trabajadores por cuenta ajena encuadrados en las actividades a que se refiere el artículo quinto de estos Estatutos y que tengan derecho a su afiliación, según lo establecido en la Orden de 16 de mayo de 1950 (Ref. 422/50) y Decreto de 17 de noviembre del mismo año.

Art. 16. Los socios beneficiarios tendrán los siguientes derechos:

1.º Solicitar su afiliación al Montepío cuando la Empresa por cuya cuenta trabajen no la efectúe.

2.º Conocer la efectividad del pago por la Empresa de las cuotas correspondientes.

3.º Percibir los beneficios y causar las prestaciones que correspondan con arreglo a lo regulado en el presente Estatuto y en las disposiciones o acuerdos del Servicio de Mutualidades Laborales.

4.º Recurrir contra los acuerdos de los Organos de Gobierno de la Entidad en materia de reconocimiento de derechos, conforme se determina en los presentes Estatutos.

Art. 17. Serán obligaciones de los socios beneficiarios:

1.º Extender y entregar a la Empresa la declaración de afiliación individual, consignando en ella los datos personales, familiares y profesionales que por la Entidad se determinen.

2.º Dar cuenta a la Institución, por medio de las Delegaciones Provinciales, de las variaciones de orden personal, familiar o profesional que puedan modificar la declaración inicial a que se refiere el apartado anterior.

3.º Colaborar en el cumplimiento de los fines de la Institución facilitando a ésta cuantos datos le sean interesados y allanando, en la medida que esté a su alcance, las dificultades que los funcionarios de aquella puedan encontrar en el desempeño de sus funciones; si así no lo hicieren podrán incurrir en responsabilidades y ser objeto de sanción.

4.º Cumplir los preceptos de los Estatutos y los acuerdos y resoluciones de los Organos de Gobierno de la Institución.

Art. 18. Los asociados que voluntaria o forzosamente dejen de prestar sus servicios por cuenta ajena serán baja en el Montepío, sin perjuicio de que cuando se reintegren al trabajo en cualquiera de las Empresas encuadradas en esta Entidad se les reconozca la antigüedad laboral y mutualista que con anterioridad a su baja hubieran adquirido.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior y, por consiguiente, serán considerados como socios en servicio activo:

1.º Los productores enfermos, los que estuviesen cumpliendo el servicio militar y los que se encuentren en situación de paro involuntario, con las limitaciones y requisitos que se establecen en los artículos 20 y 21 de la Orden de 16 de mayo de 1950 y Orden de 24 de julio del mismo año (Ref. 652/50).

2.º Los que se encuentren en situación de excedencia voluntaria o forzosa.

Este derecho quedará limitado al período de tiempo que según la Reglamentación de Trabajo esté obligada la Empresa a reservar al productor su puesto en el trabajo. Por parte de los asociados deberán cumplirse a estos efectos los siguientes requisitos:

a) Solicitar su continuidad como socio activo del Montepío dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que hubiera dejado de prestar su trabajo a la Empresa.

b) Abonar por su cuenta, y en los plazos reglamentarios, las cuotas patronales y obreras correspondientes.

Para la determinación de éstas se considerará como salario base de cotización el que fuere regulador de prestaciones, según las cotizaciones efectuadas al tiempo de su baja en el servicio activo.

No gozará del beneficio de continuar como socios activos de esta Institución aquellos trabajadores que en situación de excedencia ejerciten otra actividad que lleve consigo su obligada incorporación a otra Institución de Previsión Laboral.

CAPITULO IV

De los demás beneficiarios

Art. 19. Tendrán también la consideración de beneficiarios de este Montepío aquellas personas que sin estar asociadas a la Institución puedan solicitar y tengan derecho a percibir las prestaciones o beneficios establecidos en estos Estatutos en virtud de la relación familiar en que se hallen con cualquier socio beneficiario causante.

Serán obligaciones de las personas a que se refiere el presente artículo:

1.º Solicitar, dentro de los plazos que en los presentes Estatutos se determinan y en la forma que se establece para cada caso, los beneficios que puedan corresponderles.

2.º Aportar los documentos y datos que por la Entidad se les exija para la concesión de beneficios y prestar con exactitud y fidelidad las declaraciones que les fueran exigidas con el mismo fin.

TITULO III

Organización y funcionamiento

CAPITULO PRIMERO

Del Gobierno del Montepío

Art. 20. Los Organos de Gobierno del Montepío Interprovincial de Previsión Social de los Trabajadores en las Industrias Químicas son:

- a) La Asamblea General.
- b) La Junta Rectora.
- c) La Comisión Permanente Nacional.
- d) Las Comisiones Provinciales Permanentes.

Art. 21. Son ejecutores de los acuerdos de los Organos de Gobierno:

a) El Director del Montepío.

b) Los Delegados provinciales.

Art. 22. La Junta Rectora de la Institución propondrá al Servicio de Mutualidades la composición de los Organos de Gobierno a que se refiere el artículo 20.

Para formular dicha propuesta deberá tenerse en cuenta la proporcionalidad existente entre el número de afiliados de los distintos sectores laborales y categorías profesionales, así como las normas establecidas en las disposiciones vigentes sobre proporción entre las representaciones empresaria y obrera y demás requisitos que en ella se exijan.

En la resolución que a estos efectos dicte el Servicio de Mutualidades Laborales se concretará el número de Vocales natos y electivos de cada uno de los Organos de Gobierno, categorías profesionales, elección y renovación de aquéllos y duración de su mandato.

Art. 23. Para ser Vocal electivo de los Organos de Gobierno de esta Institución se precisará: ser asociado, mayor de edad, estar en pleno disfrute de sus derechos civiles y profesionales, tener una antigüedad laboral mínima de diez años y pertenecer a la Organización Sindical.

No podrán ostentar cargos representativos en la Entidad aquellos socios que no cumplan normalmente las diversas obligaciones que estos Estatutos imponen.

Para ser Vocal de las Comisiones Provinciales, Permanentes se preferirá a aquellas personas que residan en la localidad donde tenga su sede la respectiva Comisión o en sus cercanías.

Art. 24. La Asamblea General estará constituida por Vocales electivos de las Comisiones Provinciales Permanentes, y elegirá de entre sus miembros los componentes de la Junta Rectora.

La Junta Rectora elegirá de entre sus miembros electivos los cargos de Presidente y Vicepresidente, que lo serán de todos los Organos de Gobierno Nacionales.

El Servicio de Mutualidades Laborales podrá poner su veto a los nombramientos efectuados, previas las informaciones que considere precisas para fundar su resolución.

Art. 25. Los miembros de los Organos de Gobierno percibirán por su asistencia a las reuniones reglamentariamente convocadas, dietas de asistencia o de asistencia y desplazamiento, según los casos. La cuantía de estas dietas será fijada por la Junta Rectora.

CAPITULO II

De los Organos de Gobierno nacionales

SECCIÓN 1.ª—De la Asamblea General

Art. 26. La Asamblea General es el Organismo supremo de la Institución, constituida por representantes de los socios protectores y beneficiarios. En ella concurren la orientación del presente y futuro de la Entidad, la adopción de medidas y estudio de sugerencias que entrañen modificación de estos Estatutos y la superior vigilancia de los Organos de Gobierno de ella derivados en el cumplimiento de sus misiones.

Art. 27. Será competencia de la Asamblea General:

1.º Elegir los miembros que han de constituir la Junta Rectora.

2.º Conocer la actuación de la Junta Rectora y de sus miembros en relación con el ejercicio de sus funciones propias de sus cargos.

3.º Intervenir, en la forma que corresponda, en todos aquellos asuntos del Montepío cuya competencia no esté reservada a otros Organos del mismo.

4.º Examinar y aprobar, si procede, la Memoria, presupuestos, cuentas, inventarios y balances del Montepío que le someta la Junta Rectora.

5.º Estudiar, bien a propuesta de la Junta Rectora o por iniciativa propia, la reforma general de estos Estatutos o la concesión de otros beneficios que mejoren los establecidos, elevando la propuesta al Servicio de Mutualidades Laborales.

6.º Resolver sobre las propuestas que le someta la Junta Rectora y las Comisiones Provinciales Permanentes por mediación de aquélla.

Art. 28. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias o extraordinarias. Las reuniones ordinarias tendrán lugar una vez al año; las extraordinarias, siempre que, con la suficiente justificación, lo acuerde la Junta Rectora por su iniciativa o por solicitarlo la tercera parte de los asambleístas.

En las reuniones extraordinarias sólo podrán tratarse aquellos asuntos expresamente consignados en el orden del día, el que deberá ser sometido a la previa aprobación del Servicio de Mutualidades Laborales.

Art. 29. Las convocatorias de la Asamblea General se harán por su presidente con una antelación mínima de veinte días y por duplicado, a fin de dejar un ejemplar en poder del convocado y de que el otro sirva para poder acreditar en cualquier circunstancia el momento en que fué recibido por su destinatario.

A las convocatorias deberá acompañarse el orden del día de la sesión correspondiente.

Art. 30. Las reuniones de la Asamblea General podrán celebrarse en primera o segunda convocatoria. Desde el momento en que debiera haberse celebrado en primera convocatoria, al señalado para celebrar sesión en segunda, mediará un espacio de veinticuatro horas, sin que por ningún motivo ni en ningún caso pueda reducirse este lapso de tiempo.

Art. 31. Para que la Asamblea General se considere válidamente constituida será necesaria la asistencia de la mitad más uno de sus componentes en primera convocatoria; en segunda será suficiente con que asista la tercera parte de sus miembros.

Art. 32. Los miembros de la Asamblea General podrán hacer uso de la palabra:

1.º Para una cuestión previa o de orden.

2.º Para defender o impugnar una proposición.

3.º Para contestar cuando hayan sido aludidos personalmente.

4.º Para rectificar una sola vez, cuando haya tomado parte en algún debate.

Art. 33. Siempre que los miembros de la

Junta Rectora hagan uso de la palabra en reuniones de la Asamblea General, se entenderá que no consumen turno a los efectos reglamentarios.

Art. 34. Cuando un miembro de la Asamblea General se halle en el uso de la palabra no podrá ser interrumpido sino para ser llamado al orden por la Presidencia.

El Presidente podrá retirar la palabra al miembro de la Asamblea General a quien hubiese llamado al orden, e incluso ordenará su expulsión del local, si ello fuese necesario.

Art. 35. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría de votos entre los miembros que se hayan presentes. Cuando resulte empate en una votación, decidirá con su voto el Presidente.

Art. 36. La votaciones serán nominales cuando así lo solicite la tercera parte de los miembros asistentes.

Art. 37. De las deliberaciones de la Asamblea General se harán constar en el Libro de Actas correspondiente—debidamente diligenciado por la Delegación de Trabajo—, las conclusiones y acuerdos adoptados, autorizándose las actas con las firmas del Presidente y Secretario.

SECCIÓN 2.ª—De la Junta Rectora

Art. 38. La Junta Rectora es el órgano que, en nombre de la Asamblea General, tiene a su cargo el gobierno constante y directo del Montepío.

Art. 39. Será competencia de la Junta Rectora:

1.º Cumplir y hacer cumplir los preceptos contenidos en los presentes Estatutos y los de carácter general que sean aplicables al Montepío.

2.º Proponer a la Asamblea General la creación de nuevos beneficios cuando las posibilidades económicas del Montepío lo permitan, y la reforma de estos Estatutos, si lo estimare conveniente.

3.º El estudio y resolución, previo informe de la Comisión Provincial respectiva y de la Dirección del Montepío de los expedientes sobre las siguientes prestaciones:

Pensión por Jubilación.

Pensión por Invalidez.

Pensión o Subsidio de Viudedad.

Pensión de Orfandad.

Pensión de Larga Enfermedad.

Indemnización Especial.

Igualmente resolverá los expedientes de prestaciones extrarreglamentarias con cargo al tanto por ciento que, del fondo a este fin destinado, le corresponde según lo establecido en el artículo 80 de estos Estatutos.

4.º Acordar que sea mensual el pago de cuotas por parte de aquellas Empresas en las que concurren alguna de las circunstancias prevenidas en el artículo 64 de estos Estatutos.

5.º Conocer y aprobar, en su caso, las solicitudes formuladas por las Empresas, relativas al ingreso conjunto del importe total de cuotas correspondientes a Centros de Trabajo establecidos en distintas provincias.

6.º Nombrar el Vocal representante del Montepío en las Entidades de Previsión Social que pudieran constituirse por las Empresas.

7.º Estudiar y someter a la aprobación de la Asamblea General los presupuestos anuales de ingresos y gastos.

8.º Someter a la Asamblea General para

su aprobación la Memoria anual, los estados de cuentas, inventarios y balances del Montepío.

9. Aprobación la distribución de fondos.

10. Acordar las inversiones.

11. Imponer las sanciones procedentes con arreglo a lo establecido en el Título correspondiente de estos Estatutos.

12. Proveer interinamente hasta la inmediata renovación de los Organos de Gobierno, las vacantes que se produzcan con anterioridad a la extinción del mandato de sus miembros o los de la Asamblea General.

13. Resolver o informar a la Superioridad, según los casos, en los desacuerdos entre las Comisiones provinciales permanentes y los Delegados provinciales.

14. Resolver los recursos que sean de su competencia.

15. En general, adoptar las resoluciones que considere convenientes, siguiendo la orientación y las normas señaladas en los presentes Estatutos, así como elevar a la Superioridad las sugerencias que estime oportunas para la adopción de medidas que redunden en beneficio de los beneficiarios.

Art. 40. La Junta Rectora se reunirá, por lo menos, una vez cada tres meses, a fin de estudiar y resolver cuantos asuntos tenga pendientes.

Además de estas reuniones preceptivas, se reunirá siempre que sea convocada por el Presidente, bien por iniciativa de éste o por haberlo así solicitado la tercera parte de los miembros o porque el Director lo proponga atendiendo a razones justificadas.

Art. 41. Las convocatorias para las reuniones de la Junta Rectora deberán hacerse con una antelación mínima de ocho días y en la forma prevenida para la Asamblea General.

Art. 42. En todo lo referente al número de asistentes necesarios para que la Junta Rectora se considere válidamente constituida, deliberaciones, acuerdos y actas de las sesiones, se aplicarán las normas relativas a la Asamblea General.

Art. 43. Cuando por circunstancias especiales se hallen reunidos en el domicilio social la totalidad de los miembros de la Junta Rectora, sin previa convocatoria, podrán celebrar sesión y tener plena validez los acuerdos adoptados en la misma, sin más requisito que la aprobación previa y por unanimidad de declarar la conveniencia de celebrarla en tal forma, debiendo levantarse el acta correspondiente al igual que en las demás sesiones.

SECCIÓN 3.ª—De la Comisión Permanente Interprovincial

Art. 44. La Comisión Permanente Interprovincial es el Órgano Delegado de la Junta Rectora, que se constituye para la más ágil y rápida resolución de los expedientes de prestaciones y asuntos de trámite de la Entidad.

Art. 45. Corresponden concretamente a la Comisión Permanente Interprovincial las funciones y cometidos que se regulan en los apartados primero, tercero y noveno del artículo 39 de los presentes Estatutos, así como todas aquellas funciones que, siendo de la competencia de la Junta Rectora, sean expresamente delegadas por ésta.

Art. 46. La Comisión Permanente Inter-

provincial se reunirá por lo menos una vez al mes.

Además de esta reunión preceptiva, se reunirá siempre que sea convocada por el Presidente, atendiendo a razones justificadas, bien por iniciativa de éste, por haberlo solicitado así la tercera parte de sus miembros o por proponerlo el Director.

Las convocatorias para las reuniones deberán hacerse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, y en la forma prevenida por la Asamblea General.

Art. 47. Todo lo referente al número de asistentes necesarios para que la Comisión Permanente Interprovincial se considere válidamente constituida, deliberaciones, acuerdos y actas de las sesiones, se aplicarán las normas relativas a la Asamblea General.

SECCIÓN 4.ª—Del Presidente, Vicepresidente y Secretario de Actas

Art. 48. En el Presidente de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Interprovincial concurren la alta representación y orientación de la Entidad, de la que es primera jerarquía y máxima figura representativa de los asociados.

Serán funciones del Presidente del Montepío o de quien reglamentariamente le substituya:

1.ª Representar al Montepío, en unión del Director del mismo, en todos los actos y contratos que se celebren.

2.ª Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Interprovincial, dirigiendo la discusión, así como decidir las votaciones en caso de empate.

3.ª Fijar el orden del día de las reuniones de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Interprovincial.

4.ª Ejercitar funciones de fiscalización en todos los servicios y actividades del Montepío cuando lo considere oportuno, asistido del Director.

5.ª Designar, de acuerdo con la Junta Rectora, las personas que deben cubrir interinamente hasta la inmediata renovación de los Organos de Gobierno, las vacantes que se produzcan con anterioridad a la fecha de determinación del mandato de sus Vocales.

Art. 49. El Vicepresidente substituirá al Presidente, con iguales atribuciones y deberes, en caso de ausencia, enfermedad, fallecimiento u otra cualquier circunstancia que así lo requiera, como igualmente en aquellos casos en que mediare delegación.

Art. 50. El Secretario del Montepío actuará como Secretario de Actas de la Asamblea General y de los Organos derivados de ésta sin derecho a voto.

Art. 51. Serán funciones del Secretario de Actas:

1.º Actuar como tal en las sesiones que celebre la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Interprovincial, redactando las actas, que habrán de ser autorizadas con el visto bueno del Presidente, así como llevar los correspondientes libros de las mismas.

2.º Asistir al Presidente en la redacción del orden del día de las sesiones y cursar las convocatorias para ellas.

3.º Autorizar, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones que se expidan en relación con el contenido de dichas actas.

CAPITULO III

De los Organos de Gobierno provinciales

Art. 52. Se constituirá Comisión Provincial Permanente en las provincias y en la forma que se indique en la resolución correspondiente del Servicio de Mutualidades Laborales.

También se constituirán Ponencias en las provincias que se determinen.

Art. 53. Las Comisiones Permanentes y las Ponencias se reunirán cada quince días, siempre y cuando existan expedientes de prescripciones pendientes de resolver o informar.

Podrán celebrar sesión, aun cuando no se dé la circunstancia expuesta en el párrafo anterior, si así lo acordase el Presidente de la Comisión o Delegado provincial del Mutualismo Laboral por estimar que existen asuntos urgentes a deliberar.

Art. 54. Las convocatorias se harán con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas y en la forma prevenida para la Asamblea General. Deberán constar el día y hora fijado para la reunión y se hará saber que de ser necesaria la sesión en segunda convocatoria se celebrará media hora después de la señalada para la primera.

Art. 55. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, siendo necesario para que tengan validez que concurren en primera convocatoria la mitad más uno de sus componentes con voto y un mínimo de la tercera parte de sus miembros en segunda.

Las Comisiones de cuatro miembros podrán reunirse en segunda convocatoria con solo dos de ellos.

En caso de empate decidirá con su voto el Presidente.

Art. 56. La constancia y cumplimiento o suspensión de los acuerdos adoptados se sujetará a lo prevenido en el artículo séptimo de la Orden de 19 de noviembre de 1948.

Art. 57. Las Comisiones Provinciales Permanentes, como delegadas de sus Organos jerárquicos nacionales, tendrán las misiones y facultades informativas, de representación, de vigilancia y resolutivas que regula el artículo segundo de la Orden de 19 de noviembre de 1948.

CAPITULO IV

De los Organos Ejecutivos del Montepío

SECCIÓN 1.ª—Del Director

Art. 58. Corresponderán al Director y serán funciones del mismo:

1.º Representar al Montepío, en unión del Presidente, en todos los actos y contratos que se celebren, así como ante las Autoridades, Tribunales y Juzgados, Centros de Administración del Estado y particulares o cualesquiera otros Organismos, Entidades, oficinas y personal, con los poderes oportunos de la Junta Rectora cuando sean necesarios a los indicados efectos.

2.º Asistir al Presidente, cuando proceda, en la fiscalización de las actividades y los servicios administrativos del Montepío.

3.º Ejecutar los acuerdos de los Organos de Gobierno.

4.º Proponer las reuniones de dichos Organos cuando lo estime oportuno.

5.º Ordenar los pagos correspondientes a la aplicación de los distintos conceptos presupuestarios y los derivados de la concesión de beneficios o prestaciones.

6.º Autorizar con su visto bueno los justificantes de ingresos y demás documentos análogos que se expidan por el Montepío.

7.º Ostentar la Jefatura del personal y de los servicios administrativos.

8.º Cumplir y hacer cumplir, respondiendo ante sus Organos de Gobierno y Servicio de Mutualidades Laborales, del fiel cumplimiento de los Estatutos, normas y procedimiento administrativo.

9.º Informar los expedientes y documentos que se determinen o así lo requieran.

10. Todas las atribuciones de Dirección y gestión que no estén específicamente reservadas a la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Interprovincial.

SECCIÓN 2.ª—Del Delegado provincial

Art. 59. A efectos análogos a lo establecido con respecto al Director, el Delegado provincial del Mutualismo Laboral ostentará, dentro de su respectivo ámbito provincial, en unión del Presidente de la Comisión Provincial, la representación legal de la Institución ante las Autoridades, Tribunales, Juzgados, Centros de Administración del Estado y particulares y cualesquiera otros Organismos o personas.

Art. 60. Corresponden al Delegado provincial y son funciones del mismo:

1.º Realizar y ejecutar los acuerdos administrativos de los Organos de Gobierno nacionales y provincial, debiendo estar en contacto y dependencia con el Servicio de Mutualidades Laborales a los efectos de unificación, coordinación y régimen interior.

2.º Proponer al Presidente de la Comisión Provincial, siempre que lo considere preciso la reunión de sus miembros.

3.º Asistir a las reuniones de la Comisión Provincial con derecho a voz, pero sin voto, con el carácter de asesor técnico.

4.º Suspender, en su caso, por considerarlos antirreglamentarios, los acuerdos adoptados por la Comisión Provincial, dando cuenta al Organo superior inmediato a los oportunos efectos.

5.º Coordinar la labor de los departamentos de la Delegación con los servicios del Montepío.

6.º Ordenar los pagos acordados.

7.º Ostentar la Jefatura del personal.

8.º Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, normas y procedimiento administrativo respondiendo de su fiel cumplimiento ante los Organos de Gobierno del Montepío y Servicio de Mutualidades Laborales.

9.º Llevar el despacho de los asuntos e informar los expedientes y documentos que se determinen o así lo requieran.

10. Velar con el máximo interés para que los trabajadores de su ámbito territorial sean informados de todo lo referente a sus deberes y derechos cerca del Montepío.

11. Organizar, con la Comisión Provincial, los actos de entrega de pensiones y subsidios y disponer los medios para una eficaz y sincera propaganda que facilite el exacto conocimiento por los trabajadores de los fines y realizaciones del sistema mutualista.

TITULO IV

Régimen económico

CAPITULO PRIMERO

Recursos económicos

Art. 61. Los recursos económicos del Montepío interprovincial de Previsión Social de los Trabajadores en las Industrias Químicas son los siguientes:

1.º La aportación de las Empresas, consistente en el 6 por 100 de los salarios de los productores que estén a su servicio.

2.º Las cuotas de los productores, consistentes en el 3 por 100 de los salarios por ellos devengados.

3.º El importe de cuantos donativos, subvenciones o legados le sean hechos al Montepío.

4.º Los intereses de los bienes patrimoniales de la Institución.

5.º Los ingresos de cualquier índole que puedan efectuarse con arreglo a los preceptos contenidos en los presentes Estatutos y demás de general aplicación.

Art. 62. La obligación de cotizar al Montepío por las Empresas y trabajadores en él encuadrados se inició en las fechas establecidas a continuación:

1.º Industrias Químicas: 1 de julio de 1947.

2.º Industrias Resineras:

a) Trabajadores fijos: 1 de marzo de 1947.

b) Trabajadores no fijos: 1 de marzo de 1948.

3.º Industrias de Material Plástico y Resinas Sintéticas: 21 de abril de 1948.

4.º Industrias Fotográficas: 1 de agosto de 1948.

5.º Fábricas de Botones, artículos de Vestido y Tocado y Juguetaría de Celuloide: 9 de julio de 1948.

6.º Industrias del Fósforo: 1 de octubre de 1948.

7.º Fábricas de Muñecas de Cartón: 27 de octubre de 1950.

8.º Factorías Bacaladeras: 21 de abril de 1950.

Para el Sector Laboral de Fábricas de Botones, artículos de Vestido y Tocado y Juguetaría de Celuloide, los tipos de cotización consignados en el artículo anterior rigen a partir de 1 de julio de 1949. Hasta dicha fecha y desde el 9 de julio de 1948, el tipo de cotización fué del 8 por 100, a cargo exclusivo de las Empresas.

Art. 63. El haber o salario que ha de servir de base para la liquidación de las cuotas será el que para las Mutualidades y Montepíos Laborales se determine en la legislación vigente.

Art. 64. Las liquidaciones e ingresos de las cuotas patronal y obrera deberán realizarse por las Empresas en periodos trimestrales.

No obstante, la Junta Rectora podrá acordar que sea mensual la liquidación del pago de cuotas para aquellas Empresas en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Frecuentes y numerosas altas y bajas en su personal.

b) Tener repetidas épocas de ceses o suspensiones en el trabajo.

c) Haber sido sancionadas repetidamente por demora en el pago.

d) Cualquiera otra causa suficiente, a juicio de la Junta Rectora.

Art. 65. Los ingresos de cuotas deberán efectuarse en la forma y plazos que a continuación se expresan:

a) En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas a nombre del Montepío en las Cajas de Ahorro Provinciales, Municipales y demás de carácter benéfico-social.

b) Cuando no exista Caja de Ahorros de la índole citada en las cercanías del centro de trabajo de la Empresa, ésta deberá ingresar las aportaciones en la cuenta corriente abierta a nombre del Montepío en la Entidad bancaria autorizada.

No producirán efecto alguno frente al Montepío los ingresos no realizados en las Cajas de Ahorro benéfico-sociales o Entidades bancarias expresamente autorizadas.

c) Los ingresos se efectuarán dentro de los meses de abril, julio, octubre y enero; cada ingreso corresponderá a las liquidaciones del trimestre natural anterior.

Las Empresas que, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, deban efectuar sus ingresos mensualmente, los realizarán dentro del mes siguiente al que la liquidación corresponda.

d) Los ingresos se realizarán utilizando los modelos y cumpliendo las normas que por el Montepío se establezcan.

Art. 66. Las Empresas que cuenten con centros de trabajo situados en distinta provincia de la zona jurisdiccional de la Institución podrán solicitar, y la Junta Rectora acordar, que las liquidaciones de cuotas se realicen totalmente en la capital de la provincia donde radique la sede central de la Empresa, siempre que ésta presente tantas hojas de liquidación, debidamente diligenciadas, como centros de trabajo que de la misma dependan, y atendiendo los requisitos que para el mejor servicio y funcionamiento consideren conveniente establecer los Organos de Gobierno de la Entidad.

Art. 67. Todo ingreso no realizado dentro de los plazos establecidos será incrementado con el 10 por 100 del montante de la liquidación.

Para la exacción de las cuotas no satisfechas será de aplicación la Orden de 8 de octubre de 1949 (Ref. 237/49), correspondiendo al Director de la Entidad las facultades que en la misma se asignan a los Delegados del Instituto Nacional de Previsión.

Art. 68. Las Empresas responderán en todo caso ante el Montepío del pago de las cuotas correspondientes a todos los asociados en ellas encuadrados. Para ello, cuando aquéllas realicen el pago de los salarios a cada interesado descontarán las cuotas que les correspondan, y que, en unión de sus aportaciones, deberán ser ingresadas en la forma que determina el artículo 65.

Quando las Empresas no tuvieran las cuotas de sus trabajadores o no las ingresasen, junto con sus aportaciones, en los plazos reglamentarios, el importe de las cuotas atrasadas y de los recargos será exigible exclusivamente a la Empresa, sin que ésta pueda efectuar a los trabajadores descuento alguno.

Art. 69. La obligación de pago de cuotas al Montepío prescribirá a los cinco años, a contar de la fecha en que preceptivamente debieron ser abonadas.

Art. 70. Los asociados del Montepío que cesaren en el servicio activo de las Empresas no tendrán derecho alguno a que les sean devueltas las cuotas ingresadas, salvo cuando con carácter general y referido a un determinado sector o clase de asociados así lo ordene el Servicio de Mutualidades Laborales.

También procederá la devolución cuando por causa de afiliación errónea lo acuerde el Montepío. Si el erróneamente afiliado viniese en la obligación de pertenecer a otras Instituciones de Previsión Laboral, en lugar de acordarse la devolución de cuotas se verificará el oportuno traspaso de las mismas.

Art. 71. La afiliación maliciosa de quienes no reúnan las condiciones necesarias para la misma privará del derecho al reintegro de las cuotas satisfechas y a la concesión de toda clase de prestaciones.

CAPITULO II

Presupuestos y gastos

Art. 72. De los ingresos totales que obtenga el Montepío por todos los conceptos se destinarán los fondos necesarios para garantizar las pensiones que estos Estatutos conceden, para atender los auxilios y subsidios a los asociados activos ya sus derechohabientes y para el pago de los gastos de administración.

Art. 73. Los gastos de representación y administración de la sede central del Montepío no excederán del 5 por 100 de los ingresos que la Institución obtenga por todos los conceptos.

Con independencia del porcentaje anterior, y exclusivamente sobre la recaudación que por cuotas obtenga la Institución, se destinarán los cánones de tutela y servicio oficial y canon de Delegaciones Provinciales, conforme a lo en cada momento establecido por las disposiciones legales a este respecto vigentes.

El porcentaje correspondiente a la Delegación donde tenga su sede la Institución será administrado por los Organos centrales de la misma.

Art. 74. A la Junta Rectora corresponderá la confección y presentación a la Asamblea General del presupuesto de gastos e ingresos para cada ejercicio.

A estos efectos, en el mes de enero de cada año, la Dirección del Montepío elevará al Servicio de Mutualidades Laborales el censo técnico cerrado el 31 de diciembre anterior y el balance de saldos; también elevará el proyecto de presupuesto de gastos de administración.

A la vista de los documentos anteriores, el Servicio determinará, conforme a las disposiciones en vigor y a lo que estos Estatutos disponen, las reservas, fondos y amortizaciones a establecer.

Recibidas las oportunas instrucciones, la Junta Rectora confeccionará en el mes de febrero el proyecto de presupuesto definitivo, que someterá a la Asamblea General en unión del balance y Memoria del ejercicio anterior.

A los efectos anteriores, la Asamblea General deberá reunirse, si no existe causa suficiente que lo impida, en el mes de marzo de cada año.

CAPITULO III

De las reservas

Art. 75. Las reservas del Montepío estarán constituidas en la cuantía y forma que el Servicio de Mutualidades Laborales determine e invertidas por el sistema y orden de preferencia que establezcan las disposiciones legales.

Art. 76. Estas reservas serán las siguientes:

a) Para prestaciones concedidas y obligaciones pendientes de pago.

b) Reservas técnicas para garantizar el futuro pago de las pensiones y prestaciones reconocidas.

c) Reservas de seguridad para garantizar el pago de las prestaciones previstas para otorgar a los asociados en activo y a sus derechohabientes.

d) Fondos de estabilización, constituidos con el 0.50 por 100 de la cotización, más los saldos favorables que resulten entre la siniestralidad y riesgos previstos y los reales, que se destinarán a cubrir las desviaciones desfavorables de aquella siniestralidad y a estabilizar la cotización en períodos de crisis económica incidental.

e) Fondo de reaseguro, que se constituirá con el 5 por 100 de la cotización, que se destinará a pagar a la Caja de Coordinación y Compensación las cuotas y primas que el Servicio de Mutualidades establezca, a fin de cubrir los excesos de riesgos que actualmente se determinen.

Art. 77. Las reservas comprendidas en los apartados b) y c) del artículo anterior estarán constituidas por los valores mobiliarios que determine y apruebe el Ministerio de Trabajo o por bienes inmuebles hasta el límite que permitan las disposiciones vigentes. Los depósitos de dichos valores se efectuarán a disposición conjunta del Ministerio y de la Institución, pudiendo destinarse únicamente al fin para el que fueron depositados.

Art. 78. Todo acto de disposición que se realice sobre los bienes inmuebles de propiedad de la Entidad deberá ser autorizado expresamente por el Ministerio de Trabajo. A estos efectos, en la escritura pública que se otorgue para la adquisición de dichos inmuebles, se hará constar la necesidad del cumplimiento de tal requisito; igualmente se hará constar tal circunstancia en la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad.

Art. 79. En el caso de que se acuerde la creación de una Obra asistencial o Institución que suponga inversiones permanentes no se podrá ejecutar dicho acuerdo sin la autorización expresa del Ministerio de Trabajo, el cual previamente estudiará la posible coordinación que pueda existir con proyectos análogos de otros Organismos o Instituciones.

Art. 80. El Montepío constituirá en cada ejercicio un fondo para prestaciones extrarreglamentarias, formado con el 2 por 100 de la cotización obtenida en el ejercicio anterior.

Dicho fondo se aplicará en la siguiente forma:

a) El 75 por 100 del importe procedente de cada provincia, a disposición de los Organos provinciales.

b) El 25 por 100 restante, a disposición de los Organos de Gobierno centrales. De este porcentaje se detraerá la cantidad que la

Junta Rectora acuerde destinar a las atenciones previstas en el artículo 110.

Al finalizar cada ejercicio, el saldo del fondo de prestaciones extrarreglamentarias incrementará el del ejercicio siguiente.

Art. 81. Con los excedentes que resulten después de constituir las reservas y fondos que se especifican en los artículos anteriores se formará un fondo de garantía, que se destinará a los fines que determine el Servicio de Mutualidades Laborales.

CAPITULO IV

Sistema contable

Art. 82. La Sede Central del Montepío organizará su contabilidad por el sistema de partida doble, desarrollándola en los siguientes libros:

a) Libro Diario.

b) Libro Mayor.

c) Libro de Inventarios y Balances.

d) Libro de Movimiento de Caja.

e) Libro de cuentas corrientes con las Delegaciones.

f) Libro de cuentas corrientes de Tesorería.

g) Libro de cuentas técnicas.

h) Registro de valores y reservas.

i) Otros libros que la práctica haga necesarios.

Art. 83. Las Delegaciones Provinciales organizarán su contabilidad oficial por el mismo sistema que el de la Sede Central, y será común a todas las Instituciones que las Delegaciones representen.

TITULO V

Prestaciones

CAPITULO PRIMERO

De sus clases

Art. 84. El Montepío concederá a sus beneficiarios las prestaciones que se enumeran a continuación, siempre que concurren las circunstancias y se cumplan los requisitos establecidos en los presentes Estatutos.

Pensión por Jubilación

Pensión por Invalidez.

Pensión o Subsidio de Viudedad.

Pensión de Orfandad.

Pensión por Larga Enfermedad.

Auxilio por Defunción.

Asistencia Sanitaria.

Premio por Nupcialidad.

Indemnización Especial.

Art. 85. Asimismo la Institución concederá prestaciones extrarreglamentarias con los fondos previstos en el artículo 80 en las condiciones establecidas en la Orden de 13 de julio de 1950.

CAPITULO II

Pensión por jubilación

Art. 86. Se concederá una pensión vitalicia por jubilación a los socios beneficiarios que, al cesar en el servicio activo de las Empresas, reúnan las condiciones siguientes:

a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.

b) Tener una antigüedad mínima de diez años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.

c) Tener cubierto el período mínimo de cotización que se preceptúa en el artículo 126 de estos Estatutos.

d) Ser socio activo del Montepío.

Art. 87. También tendrán derecho a pensión por jubilación al cumplir los sesenta y cinco años de edad:

1.º Los pensionistas del Montepío por Larga Enfermedad.

2.º Los incapacitados por accidente de trabajo o enfermedad profesional indemnizable.

En ambos casos el beneficiario deberá reu-

nir los requisitos de los apartados b), c) y d) del artículo anterior al tiempo de cesar en el trabajo activo por causa de accidente o enfermedad, y no le será computado el tiempo transcurrido desde aquel momento para determinar la cuantía de la pensión.

Art. 88. La cuantía de la pensión por jubilación dependerá de la edad del asociado, de su antigüedad laboral y de la antigüedad como socio cotizante del Montepío, determinándose conforme a la siguiente escala:

Con 10 años de antigüedad laboral,	el 30 %	del salario regulador.
" 20 "	" 40 %	" "
" 30 "	" 50 %	" "
" 40 "	" 60 %	" "
" 50 o más años "	" 70 %	" "

Si la total antigüedad laboral que se acredite se hallare comprendida entre dos de los períodos establecidos anteriormente, se aplicará el tanto por ciento que corresponda al período inferior, incrementándolo proporcionalmente por cada año completo que excediere de dicho período. Se considerará como año completo la fracción superior a seis meses. Si fuese inferior, no será tenida en cuenta.

El tanto por ciento que corresponda aplicar en cada caso de acuerdo con la antigüedad laboral será a su vez incrementado en un 1 por 100 por cada año que el asociado hubiese cotizado en ésta u otra Institución de Previsión Laboral, hasta el tope del 5 por 100, que corresponderá a los asociados que hubiesen cotizado cinco o más años. Si la fracción de años resultante fuere superior a seis meses, se computará como año completo; si fuere inferior, no será tenida en cuenta.

Art. 89. La pensión de jubilación podrá ser solicitada con una antelación máxima de tres meses a la fecha en que el asociado desee disfrutarla. Caso de ser concedida la pensión, no producirá sus efectos hasta que el productor presente el certificado de baja definitiva en sus servicios profesionales.

Si el pensionista volviese a efectuar trabajo activo por cuenta ajena, se aplicará lo dispuesto en el artículo 17 de la Orden de 16 de mayo de 1950 (Ref. 422/50).

CAPITULO III

Pensión por invalidez

Art. 90. El Montepío concederá pensión vitalicia por invalidez a los socios beneficiarios que queden incapacitados absolutamente para todo trabajo, una vez dados de alta médica y con los requisitos y limitaciones que se establecen en este capítulo.

No tendrán derecho a este beneficio los asociados cuya incapacidad cause derecho a pensión, según la legislación de accidentes y enfermedades profesionales. No obstante, tendrán derecho a pensión por jubilación al cumplir los sesenta y cinco años de edad, según lo establecido en el artículo 87 de estos Estatutos.

Art. 91. Se concederá la pensión por invalidez al socio beneficiario que al tiempo de cesar en su trabajo reune los siguientes requisitos:

a) Ser socio activo.

b) Tener una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena. No se exigirá este requisito a los menores de diecinueve años.

c) Tener cubierto un período de cotización de 500 días.

También se concederá esta pensión al asociado que quedare inválido siendo pensionista del Montepío por larga enfermedad y reune los requisitos de los apartados b) y c) al tiempo de cesar en el trabajo activo por causa de enfermedad.

Cuando la invalidez del asociado se haya producido por accidente o hecho súbito, la Junta Rectora podrá conceder pensión por invalidez sin que estén cubiertos los períodos mínimos de antigüedad y cotización, siempre que el asociado tenga efectuada la cotización anterior a la fecha del hecho causante.

Art. 92. La cuantía de la pensión de invalidez será en todo caso del 70 por 100 del salario regulador del asociado.

Art. 93. La pensión por invalidez quedará anulada si el beneficiario de la misma recobrara las condiciones físicas suficientes para realizar trabajo activo por cuenta ajena.

El Montepío revisará periódicamente los expedientes y se reserva el derecho de reconocimiento médico siempre que lo estime conveniente.

CAPITULO IV

Pensión o subsidio de viudedad

Art. 94. Causará derecho a la prestación de viudedad el socio beneficiario que reune a su fallecimiento las siguientes condiciones:

a) Ser socio activo o pensionista de la Institución.

b) Tener una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.

c) Tener cubierto un período de cotización de 500 días.

Art. 95. Tendrá derecho al percibo de esta prestación la viuda del socio beneficiario fallecido que reune las siguientes condiciones:

a) Haber contraído matrimonio con el socio causante con un año de antelación, por lo menos, a la fecha del fallecimiento. No se exigirá

este requisito cuando quedaren hijos del matrimonio.

b) Haber hecho vida conyugal con el causante hasta su muerte; o que en caso de separación careciese de culpabilidad.

c) No haber abandonado a sus hijos y observar una conducta honesta y moral.

Art. 96. La naturaleza y cuantía de la prestación de viudedad, se determinará conforme a las siguientes normas:

a) Viudas menores de cuarenta años de edad, sin hijos con derecho a pensión de orfandad y no incapacitados para el trabajo:

1.ª Si el causante fuese socio activo o pensionista por larga enfermedad: entrega de un capital consistente en veinticuatro mensualidades del salario regulador.

2.ª Si el causante fuese pensionista por jubilación o invalidez: entrega de un capital consistente en veinticuatro mensualidades de la pensión que aquél estuviese percibiendo.

b) Viudas mayores de cuarenta años, o menores de esta edad, pero con hijos con derecho a orfandad, o incapacitadas para el trabajo:

1.ª Si el causante fuese socio activo o pensionista por larga enfermedad: Pensión vitalicia de cuantía igual al 60 por 100 de la que por jubilación hubiera correspondido al causante al tiempo de su fallecimiento; la pensión de viudedad tendrá un importe mínimo del 25 por 100 del salario regulador.

2.ª Si el causante fuese pensionista por jubilación o invalidez: Pensión vitalicia de cuantía igual al 60 por 100 de la pensión que estuviese percibiendo el fallecido con igual importe mínimo.

Si la interesada tuviera derecho o estuviera percibiendo cualquier otra pensión de ésta u otra Institución de Previsión Laboral, sólo percibirá la de viudedad en cuantía que sumada a la anterior, no rebase el 100 por 100 del salario regulador del causante. Si la viuda dejase de percibir aquella pensión por cesar su derecho, percibirá la de viudedad en su cuantía total.

Art. 97. La viuda dejará de percibir la pensión por las causas siguientes:

a) Contraer nuevas nupcias o adquirir estado religioso.

b) Abandono comprobado de los hijos menores sometidos a su tutela.

c) Observar una conducta deshonesto o inmoral.

Art. 98. Cuando el socio fallecido fuera mujer el viudo tendrá derecho a los beneficios que se establecen en este capítulo, siempre que se hallare incapacitado absoluta y permanentemente para toda clase de trabajo y no perciba pensión derivada de la legislación de accidentes del trabajo y enfermedad profesional, o del Mutualismo Laboral Obligatorio, y el socio fallecido reuniese las condiciones generales previstas para esta prestación. El viudo beneficiario dejará de percibir este beneficio si desapareciesen las causas de su incapacidad.

CAPITULO V

Pensión de orfandad

Art. 99. Causará derecho a esta pensión el socio beneficiario, varón o hembra, que reuniera a su fallecimiento las siguientes condiciones:

a) Ser socio activo o pensionista del Montepío.

b) Tener una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.

c) Tener cubierto un período de cotización de 500 días.

Art. 100. Tendrán derecho al percibo de esta prestación:

a) Los hijos legítimos—incluso los póstumos—legitimados, naturales reconocidos y adoptivos del asociado fallecido.

b) Los hijos legítimos, legitimados, naturales, reconocidos y adoptivos que la viuda del asociado fallecido hubiese llevado al matrimonio, siempre que viviesen a expensas de aquél y no disfrutaran pensión de otra Institución de Previsión Laboral.

Los beneficiarios comprendidos en los apartados anteriores deberán reunir, al tiempo del fallecimiento del asociado causante, los requisitos de ser menores de dieciséis años o incapacitados de manera absoluta para el trabajo que no perciban ninguna otra pensión por este concepto.

Art. 101. La cuantía de la pensión de orfandad, cuando al mismo tiempo haya sido concedida prestación de viudedad, será del 10 por 100 del salario regulador del causante, por cada uno de los huérfanos con derecho a la misma. Como mínimo será de 150 pesetas mensuales por cada huérfano.

El importe total de las mensualidades que perciban los beneficiarios de esta prestación no podrá ser inferior, conjuntamente consideradas, al importe de seis mensualidades del salario regulador del causante.

Si solamente fuese uno el beneficiario de esta prestación y al llegar a la fecha reglamentaria de su extinción no hubiese percibido el importe mínimo anteriormente indicado, se le entregará de una sola vez la cantidad que reste hasta alcanzar dicho límite mínimo. Si fuesen varios los beneficiarios se esperará a la extinción de la pensión del último de ellos, efectuándose entonces igual cálculo y, de ser necesario, la cantidad que restase por entregar para cubrir dicho requisito se repartirá por partes iguales entre todos los que fueron beneficiarios de la prestación.

En caso de fallecimiento de la madre o padre viudo que percibiese pensión de viudedad, se revisará la cuantía de la orfandad, que se regulará por las siguientes normas:

a) A uno de los huérfanos se le acreditará la que por por viudedad percibiese el padre o madre fallecido.

b) A los demás huérfanos se les acreditará el 10 por 100 a que se refiere el primer párrafo del presente artículo.

c) La suma total de las cantidades de los dos párrafos anteriores se dividirá por el número de beneficiarios.

d) Por cada beneficiario a quien se extinga el derecho se reducirá la suma dicha en un 10 por 100 del salario regulador del causante o 150 pesetas, según corresponda.

e) El último huérfano con derecho a pensión será el que conserve la de viudedad.

Art. 102. Cuando al fallecimiento del causante se produjese la orfandad absoluta, la prestación que corresponda a los huérfanos se regirá por lo establecido en el último párrafo del artículo anterior.

Por el contrario, si al fallecer el causante

el otro cónyuge no tuviera derecho a pensión de viudedad, los huérfanos percibirán la pensión en la cuantía establecida en el párrafo primero del artículo anterior.

Art. 103. En caso de orfandad absoluta, la pensión se otorgará sin exigir períodos de antigüedad ni cotización en el socio causante fallecido, requiriéndose tan solo que tuviera la condición de socio activo o pensionista del Montepío al tiempo de su fallecimiento.

Art. 104. La pensión de orfandad se extinguirá cuando el beneficiario cumpliera la edad de dieciséis años o cesare la incapacidad, por su fallecimiento o por adquirir estado matrimonial o religioso. No obstante continuarán percibiendo esta pensión después de cumplidos los dieciséis años, en el supuesto de que estuvieren realizando estudios oficiales que no pudieran costeárselos los familiares que los tuviesen a su cargo. Estos casos necesitarán la especial aprobación de la Junta Rectora, que juzgará, a la vista de informes concretos y detallados y rigurosos y teniendo en cuenta muy especialmente el aprovechamiento y aptitud de los interesados.

Art. 105. Las pensiones de orfandad se entregarán al padre, madre, parientes o personas que acrediten los siguientes extremos:

a) Que el beneficiario viva en su compañía y a sus expensas al tiempo de solicitar la pensión.

b) Que en lo sucesivo se continuarán encargando del mantenimiento, educación y formación profesional de los huérfanos, lo que comprobará periódicamente el Montepío en la forma que considere más oportuna.

Art. 106. Si los huérfanos estuvieran totalmente abandonados, o las personas que los tengan a su cargo no mereciesen la confianza suficiente del Montepío, la Comisión Provincial Permanente que corresponda se constituirá en patronato tutelar de los mismos sin perjuicio de lo que disponga la legislación vigente, y propondrá a la Junta Rectora las medidas que deban adoptarse para la mejor protección de los huérfanos hasta que cumplan los dieciséis años o cesare la incapacidad, y que podrá consistir en la concesión de becas, ingreso en Colegios o Instituciones de Beneficencia, Escuela de Aprendices u otras medidas análogas.

Esta propuesta deberá comprender, después de la exposición de motivos, un cálculo de los gastos que la protección de dichos huérfanos pueda ocasionar a la Institución.

CAPITULO VI

Pensión por larga enfermedad

Art. 107. Se concederá un auxilio por larga enfermedad a los socios beneficiarios que temporalmente estuvieran imposibilitados totalmente para el trabajo por causa de enfermedad y siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que hubieran agotado los plazos de disfrute del Seguro Obligatorio de Enfermedad o que hubiere transcurrido el plazo de veintiséis semanas si no hubiesen hecho uso o no se hallaren afiliados a dicho Seguro.

b) Que la enfermedad que los imposibilita totalmente para el trabajo no tenga carácter indemnizable y sea diagnosticada por los facultativos especialistas que designe el Montepío, cuando éste lo considere conveniente.

c) Que cumplan rigurosamente las prescripciones facultativas de los médicos que los asistan; en caso de contravenir el plan o régimen de vida establecido por éstos perderán automáticamente el derecho a este auxilio.

d) Que el asociado tuviera una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.

No se exigirá este requisito a los productores menores de veinte años, siempre que la enfermedad hubiese sido contraída con posterioridad a su ingreso como asociado.

e) Que tenga cubierto el período mínimo de cotización que preceptúa el artículo 126 de estos Estatutos.

Se exceptúan los menores de veinte años a que se refiere el apartado anterior, a quienes sólo se exigirá un período mínimo de seis meses de cotización.

Art. 108. La cuantía de la pensión por larga enfermedad será equivalente al 50 por 100 del salario regulador.

Art. 109. Los períodos máximos por los que se concederá este auxilio serán los siguientes:

a) En el primer año de enfermedad, veintiséis semanas como máximo.

b) En el segundo año de enfermedad, cincuenta y dos semanas como máximo.

c) En el tercer año, cincuenta y dos semanas como máximo.

Art. 110. Agotados los plazos de duración a que se refiere el artículo anterior, el beneficiario que continuare enfermo será sometido a reconocimiento médico, y la Junta Rectora podrá acordar que se prolongue la percepción de la pensión, siempre que ello fuera posible por existir el remanente necesario en el fondo especial, que se establece a continuación:

Para cubrir estas atenciones se constituirá anualmente un fondo especial, formado por la cantidad que del fondo de que la Junta Rectora dispone para prestaciones extrarreglamentarias acuerde destinar a este fin, y con la parte de intereses que excedan del 3,5 por 100 de los producidos por el patrimonio de la Institución en el año anterior.

CAPITULO VII

Auxilio por defunción

Art. 111. Al ocurrir el fallecimiento de un asociado en activo o pensionista por jubilación, invalidez o larga enfermedad, se concederá un auxilio para gastos de entierro y sufragios en cuantía de 1.500 pesetas.

Art. 112. Para causar derecho a este auxilio el asociado fallecido no necesitará reunir otros requisitos que los de ser socio activo o tener la consideración de pensionista por jubilación, invalidez o larga enfermedad.

Art. 113. La cantidad señalada anteriormente se entregará inmediatamente después de ocurrir el fallecimiento a los familiares más próximos, parientes o personas que convivieran con el socio fallecido. Si no existiera ninguna de las personas señaladas anteriormente que pudiera atender al sepelio, la Comisión Provincial Permanente designará a uno de sus miembros, que se encargará de la organización del entierro y de los sufragios por el alma del fallecido.

CAPITULO VIII

Asistencia sanitaria

Art. 114. El Montepío concederá la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica a sus pensionistas y familiares que convivieren con ellos y a sus expensas con anterioridad a la solicitud de la pensión y reúnan, además las condiciones siguientes:

a) Si el pensionista hubiese estado inscrito en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, los familiares con derecho a esta prestación serán los inscritos en la cartilla de dicho Seguro al tiempo de solicitar la pensión, así como los hijos que naciesen posteriormente.

b) Si el pensionista no pertenecía al Seguro Obligatorio de Enfermedad tendrán derecho los familiares comprendidos dentro del tercer grado de consaguinidad y los hijos que naciesen posteriormente.

Art. 115. A los efectos de este beneficio, el Montepío, al conceder una pensión, vendrá obligado a notificar a los interesados el procedimiento que tenga establecido para la efectividad del mismo, sin que para ello sea precisa solicitud alguna por parte de los beneficiarios.

Art. 116. Los familiares de los pensionistas dejarán de disfrutar este beneficio tan pronto tengan obligación de estar inscritos en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, dejar de convivir con el asociado o cuando, por cualquier circunstancia, el pensionista deje de tener esta condición.

Art. 117. El Montepío coordinará sus servicios de asistencia sanitaria con los establecidos por otros Montepíos o Mutualidades, con los del Estado, Instituciones de Previsión y Organización Sindical.

CAPITULO IX

Premio por nupcialidad

Art. 118. El socio activo que contraiga matrimonio tendrá derecho a un premio de Nupcialidad. Este premio podrá ser solicitado con quince días de antelación a la fecha en que vaya a efectuarse el matrimonio. También se concederá en caso de contraer estado religioso.

La cuantía del premio será de 1.000 pesetas y no podrá percibirse más que una sola vez por cada asociado.

Art. 119. Para otorgar esta prestación se precisará que el asociado beneficiario reúna los siguientes requisitos:

a) Ser socio activo del Montepío. En el caso de ser mujer el socio beneficiario que solicite el premio por matrimonio bastará con que haya sido socio activo hasta dos meses antes de la fecha de su matrimonio, por haber cesado en la empresa en la que prestaba sus servicios.

b) Tener una antigüedad laboral mínima de cinco años.

c) Tener cubierto el período de cotización previsto en el artículo 126 de estos Estatutos.

CAPITULO X

Indemnización Especial

Art. 120. Cuando a su fallecimiento el asociado no dejare viuda ni hijos menores de dieciséis años o incapacitados antes de dicha

edad, las hijas solteras o viudas, los padres sexagenarios, los hermanos menores de dieciséis años o incapacitados y los abuelos del causante que con él y a sus expensas convivieran tendrán derecho, por el orden citado, y con carácter excluyente, al percibo por una sola vez de una cantidad equivalente a una mensualidad por cada año de trabajo activo del fallecido, sin que el importe total de esta indemnización pueda exceder de seis mensualidades del salario regulador del asociado causante.

CAPITULO XI

Disposiciones comunes a todas las prestaciones

Art. 121. Los beneficios que concede esta Institución son compatibles con los derivados de los Seguros Sociales Obligatorios y con los que puedan concederse por el Estado, Corporaciones, Compañías de Seguros y Empresas, con las excepciones derivadas de las disposiciones contenidas en los presentes Estatutos.

Art. 122. Los afiliados que obligatoriamente coticen a ésta y a otra u otras Instituciones de Previsión Laboral, o a este Montepío por dos o más Empresas, tendrán derecho a percibir las prestaciones en las condiciones previstas en el artículo 18 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Los que sean baja en esta Institución por pasar a pertenecer a otra, podrán percibir las prestaciones señaladas en estos Estatutos cuando concurren las circunstancias y se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 21 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 123. Las prestaciones que concede el Montepío tienen carácter personal e intransferible y, en consecuencia, no podrán ser embargadas, objeto de cesión total o parcial ni servir de garantía de ninguna obligación.

Art. 124. Tendrán la consideración de socios activos de la Institución todas aquellas personas que presten sus servicios por cuenta ajena en actividades encuadradas en este Montepío.

Art. 125. Asimismo conservarán la condición de socios activos quienes, habiendo tenido este carácter, dejen de prestar sus servicios por cuenta ajena por alguna de las siguientes causas:

- a) Por enfermedad ininterrumpida.
- b) Por hallarse prestando el servicio militar.
- c) Por paro involuntario.

La concesión de prestaciones a quienes se encuentren en alguna de las situaciones previstas en los apartados anteriores, se sujetará a lo dispuesto en los artículos 20 y 22 de la Orden de 16 de mayo de 1950 y en la Orden de 24 de julio del mismo año (Ref. 652/50).

Art. 126. Para causar derecho a aquellas prestaciones que no tengan establecido de forma concreta el período de carencia exigible, será preciso que el asociado haya cotizado al Montepío durante un período de tiempo igual a la mitad del comprendido entre la fecha inicial de cotización en el sector laboral a que el asociado pertenezca y aquella otra en que se produzca el hecho causante de la prestación.

Como excepción a esta regla, el período mínimo de cotización será en todo caso de seis meses, durante el primer año de obligatoriedad en la cotización de cada sector laboral.

A partir de la fecha en que se cumplan diez años de obligatoriedad de cotización, el período exigible será de cinco años mientras no se disponga otra cosa.

A efectos del cumplimiento de los períodos de carencia establecidos en los presentes Estatutos, se considerará que los trabajadores no fijos en la Industria Resinera han cotizado un número de días igual a la cantidad que resulte de dividir, las que sirvieron de base de cotización, por el salario regulador de 14,40 pesetas, establecido en el artículo 30 de la Relamentación de Trabajo de la Industria Resinera, aprobada por Orden de 14 de julio de 1947.

Art. 127. Se considerará como antigüedad laboral aquella que se acredite de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 128. El salario regulador para la concesión de prestaciones se hallará en la forma prevista en el artículo 25 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Para los trabajadores no fijos de la Industria Resinera, el salario regulador se hallará dividiendo por 12 la cantidad que haya servido de base para la cotización durante doce meses necesariamente consecutivos, elegidos por el trabajador de entre los transcurridos con posterioridad a la fecha inicial de cotización en este sector laboral. No les será de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 129. Si las prestaciones concedidas por la Institución resultaran de cuantía superior a la que corresponda, como consecuencia de falsedad de las Empresas en las declaraciones que formulen a estos efectos, el Montepío podrá reclamar a la Empresa las diferencias resultantes ante la jurisdicción competente.

Si por la misma causa de falsedad de la Empresa en dichas declaraciones la prestación concedida fuese inferior a la que realmente corresponda, el productor perjudicado podrá reclamar contra la Empresa por el perjuicio sufrido.

Art. 130. Las prestaciones que la Institución otorga deberán solicitarse dentro de los plazos previstos en el artículo 26 de la Orden de 16 de mayo de 1950, utilizando los modelos que aquella tenga establecidos y acompañando los documentos que para cada caso se señalen.

Art. 131. Las prestaciones que se establecen en los presentes Estatutos no podrán satisfacerse por el Montepío si la Empresa, en el momento en que deban ser abonadas, no estuviere al corriente en el pago de todas las cotizaciones exigibles a la misma.

En estos casos se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 12 al 16 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 132. El devengo de las pensiones que conceda el Montepío se iniciará y finalizará de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

Art. 133. Los socios beneficiarios a quienes les haya sido concedida alguna prestación en virtud de declaraciones falsas o inexactas de los mismos, no tendrán derecho a su percibo. En el caso de que hubiesen percibido ya su importe, estarán obligados a su devolución, sin perjuicio de las sanciones a que hubiese lugar.

Art. 134. Las cantidades que correspondan a los beneficiarios por cualquiera de las prestaciones otorgadas por esta Institución podrán ser percibidas por aquéllos en la Empresa donde últimamente hubieran prestado sus servicios o en aquella otra que se halle más cerca de su domicilio, siempre que la organización del Montepío lo permita y así convenga.

Art. 135. Las mensualidades que un pensionista tuviera pendientes de cobro al tiempo de su fallecimiento se entregarán a la esposa, hijos, padres sexagenarios y familiares más próximos que conviviesen con el fallecido, previa la justificación que los Organos del Montepío considere oportuna, en cada caso.

La misma norma se aplicará respecto de cualesquiera prestaciones que un asociado tuviera pendientes de cobro al tiempo de su fallecimiento.

A falta de los citados familiares el importe de las pensiones o prestaciones revertirá al Montepío.

TITULO VI

Régimen disciplinario

CAPITULO PRIMERO

De las faltas y sus sanciones

Art. 136. Constituirán falta y darán lugar a la imposición de sanciones los siguientes hechos:

1.º Defraudar a sabiendas los intereses del Montepío o poner voluntariamente los medios que conduzcan a tal fin.

2.º Falsear las declaraciones ordinarias y extraordinarias que se hagan ante el Montepío o aportar datos inexactos al mismo, bien en orden a la concesión de beneficios o con respecto a otra cualesquiera manifestaciones de las actividades de esta Entidad.

3.º Realizar actos indecorosos o perjudiciales para la reputación o el buen crédito del Montepío.

4.º Entorpecer, intencionadamente, las actividades del Montepío. Se considerarán comprendidos en este apartado los que, habiendo sido elegidos Vocales de la Junta Rectora o restantes Organos de Gobierno, no asistan a sus reuniones o no preste la colaboración debida.

5.º No observar las normas, disposiciones o acuerdos emanados de los Organos competentes del Montepío, relativos al cumplimiento de sus fines o al buen desarrollo y orden de su actividad.

Art. 137. Las sanciones que podrá imponer el Montepío a sus asociados serán las consignadas en la siguiente escala:

1.º Apercibimiento privado, consistente en comunicación verbal o escrito al sancionado.

2.º Apercibimiento público. El grado de publicidad que preceda dar a esta sanción se determinará en cada caso por el Organos sancionador.

3.º Inhabilitación temporal para formar parte de los Organos de Gobierno de la Institución, u ocupar cargos de la misma. Esta sanción se entenderá por un tiempo comprendido entre los dos y los cinco años.

4.º Inhabilitación permanente para formar parte de los Organos de Gobierno de la Institución.

5.º Multa de veinticinco a cinco mil pesetas.

Cuando se trate de un socio beneficiario la sanción se hará efectiva mediante descuento en los salarios del sancionado, cuya cuantía será fijada por la Junta Rectora, sin exceder del 2,5 por 100.

Si antes de completar el pago de la multa fuese concedida al sancionado alguna prestación de entrega de capital, se deducirá de su importe lo necesario para hacer efectiva la sanción. Si se tratare de pensiones se deducirá de cada mensualidad un 25 por 100 hasta completar dicho pago.

Asimismo la Comisión Permanente Interprovincial podrá acordar se suspenda la efectividad de una pensión, en tanto se resuelva lo que corresponda, en los casos en que se hubieran producido anomalías en la tramitación del expediente o falsedades en los documentos aportados al mismo, así como cuando los beneficiarios de aquélla no cumplan los requisitos establecidos en estos Estatutos para su percepción.

Art. 138. Siempre que haya de imponerse una sanción se atenderá para la determinación de la misma, en cada caso, a la gravedad de la falta cometida, al perjuicio que haya ocasionado o que haya pretendido ocasionar e sancionado, al criterio adoptado en resoluciones recaídas en casos anteriores y análogos y a cualquiera otras circunstancias que deban tenerse en cuenta, a juicio del Órgano sancionador.

CAPITULO II

Procedimiento y competencia para la imposición de sanciones

Art. 139. La imposición de sanciones será de competencia de la Junta Rectora.

Art. 140. Las Comisiones Provinciales Permanentes, tan pronto tengan conocimiento de haberse realizado algún hecho constitutivo de falta, lo pondrán en conocimiento de la Junta Rectora en escrito razonado, en el que expondrán los hechos y circunstancias ajenas, proponiendo la oportuna sanción.

En la primera reunión que celebre la Junta Rectora después de recibir el expediente incoado, se pronunciará por la sanción que corresponde o declarará la no existencia de responsabilidad, devolviendo el expediente, una vez tomada debida nota, a la Comisión de procedencia, a los fines de su oportuno archivo y efectos.

Art. 141. En los casos en que la Junta Rectora o Asamblea General observasen posibles faltas sancionables entre los componentes de los Órganos de Gobierno subordinados acomodarán su procedimiento al enunciado en los artículos precedentes, pudiendo suspender en sus funciones a los miembros de las Comisiones o Junta Rectora, según los casos, interin se sustancia el oportuno expediente, dando cuenta de la medida a la Jefatura del Servicio.

TITULO VII

De los recursos contra los acuerdos de los Organos de Gobierno

Art. 142. Como trámite previo a la iniciación de las reclamaciones en vía contenciosa ante la Magistratura de Trabajo, podrán los interesados recurrir contra los acuerdos de

los Organos de Gobierno, en las condiciones y cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 29, 30 y 31 de la Orden de 16 de mayo de 1950.

TITULO VIII

De la inspección e intervención

Art. 143. La inspección, vigilancia e intervención del cumplimiento por el Montepío, Empresas y productores beneficiarios de las obligaciones de este Estatuto derivadas, está a cargo del Ministerio de Trabajo a través del Servicio de Mutualidades Laborales, Inspección Técnica de Previsión, Delegaciones Provinciales de Trabajo e Inspección Nacional de Trabajo, quienes podrán, cuando corresponda, imponer sanciones con arreglo a las disposiciones vigentes.

TITULO IX

Disposiciones generales

Art. 144. Para que el Montepío pueda proponer la reforma de estos Estatutos será preciso que exista la conformidad de la mitad más uno de los miembros de la Asamblea General, en sesión convocada al efecto.

Art. 145. Cualquier modificación de estos Estatutos habrá de ser aprobada por el Ministerio de Trabajo, previo informe del Servicio de Mutualidades Laborales, a quien asimismo corresponde la interpretación de este texto.

Art. 146. El Montepío, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la celebración de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Interprovincial remitirá certificación de los acuerdos adoptados al Servicio de Mutualidades Laborales. Dichos acuerdos, para que tengan validez, serán confirmados por el Servicio de Mutualidades Laborales, antes de haber transcurrido los quince días siguientes a su recepción.

Se considerarán válidos los referidos acuerdos si después de transcurrido el plazo señalado, el indicado Servicio no hubiera hecho uso del derecho de veto.

La certificación de los acuerdos adoptados por las Comisiones Provinciales se remitirá, en los mismos plazos y a los mismos efectos señalados en este artículo, al inmediato Órgano jerárquico interprovincial.

Art. 147. Los acuerdos de los Organos de Gobierno serán válidos y firmes una vez adoptados, salvo los que sobre veto del Servicio se establece en el artículo anterior sin necesidad de esperar a la aprobación del acta en sesión posterior.

DISPOSICION FINAL

Los presentes Estatutos comenzarán a regir el día 1 de abril de 1952, y se aplicarán íntegramente a las prestaciones causadas desde dicha fecha.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Todos los expedientes de prestaciones, instruidos y resueltos a tenor de las normas contenidas en los Estatutos de 11 de octubre de 1947 y 30 de marzo de 1950 (Referencia 316/50), se consideran firmes en su resolución.

Segunda.—Los derechos a prestaciones na-

cidos en virtud de hechos acaecidos con anterioridad al 1 de abril de 1952 y cuyos expedientes no hayan sido iniciados o resueltos se registrarán por las normas contenidas en los Estatutos aplicables en la fecha de los hechos causantes.

209 REGLAMENTOS DE TRABAJO.—INDUSTRIA PIMENTONERA

Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 28 de marzo de 1952, B. O. del E. número 114, del 23 de abril de 1952.

I. MOLIDO, TUESTE Y MEZCLA DE ESPECIES.—Se dispone que a las industrias de molido, tueste y mezcla de especies, se les aplique el Reglamento Nacional de Trabajo para la Industria Pimentonera.

II. TEXTO LITERAL.—Habiéndose planteado numerosas consultas acerca de la Reglamentación aplicable a aquellas industrias dedicadas al molido, tueste y mezcla de especies (azafranes, pimienta, canela, clavo, cominos, etc.), sus mezclas y, por último, su empaquetado para su venta, y de acuerdo con las facultades concedidas en el artículo segundo de la Orden de 31 de marzo de 1949 (Referencia 96/49), por la que se aprobó la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industria Pimentonera.

Esta Dirección General ha tenido a bien declarar que los establecimientos dedicados a la industria del molido, tueste y mezcla de especies (azafranes, pimienta, canela, clavo, cominos, etc.), sus mezclas y, por último, su empaquetado para su venta, se registrarán por la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industria Pimentonera, aprobada por Orden de 31 de marzo de 1949.

210 JURISDICCION Y PRO-CEDIMIENTO LABO-RAL.—MAGISTRATURAS DE TRABAJO

Orden del Ministerio de Trabajo, de 26 de marzo de 1952, B. O. del E. número 115, del 24 de abril de 1952.

I. SECRETARIOS DE MAGISTRATURA DE TRABAJO.—Se establece el distintivo que han de usar en actos oficiales.

II. TEXTO LITERAL.—La Orden de 17 de mayo de 1948 estableció los distintivos de los Magistrados del Trabajo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley Orgánica de 17 de octubre de 1940, y en su artículo cuarto dispone que los Secretarios de Magistratura vestirán de toga sobre traje negro en todos los actos que la haya de llevar el Magistrado, pero se omitió en la misma concretar el distintivo propio de estos funcionarios, por lo que, haciendo uso de la facultad conferida en la disposición adicional de la expresada Ley orgánica,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Los Secretarios de Magistratura del Trabajo, en todos aquellos actos en los que hayan de vestir la toga, conforme al artículo cuarto de la Orden de 17 de mayo de 1948, y en los que concurren como tales, en las audiencias públicas, actos oficiales

dentro del edificio y en los demás solemnes a que deban asistir en comisión o en cuerpo, con arreglo a las disposiciones legales vigentes, usarán como distintivo una placa de plata, sobre fondo grana, con el borde dorado, y en el centro el escudo nacional de la forma que a continuación figura en el modelo adjunto. Alrededor llevará la leyenda en plata: en la parte superior, "Magistratura del Trabajo", y en la inferior, "Fe pública laboral".

Iguals distintivos usarán los Secretarios del Tribunal Central de Trabajo y de la Inspección General de Magistraturas del Trabajo.

También podrán usar todos ellos un plaquín de solapa, que consistirá en la misma placa reseñada, en miniatura y con un diámetro de dos centímetros.

211 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES.—REGIMEN AGROPECUARIO

Orden del Ministerio de Trabajo, de 8 de abril de 1952, B. O. del E. número 117, del 26 de abril de 1952.

I. COTIZACION.—Normas complementarias sobre la cotización de los trabajadores en el Régimen Especial Agropecuario.

II. TEXTO LITERAL.—Establecidas en el Decreto de 21 de marzo de 1952 (Ref. 110/52) las directrices fundamentales por que ha de regularse la cotización de los trabajadores en la Rama Agropecuaria, procede dictar las normas precisas para la efectividad de cuanto en aquella disposición se previene, en armonía con la legislación aplicable a la materia.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º El importe de las cuotas de los trabajadores agrícolas para el régimen especial de seguros sociales en la Rama Agropecuaria, establecido en el artículo primero del Decreto de 21 de marzo de 1952, se hará efectivo por medio de cupones con valor único de cinco pesetas.

Art. 2.º Los cupones que acrediten el pago de las cuotas serán abonables mensualmente por los trabajadores fijos por cuenta ajena y productores autónomos y cada dos meses por los trabajadores eventuales por cuenta ajena.

No obstante, los trabajadores eventuales que realicen faenas agrícolas durante más de seis meses al año podrán abonar los cupones correspondientes a todos los meses trabajados durante dicho año sobre el mínimo de los seis exigidos obligatoriamente.

Lo dispuesto en el párrafo anterior en ningún caso será de aplicación a los trabajadores eventuales por cuenta ajena mayores de cincuenta y cinco años.

Art. 3.º A efectos de cuantía y abono de las cuotas por los trabajadores agropecuarios, la calificación laboral que se les haya asignado en el censo permanecerá inalterable hasta su primera revisión, salvo caso de baja definitiva en el mismo.

Art. 4.º No procederá el abono de ningún cupón sin estar al corriente en el pago de los anteriores.

El pago del primer cupón no libera la obligación de anteriores cotizaciones.

Art. 5.º El retraso en el pago de las cuotas determinará:

a) La automática aplicación de un recargo por mora del 10 por 100 del valor de los cupones correspondientes al semestre natural anterior que dentro del mismo no se hubiesen hecho efectivos.

b) Cuando el retraso en el pago de uno o varios cupones pase de doce meses sin exceder de dieciocho, además del recargo de mora del 10 por 100 podrá imponerse como sanción otra por igual cuantía.

c) Si el retraso excede dieciocho meses sin que llegue a veinticuatro, el importe de la sanción podrá elevarse hasta el 90 por 100 del de los cupones pendientes.

d) Para retrasos que excedan de veinticuatro meses, y a los morosos reincidentes, la sanción podrá llegar al triple del descuberto, incluido el recargo por mora.

La aplicación de las sanciones se ajustará a lo dispuesto en la Orden ministerial de 19 de enero de 1950 (Ref. 20/50).

Art. 6.º En caso de extravío de las hojas de cotización, los trabajadores titulares de las mismas vienen obligados a efectuar el abono de todos los cupones que corresponda adherir al duplicado de la hoja extraviada que a su instancia se le expida.

Art. 7.º El período de carencia, a efectos de la percepción del subsidio de vejez e invalidez se computará con arreglo al número de cupones abonados, que necesariamente habrán de figurar adheridos a las correspondientes hojas de cotización.

Para el cómputo de períodos de carencia, a las cuotas abonadas con recargo por mora no se les dará otro efecto retroactivo superior a cinco años.

Art. 8.º Las Corresponsalías Locales de Previsión Social, encargadas de la recaudación de las cuotas de los productores agropecuarios, habrán de formalizar la oportuna liquidación con el Instituto Nacional de Previsión en la forma y dentro de los plazos que éste establezca.

Disposición transitoria.—El pago de las cuotas correspondientes al segundo trimestre del corriente año se liquidará sin recargo, siempre que se hagan efectivas dentro del segundo semestre.

Disposición final.—La Dirección General de Previsión dictará las normas precisas para el desarrollo de cuanto dispone la presente Orden.

212 JURISDICCION Y PRO- CEDIMIENTO LABO- RAL.—MAGISTRATURAS DE TRABAJO

Orden del Ministerio de Trabajo de 26 de marzo de 1952, B. O. del E. número 118, del 27 de abril de 1952.

I. ALGUACILES.—Se establece que los Alguaciles de las Magistraturas de Trabajo tengan la consideración de Agentes de la Autoridad, cuando actúen en actos de servicio, y se determina el distintivo propio de su cargo para darse a conocer.

II. TEXTO LITERAL.—La Ley orgánica de la Magistratura de Trabajo de 17 de octubre de 1940, en el capítulo quinto del libro segundo, establece las normas pertinentes de aplicación a los Subalternos de la Magistratura, disponiendo que tanto en el

Tribunal Central de Trabajo como en las Magistraturas habrá el número de "Alguaciles" que la Dirección General de Jurisdicción estime preciso, y sintiéndose la necesidad, para el mejor desempeño de las funciones a ellos encomendadas como Auxiliares de los Tribunales de Justicia social, de otorgarles la consideración de Agentes de la Autoridad, con sus correspondientes distintivos que les acrediten como tales, dado el carácter y la consideración atribuida a los Magistrados de Trabajo por el artículo noveno de la citada Ley.

En su consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Art. 1.º Los Alguaciles del Tribunal Central de Trabajo y de las Magistraturas de Trabajo, a que se refiere el artículo 45 de la Ley orgánica de 17 de octubre de 1940, cumplirán todas las obligaciones propias de su cargo, obedecerán las órdenes que reciban del Presidente y Presidentes de Sala del Tribunal Central de Trabajo y de sus respectivos Magistrados, guardarán y harán guardar debidamente Sala y auxiliarán a los Secretarios de las Magistraturas en la práctica de diligencias necesarias para el cumplimiento de los acuerdos de los Tribunales, no pudiendo excusarse de obedecerles en todo cuanto afecte al servicio, sin perjuicio de acudir en queja ante el Presidente o Magistrados correspondientes si en la comisión conferida se le hubiera producido cualquier agravio.

Art. 2.º Los citados Alguaciles tendrán la consideración de Agentes de la Autoridad cuando obren en actos de servicio. Usarán como distintivo propio de su cargo para darse a conocer en todo momento, dentro del límite de sus actuaciones judiciales, una placa y un carnet expedido por la Dirección General de Jurisdicción del Trabajo.

Art. 3.º La placa será de forma elíptica, troquelada, de metal blanco con el borde dorado, y en el centro, el Aguila de San Juan en negro, y enmarcada en ésta, una rueda dentada con la balanza de la Justicia sobre un escudo rematado con la corona en fondo de color grana. Alrededor llevará la leyenda, en plata en la parte superior "Magistratura del Trabajo", y en la parte inferior, "Alguacil", ajustándose la referida placa al modelo adjunto.

Art. 4.º En cuanto a lo no prevenido en la presente Orden, se estará a lo dispuesto en el capítulo quinto, título segundo y capítulo primero del título tercero de la Ley orgánica de la Magistratura de Trabajo de 17 de octubre de 1940 y disposiciones complementarias.

Art. 5.º Los preceptos de esta Orden entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.

213 COOPERACION Y AC- CION SOCIAL.—VI- VIENDAS

Decreto del Ministerio de Trabajo, de 7 de marzo de 1952, B. O. del E. número 119, del 28 de abril de 1952.

I. VIVIENDAS PROTEGIDAS.—Se declara urgente la construcción de viviendas protegidas en determinadas localidades.

II. TEXTO LITERAL.—Las entidades a que se refiere el presente Decreto han promovido en el Instituto Nacional de la Vivienda el oportuno expediente para la construcción de sendos grupos de "viviendas protegidas" al amparo de la Ley de diecinueve de abril de mil novecientos treinta y nueve.

Aprobados los correspondientes proyectos por el Instituto, procede aplicar la expropiación forzosa de los terrenos, toda vez que se han encontrado dificultades para su adquisición.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo único.—Se declaran urgentes, a los efectos prevenidos en la Ley de siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve, las obras para la construcción de los siguientes proyectos aprobados por el Instituto Nacional de la Vivienda:

Proyecto presentado por la Obra Sindical del Hogar de la Delegación Nacional de Sindicatos para la construcción de un grupo de cuatrocientas "viviendas protegidas", denominado "Francisco Franco", en Palencia, aprobado por el Instituto Nacional de la Vivienda, a los efectos previos que determina el artículo cincuenta y tres del Reglamento de ocho de septiembre de mil novecientos treinta y nueve. Los terrenos expropiables tienen una extensión superficial de cuarenta y cuatro mil novecientos doce metros cuadrados, y se hallan sitos en el lugar conocido por "Eras del Bosque", término municipal de Palencia, y son de la propiedad de doña Basilia Ortega, don Cristóbal Castillejo, herederos de don Fernando Monedero y los de don Juan Alcnso.

Proyecto presentado por la Asociación Benéfica "Santa María de Covadonga" para la construcción de un grupo de mil noventa "viviendas protegidas" en Oviedo, aprobado por el Instituto Nacional de la Vivienda en nueve de febrero del año en curso. Los terrenos expropiables tienen una extensión superficial de veinticinco mil sesenta y cinco metros cuadrados, y se hallan sitos en el lugar denominado La Malaca, en La Corredoria, arrabal de la ciudad de Oviedo.

Proyecto del Instituto Nacional de la Vivienda para la construcción de un grupo de trescientas diez "viviendas protegidas", con destino a productores mineros en Sotondrio, segunda fase, Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio (Oviedo), aprobado en veintiocho de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve. Los terrenos expropiables están formados por agrupación de las fincas llamadas "Campona" y "Huerta de la Corredora", y lindan: Norte, carretera, camino antiguo y terrenos de la cerámica El Villar; Sur, Rogelio y Mercedes Hevia Blanco; Este, Herederos de Lorenzo Sánchez, y Oeste, camino e instalaciones de la citada leñera, y habrán de ocuparse al sólo efecto de obtener la materia prima necesaria para la fabricación de ladrillo y teja que se precisan en la construcción del referido grupo de viviendas, procediéndose a su devolución, al dejar dichos terrenos de ser necesarios, con arreglo a lo establecido en el artículo cuarenta y tres de la Ley de diez de enero de mil ochocientos setenta y nueve.

214 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES.—SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD

Decreto del Ministerio de Trabajo, de 7 de marzo de 1952, B. O. del E. número 119, del 28 de abril de 1952.

I. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID.—Se autoriza a esta entidad para constituirse en régimen de Caja de Empresa, a los efectos del Seguro Obligatorio de Enfermedad.

II. TEXTO LITERAL.—El Decreto de este Ministerio de trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis y su Orden complementaria de dieciséis de enero siguiente cerraron el plazo de reconocimiento de nuevas Entidades Colaboradoras del Seguro Obligatorio de Enfermedad, sin más excepción que las Cajas de Empresa con determinado volumen de personal y en las que concurrían, además, ciertas condiciones muy especificadas de excepcional conveniencia social.

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, que ha recogido todo el transporte urbano y suburbano de la capital, incluyendo el de los Municipios anexionados, con un número considerable de trabajadores, se dirige al Ministerio de Trabajo solicitando se le autorice para constituir una Caja de Empresa, al objeto de facilitar las prestaciones del mencionado Seguro a su personal, habida cuenta de importantes razones que invoca, y constando la realidad de sus alegaciones y la conveniencia social que se derivaría de acceder a su solicitud, previa deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta del de Trabajo.

DISPONGO:

Artículo primero.—Se autoriza a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid para que constituya una Caja de Empresa con ámbito reducido a todos los trabajadores de la misma, al objeto de facilitarles las prestaciones del Seguro Obligatorio de Enfermedad, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de dos de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro y sus disposiciones complementarias.

Artículo segundo.—La Empresa Municipal de transportes procederá a redactar los Reglamentos de la mencionada Caja de Empresa, que someterá a la aprobación de la Dirección General de Previsión, cumpliendo los demás trámites hasta la firma del oportuno Convenio con los Organismos competentes del Instituto Nacional de Previsión.

Artículo tercero.—La Caja de Empresa que se constituya conforme a esta disposición quedará sujeta a la totalidad de las obligaciones, cualesquiera que sea su naturaleza, actualmente establecidas para las Entidades Colaboradoras del expresado Seguro.

Artículo cuarto.—Por el Ministerio de Trabajo o la Dirección General de Previsión, en su caso, se dictarán las medidas que exija el cumplimiento de lo dispuesto.

Artículo quinto.—Se derogan las disposiciones que se opongan al cumplimiento de lo prevenido en el presente Decreto.

215 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES.—SUBSIDIOS FAMILIARES

Decreto del Ministerio de Trabajo, de 4 de

abril de 1952, *B. O. del E.* número 119, del 28 de abril de 1952.

I. FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y OBREROS DEL ESTADO.—Se reintegra la vigencia de las disposiciones anteriores al Decreto de 22 de julio de 1948, sobre el concepto de funcionarios, empleados y obreros del Estado, a los efectos del régimen de Subsidios Familiares.

II. TEXTO LITERAL.—La publicación del Decreto de veintidós de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, por el que se definió el concepto de funcionarios, empleados y obreros del Estado, a efectos del régimen de Subsidios Familiares, suscitó dudas respecto a su aplicación, las que se han traducido, a su vez, en ser las dificultades para el percibo del Subsidio por el personal afectado por dicho Decreto.

Como las disposiciones vigentes con anterioridad a aquella disposición parecen suficientemente claras y eficaces en esta materia, se estima conveniente declarar su plena vigencia.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO :

Artículo único.—Se deroga el Decreto de veintidós de julio de mil novecientos cuarenta y ocho sobre el régimen de Subsidios Familiares para funcionarios, empleados y obreros del Estado.

216 DEPARTAMENTOS MINISTERIALES, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS ESPECIALES.—COLEGIOS OFICIALES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Orden del Ministerio de Trabajo, de 3 de mayo de 1952, *B. O. del E.* número 129, del 8 de mayo de 1952.

I. INCORPORACION.—Se concede un último e improrrogable plazo de treinta días para la incorporación al Colegio provincial respectivo a todos los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

II. TEXTO LITERAL.—El Decreto de 6 de abril de 1951 (Ref. 230/51), que aprobó el Reglamento de los Colegios oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, al establecer la colegiación obligatoria para el ejercicio de esta profesión y determinar las condiciones de ingreso, concedió un plazo de sesenta días, en su disposición transitoria, para que pudiesen solicitar su alta en los mismos todos aquellos que venían satisfaciendo la correspondiente contribución industrial.

Por Orden comunicada de 24 de julio de dicho año se dispuso que el plazo fijado en la mencionada disposición transitoria comenzaría a contarse a partir de la fecha de constitución de los Colegios.

Constituidos hoy en toda España dichos Organismos, y ante las numerosas peticiones elevadas a la Junta Central por los profesionales que por diversas causas no pudieron solicitar en tiempo su colegiación;

Visto el informe de la expresada Junta Central, y a fin de evitar los consiguientes

perjuicios a cuantos se pueden ver privados del ejercicio de su actividad profesional.

Este Ministerio ha tenido a bien conceder un último e improrrogable plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de la presente Orden en el *Boletín Oficial del Estado*, para que todos aquellos Agentes de la Propiedad Inmobiliaria que acrediten estar dados de alta en la contribución industrial a la fecha de su publicación, puedan solicitar el ingreso en los respectivos Colegios provinciales, previo pago de la cuota de entrada y constitución de la oportuna fianza.

217 JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO LABORAL.—MAGISTRATURAS DE TRABAJO

Orden del Ministerio de Trabajo, de 23 de abril de 1952, *B. O. del E.* número 129, del 8 de mayo de 1952.

I. DIAS INHABILES.—Se declaran inhábiles a todos los efectos procesales los días 26 al 31 de mayo en las Magistraturas de Trabajo de Barcelona.

II. TEXTO LITERAL.—Con motivo del Congreso Eucarístico, que ha de celebrarse en Barcelona, con trascendencia internacional, y con el fin de que todos puedan sumarse a este acto, de evidente importancia religiosa y nacional.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: Primero. Se declaran inhábiles, a todos los efectos procesales, los días 26 al 31 de mayo, ambos inclusive, del corriente año, para todos los asuntos que se tramiten ante las Magistraturas de Trabajo de Barcelona.

218 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES.—ACCIDENTES DEL TRABAJO

Resolución de la Dirección General de Previsión, de 15 de abril de 1952, *B. O. del E.* número 129, del 8 de mayo de 1952.

I. TARIFAS MINIMAS.—Se rectifica el error advertido en el texto publicado en el *"Boletín Oficial del Estado"*, del 11 de abril del año en curso, sobre Instrucciones para determinar las Tarifas mínimas del Seguro de Accidentes del Trabajo.

II. TEXTO LITERAL.—Habiéndose padecido un error de copia en la inserción en el *Boletín Oficial del Estado* correspondiente al día 11 del corriente (Ref. 161/52), del último párrafo de la Instrucción 11 para aplicación de las Tarifas de Accidentes de Trabajo, se reproduce a continuación debidamente rectificado:

"Igualmente, y a petición del interesado, podrá quedar incluido expresamente en las garantías de la póliza el propio empresario, con las limitaciones anteriormente establecidas en cuanto al importe del jornal o salario base diario, pero siempre que no ocupe más de tres obreros, incluyendo los familiares, y que el total de los salarios asegurados en el contrato no excedan de 12.000 pesetas anuales. El jornal del patrono se computará por la totalidad de los días del año o período inferior por el que se contrate la póliza."

219 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION

Resolución de la Dirección General de Previsión, de 8 de mayo de 1952, B. O. del E. número 135, del 14 de mayo de 1952.

I. MOLIDO, TUESTE Y MEZCLAS DE ESPECIAS.—Se determina la incorporación al Montepío de las Industrias de la Alimentación, las Empresas y trabajadores pertenecientes a la Industria del molido, tueste y mezcla de especias, sus mezclas y empaquetado para su venta.

II. TEXTO LITERAL.—Por resolución de la Dirección General de Trabajo de 28 de marzo de 1952 (Ref. 209/52), se dispone que las industrias del molido, tueste y mezcla de especias (azafranes, pimienta, canela, clavo, cominos, etc.), sus mezclas y su empaquetado para su venta, se regirán por la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Industria Pimentonera, aprobada por Orden de 31 de marzo de 1949 (Ref. 96/49). Dicha resolución habría de entrar en vigor el día de su publicación en el *Boletín Oficial del Estado*, que fué el de 23 del pasado mes de abril.

La Reglamentación de la Industria Pimentonera dispone la incorporación de las Empresas y trabajadores por ella afectados al mutualismo laboral; por ello, se hace preciso dictar las normas complementarias que regulen el cumplimiento de esta parte de la Reglamentación en cuanto al personal afectado por la resolución dicha y faciliten su incorporación a la Mutualidad Laboral de Industrias de la Alimentación, donde se halla encuadrado aquel Sector Laboral.

Por lo expuesto, y en uso de las atribuciones que le están conferidas en el apartado b) del artículo cuarto del Decreto de 25 de mayo de 1951 (Ref. 242/51), esta Jefatura ha tenido a bien resolver:

Primero.—Las Empresas y trabajadores pertenecientes a las Industrias del molido, tueste y mezcla de especias, sus mezclas y empaquetado para su venta, a que se refiere la resolución de la Dirección General de Trabajo de fecha 28 de marzo de 1952, quedan incorporados a la Mutualidad Laboral de Industrias de la Alimentación, con efectos a partir de 1 de mayo de 1952.

Segundo.—Las Empresas y trabajadores a que se refiere el apartado anterior deberán cotizar a la Mutualidad el seis y tres por ciento, respectivamente, sobre los salarios que aquéllos perciban; el importe de dichas cotizaciones será ingresado en las cuentas corrientes receptoras abiertas a nombre de la Mutualidad en las Cajas de Ahorro o Entidades Bancarias autorizadas al efecto.

Tercero.—Los derechos y deberes de las Empresas y trabajadores a que se refiere la presente resolución serán los determinados

en los Estatutos de la Mutualidad de Industrias de la Alimentación, aprobados por Orden de 21 de marzo de 1951 (Ref. 145/51).

Para tener derecho a las prestaciones de Jubilación, Invalidez, Orfandad y Larga Enfermedad, establecidas en dichos Estatutos, será preciso que los interesados hayan cotizado a la Mutualidad durante un período de tiempo igual a la mitad del comprendido entre la fecha inicial de cotización de 1 de mayo de 1952 y aquella otra en que se produzca el hecho causante de la prestación, con un mínimo de seis meses en todo caso.

Por lo que se refiere a las prestaciones que se causen a partir del 1 de mayo de 1954, el período mínimo de cotización exigible será el siguiente:

Para las prestaciones de Jubilación y Larga Enfermedad, la mitad del tiempo transcurrido desde la fecha inicial de cotización hasta aquella en que se produzca el hecho causante, según lo establecido en el artículo 133 de los citados Estatutos.

Para las prestaciones de Invalidez, Viudedad y Orfandad, un período de un año, según lo prevenido en los artículos 97, 102 y 107 de dichos Estatutos.

220 REGLAMENTO DE TRABAJO.—SECTOR SEDE-RO DE LA INDUSTRIA TEXTIL

Resolución de la Dirección General de Trabajo, de 30 de abril de 1952, B. O. del E. número 138, del 17 de mayo de 1952.

I. RECOGEDORA, REPARADORA Y REPARTIDORA DE CARRETES.—Se determinan las funciones y salarios de las trabajadoras dedicadas a las funciones de recoger, reparar y repartir carretes.

II. TEXTO LITERAL.—Con el fin de incluir una categoría profesional típica del personal obrero en la Sección de Manipulados y Torcidos, no recogida en el Reglamento Nacional de Trabajo para el Sector Sedero de la Industria Textil, de 31 de enero de 1946.

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene conferidas, y a las que de modo concreto se refiere el número segundo de la referida Orden de 31 de enero de 1946, ha tenido a bien acordar lo siguiente:

1.º Entre los apartados d) y el e) del inciso B) del artículo 20 de las Ordenanzas de Trabajo para el Sector Sedero de la Industria Textil se incluirá otro del tenor literal siguiente:

“*Recogedora, Reparadora y Repartidora de carretes:* Aquellas trabajadoras que, previo el correspondiente aprendizaje, tienen como misión propia y específica la revisión de los carretes, separando los defectuosos, y procediendo, en cuanto a los bien acabados, a su debida clasificación.”

2.º En el apartado b), inciso 2), del artículo 43 de las referidas Ordenanzas de Trabajo, se incluirá la categoría profesional siguiente:

	1.ª Zona	2.ª Zona	3.ª Zona
--	----------	----------	----------

DIARIO

Recogedora, Reparadora y Repartidora de carretes.....	10,00	9,00	8,50
---	-------	------	------

Lo establecido en la presente resolución comenzará su vigencia a partir del día siguiente al de su inserción en el *Boletín Oficial del Estado*.

221 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—INDUSTRIAS QUIMICAS

Servicio de Mutualidades y Montepíos, B. O. del E. número 139, del 18 de mayo de 1952.

I. ESTATUTOS.—Rectifica los errores advertidos en el texto oficial de los Estatutos del Montepío Interprovincial de Previsión Social de los Trabajadores de las Industrias Químicas (Ref. 208/52), que afectan a los artículos 5, 20 y 76.

II. TEXTO LITERAL.—Art. 5.º Donde dice: "Factorías Bacaladeras", debe decir: "Factorías Bacaladeras, incorporadas al Montepío de la Zona Norte."

Art. 20. Apartado e), donde dice: "Comisión Permanente Nacional", debe decir: "Comisión Permanente Interprovincial".

Art. 76. Apartado e). Su redacción será modificada de la forma siguiente: "e) Para el cumplimiento de los fines que se determinan en la Orden ministerial de 9 de julio de 1951 (Ref. 399/51), la Institución ingresará en la Caja de Compensación y Reaseguros canon en cuantía igual al 3 por 100 de la cotización percibida."

222 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—NORMAS DE APLICACION GENERAL

Orden del Ministerio de Trabajo, de 31 de marzo de 1952, B. O. del E. número 139, del 18 de mayo de 1952.

I. DERECHOS DE REGISTRO E INSCRIPCION.—Derechos que han de abonar por los conceptos de registro e inscripción correspondientes al ejercicio 1952 las Mutualidades y Montepíos de Previsión Social.

II. TEXTO LITERAL.—Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de 26 de mayo de 1943, dictado para aplicación de la Ley de 6 de diciembre de 1941, y en armonía con lo preceptuado en la Orden del Ministerio de Hacienda de 13 de noviembre de 1944, sobre derechos de registro e inscripción de las Mutualidades y Montepíos de Previsión Social.

Este Ministerio se ha servido disponer:

1.º Los derechos de Registro para todos los Montepíos y Mutualidades de Previsión Social, que durante el ejercicio de 1952, sean aprobados e inscritos en el Registro oficial de Montepíos y Mutualidades de la Dirección General de Previsión, se fijan en cien pesetas, que serán abonados por una sola vez.

2.º Los derechos de inscripción para el referido ejercicio de 1952 se fijan en la canti-

dad de 0,15 pesetas por mutualista que figure como socio activo en la Entidad, siempre que ésta se halle inscrita o se inscriba durante el mismo en el Registro Oficial de Montepíos y Mutualidades de la Dirección General de Previsión.

3.º Aquellas Mutualidades y Montepíos que además de reunir las condiciones señaladas en el artículo primero tengan concertado o concierten en lo sucesivo la prestación de servicios del Seguro Obligatorio de Enfermedad, satisfarán los derechos establecidos en el artículo anterior y además 0,10 pesetas por cada uno de los trabajadores que tengan el carácter de beneficiarios de dicho Seguro. Estos derechos, son naturalmente independientes de los que tengan que satisfacer por la práctica del referido Seguro en el Registro correspondiente de la Dirección General de Previsión.

4.º Los derechos de Registro serán satisfechos por las Entidades afectadas, en el plazo máximo de un mes, contado desde la fecha de la publicación de esta Orden; para las que se inscriban en lo sucesivo, el plazo indicado se contará a partir de la fecha en que por la Dirección General de Previsión se comunique la inclusión en el Registro Oficial de Montepíos y Mutualidades.

5.º Los derechos de inscripción serán satisfechos por las Entidades incluidas en el Registro oficial en el plazo máximo de un mes, con arreglo al número de asociados o trabajadores beneficiarios existentes en las respectivas Mutualidades o Montepíos, en primero de enero del año en curso. Las entidades mutualistas que se inscriban en lo sucesivo procederán al pago de los derechos de inscripción, con arreglo al número de asociados o beneficiarios que tengan el día en que sean declaradas entidades de Previsión Social por haberse aprobado con carácter definitivo o provisional sus Estatutos o Reglamentos.

6.º El ingreso de estos derechos, en la cuantía señalada, se efectuará en las Delegaciones o Subdelegaciones de Hacienda correspondientes, en el momento de ser presentada la declaración jurada a que hace referencia la Orden del Ministerio de Hacienda de 13 de noviembre de 1944, y dentro de los plazos señalados en la presente disposición.

7.º Los Montepíos y Mutualidades de Previsión Social afectados por esta Orden remitirán a la Dirección General de Previsión, en el plazo de un mes, certificación acreditativa del número de asociados o trabajadores beneficiarios que tenían inscritos en primero de enero del año actual, o en el momento de su inscripción en el Registro oficial, con indicación de la cuantía de los derechos de registro e inscripción ingresados en Hacienda, debiendo igualmente el Organismo en que se haga el ingreso, comunicar a dicha Dirección General las cantidades depositadas por cada Entidad por estos conceptos, y la fecha en que lo hizo.

8.º Todos estos derechos se fijan exclusivamente por el carácter de Mutualidad o Montepío, y son por tanto, independientes de aquellos otros que puedan corresponderles por la práctica de determinados Seguros Sociales, y que corresponda exigir a los Registros que tengan a cargo la intervención y vigilancia de dichos Seguros.

223 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES.—ACCIDENTES DEL TRABAJO.—SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD

Orden del Ministerio de Trabajo, de 31 de marzo de 1952, B. O. del E. número 139, del 18 de mayo de 1952.

I. ASISTENCIA MEDICO - FARMACEUTICA.—Se dictan normas para que en caso de no ser atendidos los trabajadores accidentados por sus Empresas o Entidades aseguradoras tengan la asistencia médica-farmacéutica del Seguro Obligatorio de Enfermedad, sin perjuicio de ser éste reintegrado en los gastos con cargo a aquéllos.

II. TEXTO LITERAL.—El artículo segundo del Reglamento para la aplicación de la Ley del Seguro de Enfermedad dispone que no darán derecho, entre otras causas, a las prestaciones del citado Seguro los accidentes del trabajo, si bien posteriormente, en su artículo tercero, ordena que si un asegurado comprendido en el caso aludido solicitase la asistencia del Seguro de Enfermedad éste se le prestará en la medida urgente necesaria, sin perjuicio de formular la oportuna reclamación a la entidad aseguradora de accidente o empresario responsable, que deberá satisfacer al Seguro de Enfermedad el importe de las prestaciones recibidas por los asegurados.

No ha sabido interpretarse adecuadamente el espíritu altamente social que inspiró la anterior disposición, y ello ha dado lugar a la existencia de determinados casos en que los obreros se han visto privados de la necesaria y obligada asistencia, en perjuicio no sólo de la salud de los interesados, sino del importante aspecto de su recuperación laboral.

Por estas consideraciones, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

1.º Cuando un obrero víctima de un siniestro que considere laboral se viera privado de la asistencia médico-farmacéutica por parte de la entidad aseguradora de accidentes de trabajo o de su propio patrono que asuma directamente el riesgo de incapacidad temporal, podrá acudir a la entidad colaboradora del Seguro de Enfermedad en que se hallase afiliado reclamando la debida asistencia, la cual deberá prestársela urgente e exclusivamente durante todo el tiempo que facultativamente se considere necesario.

2.º Las entidades colaboradoras del Seguro de Enfermedad deberán requerir inmediatamente a la aseguradora de accidentes o patrono, en su caso, para que se hagan cargo de la asistencia del accidentado, que provisionalmente ha asumido o manifestado las razones en que su negativa se funde.

3.º La entidad colaboradora, una vez recibida contestación al anterior requerimiento, lo remitirá con su informe a la Dirección General de Previsión, la cual podrá oficiar a la Inspección Técnica de Previsión Social a los efectos de lo dispuesto en el artículo 4.º, g) del Reglamento de 8 de noviembre de 1946.

4.º Una vez resuelto si las lesiones padecidas por el obrero son consecuencia de accidente de trabajo, la Entidad colaboradora

requerirá nuevamente a la aseguradora de accidentes para que le reintegre los gastos por ella efectuados en el tratamiento de aquéllas, con arreglo a la tarifa oficial, incrementado en un 10 por 100, en concepto de demora.

5.º Todas las cuestiones que surjan entre las entidades aseguradoras de accidentes de trabajo y las colaboradoras del Seguro de Enfermedad serán resueltas sin ulterior recurso por la Dirección General de Previsión, previo los informes que se consideren necesarios.

224 MÚTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, B. O. del E. número 140, del 28 de mayo de 1952.

I. ESTATUTOS.—Se rectifican los errores advertidos en el texto oficial de los Estatutos, que afecta a su rúbrica, que en lugar de "Transportes Terrestres" debe decir "Transportes y Comunicaciones" y a los arts. 67, 76, 88, 96 y 140.

II. TEXTO OFICIAL.—Habiéndose padecido diversos errores en la inserción de los citados Estatutos, publicados en el *Boletín Oficial del Estado* del día 17 de abril de 1952 (Ref. 206/52), páginas 1.734 a 1.743, se rectifican a continuación:

En el sumario, donde dice: "Orden de 24 de marzo de 1952 por la que se aprueban los Estatutos del Montepío Nacional de Previsión Social de los Trabajadores en las Industrias de Transportes Terrestres": debe decir: "Orden de 24 de marzo de 1952 por la que se aprueban los Estatutos del Montepío Nacional de Previsión Social de Transportes y Comunicaciones."

En el artículo 67, párrafo segundo, líneas segunda y tercera, donde dice "será de aplicación la Orden de 6 de octubre de 1949", debe decir "será de aplicación la Orden de 8 de octubre de 1949" (Ref. 237/49).

En el artículo 76, apartado d), última línea, donde dice "accidental", debe decir "accidental".

Apartado e) Su redacción será modificada de la forma siguiente: "e) Para el cumplimiento de los fines que se determinan en la Orden ministerial de 9 de julio de 1951 (Ref. 399/51), la Institución ingresará en la Caja de Compensación y Reaseguros canon en cuantía igual al 3 por 100 de la cotización percibida."

En el artículo 88, segundo párrafo, línea quinta, donde dice "que corresponda al período anterior", debe decir "que corresponda al período inferior".

En el artículo 96, apartado b), donde dice "Viudas menores de cuarenta años o menores de esa edad...", debe decir "Viudas mayores de cuarenta años o menores de esta edad..."

Y en el artículo 140, segundo párrafo, donde dice "la sanción que corresponde", debe decir "la sanción que corresponda".

225 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION

Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, B. O. del E. núm. 141, del 20 de mayo de 1952.

I. MOLIDO, TUESTE Y MEZCLA DE ESPECIAS Y EMPAQUETADOS PARA SU VENTA.—Se rectifica el texto de las normas sobre incorporación a la Mutualidad Laboral de Industrias de la Alimentación del Sector de Industrias del Molido, Tueste y Mezclas de Especies y Empaquetados para su venta.

II. TEXTO LITERAL.—Padecido error en la publicación del párrafo segundo del apartado tercero de dicha Resolución, inserta en el *Boletín Oficial del Estado* de 14 de mayo de 1952 (Ref. 219/52), a continuación se transcribe el referido párrafo debidamente rectificado:

"Para tener derecho a las prestaciones de Jubilación, Invalidez, Viudedad, Orfandad y Larga Enfermedad establecidas en dichos Estatutos, será preciso que los interesados hayan cotizado a la Mutualidad durante un período de tiempo igual a la mitad del comprendido entre la fecha inicial de cotización de 1 de mayo de 1952 y aquella otra en que se produzca el hecho causante de la prestación, con un mínimo de seis meses en todo caso."

226 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES.—PESCA MARITIMA

Orden del Ministerio de Trabajo, de 5 de abril de 1952, B. O. del E. núm. 142, del 21 de mayo de 1952.

I. SALARIO BASE.—A los efectos de la afiliación y cotización en los Seguros Sociales respecto de los trabajadores encuadrados dentro del Reglamento de Pesca Marítima.

II. TEXTO LITERAL.—La aplicación a los trabajadores afectados por la Reglamentación de la Pesca marítima de las disposiciones contenidas en los Decretos de 29 de diciembre de 1948 (Ref. 18/49) y 7 (Referencia 276/49) y 17 de junio del siguiente año (Ref. 168/49), en lo que se refiere a su afiliación a los regímenes de previsión social, origina la exclusión de muchos de los que ejercen esta profesión en la flota de altura, derivada del hecho de que obtiene unos ingresos anuales que superan las 18.000 pesetas fijadas al efecto como tope máximo.

Si se tiene en cuenta que una gran parte de sus ingresos corresponden a las primas de pesca, que evidentemente tienen carácter de primas a la producción, se llega a la consecuencia de que las mismas no deben computarse íntegramente a estos efectos, sino en el porcentaje que equitativamente corresponda, de acuerdo con lo que al efecto se establece en el Decreto de 17 de junio de 1949, antes citado.

Y siendo así que en la Reglamentación de

la Pesca marítima se señala el porcentaje que representan las primas de pesca, se hace preciso determinar éste para regularizar la afiliación y cotización de estos trabajadores a los Seguros Sociales y Montepío laboral correspondiente.

En virtud de lo expuesto,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo único.—La afiliación y cotización de los trabajadores afectados por la Reglamentación de la Pesca marítima a los Seguros Sociales se efectuará tomando como base el sueldo reglamentario, incrementado en un 25 por 100, en atención a las primas sobre la producción que estos trabajadores perciben.

227 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES.—SUBSIDIO DE PARO POR ESCASEZ DE ENERGIA ELECTRICA

Orden del Ministerio de Hacienda, de 21 de mayo de 1952, B. O. del E. número 145, del 24 de mayo de 1952.

I. CAJA DE COMPENSACION.—Se dictan normas para la ejecución del Decreto de 28 de marzo de 1952, sobre supresión de esta Caja de Compensación, imponiendo determinadas obligaciones a las Empresas que hasta ahora vinieron realizando la recaudación del recargo especial.

II. TEXTO LITERAL.—En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo octavo del Decreto de 28 de marzo de 1952 (Referencia 160/52), por el que ha sido suprimida la "Caja de Compensación del Paro por escasez de energía eléctrica", y en relación con el artículo tercero del mismo, que transfiere al Estado los derechos y obligaciones de dicha Caja.

Este ministerio tiene a bien disponer:

1.º Por la Dirección General de la Contribución de Usos y Consumos se procederá a la administración, recaudación e inspección del recargo especial sobre el suministro de energía eléctrica, creado por Decreto-Ley de 3 de agosto de 1945, mientras que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo tercero del Decreto de 28 de marzo último, haya de continuar el vigor el referido gravamen.

2.º Las Empresas que, con arreglo al Decreto-Ley antes citado, vienen obligadas a la recaudación e ingreso del recargo especial, presentarán a las Delegaciones de Hacienda, al propio tiempo que las declaraciones para el pago del impuesto sobre el consumo de electricidad, una declaración por duplicado con arreglo al modelo que se detalla al final de la presente Orden. Un ejemplar de esta declaración se devolverá a la Empresa, y los otros dos quedarán en poder de las oficinas de Hacienda para su tramitación, en forma análoga a las declaraciones del Impuesto.

3.º El ingreso de lo recaudado se hará en la Delegación de Hacienda correspondiente, en el mismo día en que se presente la declaración.

Estos ingresos no vendrán disminuidos por ningún concepto, tales como premio de cobranza, gastos de giro, 5 por 100 de administración y cobranza, etc., y se aplicarán a la cuenta especial a que se refiere el número décimo de la presente Orden.

4.º Las declaraciones presentadas por las

Empresas serán objeto de comprobación por la Inspección Técnica de Hacienda que tiene a su cargo el Impuesto sobre el consumo de electricidad, considerándose modificada en este sentido la Orden ministerial de este Departamento de 22 de octubre de 1945.

La comprobación de estas declaraciones se efectuará al propio tiempo que las del Impuesto, salvo que razones especiales aconsejen anticiparla en casos determinados. A dicho efecto, las Empresas permitirán a la Inspección el examen de todos los libros y antecedentes relacionados con la producción de fluido y con la recaudación obtenida.

5.º Como consecuencia de la supresión de la "Caja de Compensación" dispuesta en el artículo cuarto del citado Decreto de 28 de marzo último, todas las incidencias, recursos, etc., que se deriven de este nuevo régimen administrativo para el recargo de que se trata, habrán de sustanciarse conforme al Reglamento del Impuesto sobre el consumo de gas, electricidad y carburo de calcio, de 8 de julio de 1946, que será de aplicación para todo lo no previsto específicamente en la legislación de dicho recargo.

6.º Las normas anteriores regirán desde la fecha de su publicación en el *Boletín Oficial del Estado*, siendo de aplicación inclusiva para la recaudación correspondiente al segundo trimestre del año actual.

7.º Una vez cumplido el cometido asignado a la Comisión instituida por el artículo cuarto del Decreto de 28 de marzo de 1952, para las funciones directivas y de gestión concernientes a la liquidación de la Caja suprimida, se hará por la misma formal entrega de la documentación y bienes de toda clase, incluso mobiliario, máquinas y demás material de oficina en poder del citado Organismo a esa Subsecretaría, que será la encargada de sustanciar y resolver las incidencias o reclamaciones que puedan suscitarse en orden a los hechos que registre la correspondiente liquidación.

Para el hecho material de la entrega y recepción antes señalada, podrá delegar esa Subsecretaría sus funciones en el Delegado de Hacienda de Barcelona.

8.º Los créditos que se concreten a favor de la Caja se comunicarán por esa Subsecretaría a la Dirección General del Tesoro público, a fin de que por las Delegaciones de Hacienda correspondientes, según la domiciliación de los respectivos deudores, se proceda a su debida contracción en contabilidad y gestión de cobro, utilizando para ésta, en su caso, el procedimiento de apremio administrativo.

9.º Las obligaciones de la Caja serán atendidas con los ingresos que se obtengan de la realización de los créditos resultantes de su liquidación, más los que, en virtud de la expresada autorización contenida en el Decreto de supresión de la Caja, produzcan el transitorio mantenimiento del recargo que sobre el consumo de energía eléctrica fué establecido por el Decreto-Ley de 3 de diciembre del año 1948.

10. Todos los ingresos o recursos propios de la Caja, o adscritos a sus obligaciones, afluirán, inexcusablemente, a una cuenta especial que funcionará en la Delegación Central de Hacienda, a través de la cual, también sin excepción alguna, tendrán efectividad, por mediación de la Dirección del Te-

soro, los pagos que por razón de aquéllas fueren acordados.

11. Trimestralmente e informados por la Intervención General, esa Subsecretaría y la Dirección General del Tesoro público, someterán a conocimiento y aprobación del Ministro, respectivamente, estados demostrativos de los derechos y obligaciones que afecten a la Caja suprimida, y del desenvolvimiento de la cuenta especial de ingresos y pagos relativos a ella, y así que los ingresos cubran el importe de las obligaciones, deberá formularse, para su elevación al Consejo de Ministros, propuesta de cesación del recargo sobre el consumo del fluido eléctrico.

12. En ejecución de lo dispuesto en el artículo séptimo del Decreto de 28 de marzo pasado, de supresión de la Caja, los funcionarios de este Ministerio que intervengan en la realización de trabajos derivados de la misma no podrán recibir remuneración alguna especial por razón de estos servicios.

13. Se autoriza a los Centros directivos de este Ministerio afectados por esta disposición, para dictar las normas que estimen pertinentes para ejecución de la misma.

Transitorio. Las cantidades que, por cualquier causa, se hallen pendientes de ingreso, por razón del recargo especial sobre el suministro de energía eléctrica y que correspondan a periodos anteriores al trimestre en curso, serán objeto de declaración especial, que habrá de ser presentada e ingresada en las Delegaciones de Hacienda antes del día 31 del mes en curso.

228 SEGUROS Y SUBSIDIOS SOCIALES. — SUBSIDIO FAMILIAR

Orden del Ministerio de Trabajo, de 15 de abril de 1952, B. O. del E. número 146, del 25 de mayo de 1952.

I. SUBSIDIOS DE VIUDEDAD Y ORFANDAD.—Se declara la compatibilidad de los Subsidios de Viudedad y Orfandad concedido por el Subsidio Familiar con otras pensiones de análoga naturaleza, concedida por el Estado, Entidades oficiales, Corporaciones o particulares, siempre que su importe no exceda de 4.000 pesetas anuales.

II. TEXTO LITERAL.—Instituidos los subsidios de Viudedad y Orfandad dentro del Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares, la Orden de este Ministerio de 11 de junio de 1941, que regula su concesión, excluye de los mismos a las viudas y huérfanos de trabajadores que, no obstante reunir los demás requisitos exigidos disfruten por tal condición de pensiones a cargo del Estado, Corporaciones o Entidades oficiales o particulares, mientras que aquellos subsidios son compatibles con los de igual naturaleza concedidos por los Montepíos Laborales en que los trabajadores se encontraban encuadrados a su fallecimiento.

No cabe duda que estas situaciones suponen una franca desigualdad entre beneficiarios de idéntica condición respecto al régimen de Subsidios Familiares que es preciso evitar, aunque teniendo en cuenta que si tales beneficios se conceden con la finalidad de ayudar a los derechohabientes de los asegurados fallecidos que por su modesta situación más la necesitan, no debe gravarse al citado

régimen social en aquellos casos en que la concurrencia de otras pensiones análogas, en favor de los mismos, les otorgue cierta independencia económica que no justifica la concesión de los indicados subsidios.

Por todo ello, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Los subsidios de Viudedad y Orfandad concedidos por el Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares con sujeción a las normas señaladas por la Orden de 11 de junio de 1941, se declaran compatibles con cualquier otra pensión de análoga naturaleza que pueda corresponder, procedentes del Estado, Corporaciones o Entidades oficiales o particulares; a las viudas o huérfanos de los trabajadores, siempre que su importe no exceda de 4.000 pesetas anuales, y con las que, de cualquier orden y cuantía, proceda conceder a los propios interesados con cargo a los Montepíos Laborales.

Segundo.—Las situaciones anteriores a la presente Orden podrán ser objeto de nuevo examen y resolución con efectos futuros, para lo cual los interesados promoverán las correspondientes solicitudes ante el Instituto Nacional de Previsión.

229 REGLAMENTOS DE TRABAJO.—INDUSTRIAS DE TURRON Y MAZAPAN Y OBRADORES DE CONFITERIA, PASTELERIA Y MASAS FRITAS

Orden del Ministerio de Trabajo, de 31 de marzo de 1952, *B. O. del E.* número 149, del 28 de mayo de 1952.

I. REGLAMENTO.—Se rectifican los artículos 8 y 93 del Reglamento de Trabajo.

II. TEXTO LITERAL.—La experiencia adquirida en cerca de cuatro años de aplicación de la Reglamentación Nacional de Trabajo en las Industrias de Turron y Mazapan y en los Obradores de Confiteria, Pasteleria y Masas Fritas, de 21 de mayo de 1948, aconsejan la modificación de sus artículos octavo y 93 para incluir la obligatoriedad de la provisión de la plaza de Maestro Obrador o Encargado en las confiterías que por su importancia la requieran, y la necesidad de proveer al personal de prendas de trabajo, con la duración que para cada una se fija.

En méritos de lo expuesto, este Ministerio ha tenido a bien acordar:

Artículo 1.º A la definición de Maestro de Obrador o Encargado, del artículo octavo de la Reglamentación, se le añadirá el siguiente párrafo:

“En los Obradores de Confiteria con más de tres Oficiales, será obligatoria la existencia del Maestro o Encargado, a no ser que el propio empresario realice las funciones correspondientes, por poseer los adecuados conocimientos profesionales.”

Art. 2.º Al artículo 93 de la Reglamentación se le adicionará el párrafo siguiente:

“Las empresas facilitarán a sus trabajadores las prendas que se mencionan, con la duración que se expresa: chaquetillas, un año; gorros, dos años; mandiles, seis meses; paños, seis meses.”

230 NORMAS LABORALES DE APLICACION GENERAL.—READMISION EN EL PUESTO DE TRABAJO

Orden del Ministerio de Trabajo, de 20 de mayo de 1952, *B. O. del E.* número 149, del 28 de mayo de 1952.

I. REHABILITACION FISICA.—Se dictan normas para la readmisión en el trabajo de aquellos productores que causaron baja por inutilidad física producidas por causas distintas de la enfermedad profesional o accidente del trabajo.

II. TEXTO LITERAL.—La Orden de 31 de mayo de 1950 (*Ref. 504/50*), publicada en el *Boletín Oficial del Estado* del día 8 de junio siguiente, dispuso la readmisión obligatoria en las empresas en que hubiesen prestado servicio y en el puesto de trabajo que con carácter normal hubiesen desempeñado el día que causaron baja de los trabajadores que habiendo sido pensionistas por causa de accidente de trabajo o de enfermedad profesional hubiesen sido declarados aptos de nuevo para el trabajo.

Y como quiera que se viene dando algunos casos en los que pensionistas de Montepíos Laborales por causa de inutilidad física han recuperado la aptitud para el trabajo habitual que realizaban en la empresa al causar baja en la misma por el motivo referido, parece oportuno conceder a los mismos derecho análogo al que en la Orden mencionada se otorga a los pensionistas por causa de accidente.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

1.º Los trabajadores fijos que hubieren cesado en sus respectivas empresas por inutilidad física producida por causa distinta de la enfermedad profesional o accidente de trabajo y que hubiesen adquirido la condición de pensionistas en el Montepío Laboral correspondiente, tendrán derecho, al ser declarados de nuevo aptos para el trabajo, a ser reintegrados a los puestos de trabajo que con carácter normal ocupaban en las empresas en la fecha en que causaron baja.

2.º Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior será preciso que el trabajador lo solicite de su empresa dentro del mes siguiente a la fecha de su declaración de aptitud para el trabajo en virtud de resolución firme, quedando aquella obligada a proporcionarle ocupación efectiva en el término de los quince días siguientes a la fecha en que haya formulado su petición de reingreso.

3.º La presente Orden entrará en vigor en la fecha de su publicación en el *Boletín Oficial del Estado*, afectando asimismo a aquellos trabajadores en quienes, dándose las circunstancias previstas en el artículo primero, se hallasen en situación de paro involuntario, a cuyo efecto habrán de solicitar su reincorporación al anterior puesto de trabajo en el término de un mes, desde la fecha de la promulgación de esta Orden.

231 CAJA DE JUBILACION Y SUBSIDIOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL.—MINERIA ASTURIANA.—INDUSTRIA DEL CARBON.—MUTUALIDAD NACIONAL DE PERIODISTAS.—INDUSTRIA PAPELERA.—AHORRO Y PREVISION.—MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—NORMAS DE APLICACION GENERAL

Orden del Ministerio de Trabajo, de 30 de abril de 1952. *B. O. del E.* núm. 140, del 19 de mayo de 1952.

I. ORGANOS DE GOBIERNO.—Se dictan normas de carácter general sobre la composición, sistema de designación y facultades de los Organos de Gobierno de las Mutualidades Laborales, con sujeción al siguiente Índice General.

De los Organos de Gobierno del Mutuismo Laboral (art. 1).

De la composición de los Organos de Gobierno (art. 2).

De los Vocales de los Organos de Gobierno y procedimiento electoral (artículos 3 y 4).

Comisiones y Ponencias (arts. 5 y 7).

Asamblea general (arts. 8 y 9).

Junta Rectora (art. 10).

De la elección de Presidente, Vicepresidente y designación de Secretarios de Actas de los Organos de Gobierno centrales y provinciales (arts. 11 al 14).

Duración del mandato y cese de los Vocales de los Organos de Gobierno (artículos 15 al 19).

De la provisión de vacantes (art. 20).

De los Vocales natos (art. 21).

Competencia de los Organos de Gobierno (arts. 22 al 24).

Disposiciones finales. — *Entrada en vigor (1.ª), derogación de las disposiciones anteriores (2.ª) y autorización al Servicio de Mutualidades y Montepios para dictar normas complementarias (3.ª).*

Disposiciones transitorias.

II. TEXTO LITERAL.—Por las Ordenes de 19 de noviembre de 1948 y 28 de enero de 1950 se reguló la constitución de las Asambleas generales, Juntas Rectoras y Organos directivos del Mutuismo Laboral, creados para que este sistema de previsión tuviera el rápido y directo impulso de los propios trabajadores y empresas, habiéndose conseguido, con la aplicación práctica de estas disposiciones y la colaboración de la Organización Sindical, el fin perseguido.

No obstante, en el tiempo transcurrido se ha podido comprobar que las mencionadas disposiciones y los preceptos complementarios de los Estatutos de las distintas Mutualidades

necesitan modificaciones, que deben tender —una vez conocida la importancia de las Instituciones y la actuación de los mencionados Organos de gobierno— a detallar las clases de Vocales que deben existir: el número de mutualistas necesario para poder tener Comisión Provincial; a fijar el mínimo y el máximo de Vocales componentes de la Asamblea general y Junta Rectora, y a determinar la duración de su mandato, coincidente con el de las Juntas Sindicales que ejercen la función mutualista de máxima importancia al designar las personas que integran los Organos de gobierno de estas Instituciones.

Asimismo, las Comisiones Provinciales han demostrado durante el tiempo de su actuación, asesoradas por los Servicios administrativos, una competencia y ponderación en todos sus actos que aconsejan ampliar sus facultades, para así conseguir la máxima agilidad en el inmediato cumplimiento de los fines de las Mutualidades Laborales.

Por otra parte, también se ha apreciado la conveniencia de suprimir las Comisiones Mixtas, ya que la práctica ha demostrado que carecen realmente de la eficacia que en un principio se estimó habían de tener, sustituyéndolas por Ponencias en aquellas provincias en el que el reducido número de mutualistas no aconseje constituir una Comisión Provincial para la Mutualidad de que se trate.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con la Delegación Nacional de Sindicatos y del Servicio de Mutualidades Laborales,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

De los Organos de Gobierno del Mutuismo Laboral

Artículo 1.º Las Mutualidades Laborales estarán regidas por los siguientes Organos de gobierno:

a) Asamblea general.

b) Junta Rectora.

c) Comisiones o Ponencias Provinciales.

A los solos efectos de la rápida tramitación de aquellos asuntos que por su materia necesiten urgente resolución, las Juntas Rectoras podrán actuar en Comisión Permanente con Vocales que residan en la población de la sede central de la Institución y los Vocales natos. Ante características especiales, el Servicio de Mutualidades podrá autorizar que los Vocales no residan en las localidades de las sedes centrales.

En aquellas Instituciones que así lo aconsejen, podrán ser sustituidas las Comisiones Provinciales y las Ponencias por Comisiones de Centros de Trabajo. Una de las condiciones precisas para esa sustitución será el número reducido de Empresas encuadradas en la Mutualidad respectiva. En este caso, el Servicio de Mutualidades Laborales, al conceder la autorización especificará los sistemas de designación de las mencionadas Comisiones y de las Asambleas y Juntas Rectoras de acuerdo con la Organización Sindical y las facultades de dichas Comisiones.

De la composición de los Organos de Gobierno

Art. 2.º El Servicio de Mutualidades Laborales, previo informe de la Junta Rectora de la Mutualidad de que se trate, y con los asesoramientos que considere oportunos, dictará la resolución correspondiente, determi-

nando las Comisiones Provinciales o Ponencias que la Institución deba tener y el número de Vocales que han de integrar sus distintos Organos de gobierno provinciales y centrales, guardando, en lo posible, la proporcionalidad debida entre las distintas ramas laborales y grupos profesionales que la Entidad encuadre.

Asimismo, dicha resolución se ajustará a las siguientes normas:

a) En la constitución de los Organos de gobierno se guardará entre los Vocales electivos la proporcionalidad de tres representantes de los trabajadores por cada representante de los empresarios.

b) Se constituirá Ponencia en las provincias en que la Mutualidad no tenga normalmente un número de trabajadores cotizantes superior a 500. Estará formada esta Ponencia por un Vocal electivo representante de los trabajadores.

c) Cuando el número de cotizantes exceda de la cifra fijada en el apartado anterior, se constituirá Comisión Provincial. Esta Comisión tendrá un número mínimo de cuatro Vocales electivos y máximo de 12, según la importancia de la rama o ramas laborales en la provincia.

d) Las Asambleas generales estarán constituidas por Vocales de las Comisiones Provinciales, procurándose que las más estén representadas y en la proporción adecuada a la importancia mutualista de cada una de las provincias. El número de Vocales electivos de las Asambleas no podrá exceder de los siguientes:

Mutualidades de ámbito nacional

Hasta 25.000 trabajadores cotizantes	40 Vocales.
De 25.001 a 40.000	52 "
De 40.001 a 80.000	65 "
Más de 80.000	80 "

Mutualidades interprovinciales o provinciales

Hasta 10.000 trabajadores cotizantes	24 Vocales.
De 10.001 a 20.000	28 "
De 20.001 a 40.000	36 "
De 40.001 a 60.000	40 "
De 60.001 a 80.000	48 "
Más de 80.000	56 "

e) Las Juntas Rectoras quedarán constituidas con un número mínimo de doce Vocales electivos y un máximo de veinte.

De los Vocales de los Organos de Gobierno y procedimiento electoral

Art. 3.º Condiciones personales de Vocales: Para ser Vocal de los Organos de Gobierno y Mutualismo Laboral se necesitará reunir las siguientes condiciones:

a) Vocales empresarios

Ser afiliado a la Organización Sindical, con plena capacidad para desempeñar cargos electivos sindicales; tener una antigüedad mínima de cinco años en la actividad encuadrada en la Institución respectiva; no haber sido sancionado en los tres años anteriores a la fecha de su elección por dolosa infracción de las disposiciones sociales; haber cumplido normalmente las obligaciones que los Estatutos

de la Entidad les impone, y estar en pleno disfrute de sus derechos civiles y profesionales.

b) Vocales trabajadores

Ser mutualista de la Institución de que se trate; estar afiliado a la Organización Sindical, con plena capacidad para desempeñar cargos electivos sindicales; tener una antigüedad mínima de cinco años; no haber sido desposeído de cargos representativos sindicales o del mutualismo laboral en los tres años anteriores a su elección, y estar en pleno disfrute de sus derechos civiles y profesionales.

Art. 4.º Fijada que sea conforme al artículo segundo de la presente Orden la composición de cada Comisión, Ponencia y Asamblea general, el Servicio de Mutualidades lo pondrá en conocimiento del Delegado Nacional de Sindicatos, de quien emanará la disposición para que se celebren los actos electorales necesarios. Esta comunicación deberá cursarse con la oportunidad precisa para que puedan celebrarse las elecciones dentro de los treinta días siguientes a la constitución de las Juntas Provinciales, Económicas y Sociales. También el Servicio de Mutualidades comunicará dicha resolución a la Mutualidad correspondiente, quien dará traslado a las Delegaciones Provinciales a quienes afecte.

Comisiones y Ponencias

Art. 5.º La elección de las personas que deban ser nombradas Vocales de las Comisiones y Ponencias en el número y distribución por categorías que hubiese dispuesto el Servicio de Mutualidades, se efectuará por las Juntas Sociales y Económicas de las Entidades Sindicales Provinciales correspondientes, siendo realizada con arreglo al procedimiento sindical de obligatoria observancia. Si la Mutualidad abarcase sectores encuadrados por distintos Sindicatos, la elección se atribuirá a una Asamblea Intersindical de organización adecuada al ámbito funcional de aquélla.

Serán elegibles los mutualistas que a las condiciones del artículo tercero unan las de tener su residencia en la localidad donde radique la Comisión o Ponencia. Sin embargo, este requisito no será exigible cuando el mayor número de los trabajadores mutualistas residan en lugar distinto al de la Delegación o de la Mutualidad en su caso.

En las elecciones que aquí se regulan serán electores los Vocales de las Juntas Sindicales que sean mutualistas o Empresas cotizantes de la Institución de que se trate.

Art. 6.º El acta de la elección celebrada al efecto se remitirá por el Delegado Provincial Sindical al Delegado de las Mutualidades, el que a su vez, y en plazo de cuarenta y ocho horas, la hará seguir a la Institución correspondiente.

Una vez en poder de la Mutualidad todas las actas de elección de los Vocales de las Comisiones Provinciales y Ponencias, se elevarán al Servicio de Mutualidades Laborales.

A la vista de dichos documentos el Director general Jefe del Servicio de Mutualidades Laborales, caso de no utilizar la facultad que le confiere el artículo 17 del Reglamento de 26 de mayo de 1943, que regula la aplicación de la Ley de Mutualidades, de 6 de diciembre de 1941, comunicará su conformidad

a la Institución, para que, por el Director de ésta, se extiendan las credenciales de cada uno de los Vocales, y, con el visto bueno del Director general Jefe del Servicio de Mutualidades Laborales, las remita a las Delegaciones Provinciales correspondientes.

Art. 7.º El Delegado de las Mutualidades Laborales, recibidas las credenciales, convocará a los interesados en el plazo máximo de diez días para darles posesión de sus cargos, entrega de aquéllas y constitución de la Comisión o Ponencia. Dentro de las cuarenta y ocho horas de celebrada la sesión remitirán acta certificada a la Institución respectiva.

Asamblea general

Art. 8.º Las Comisiones Provinciales, en la sesión que celebren según lo dispuesto en el artículo anterior, elegirán los Vocales de la Asamblea general en el número y con la distribución por categorías que se hayan fijado en la resolución que dicte el Servicio de Mutualidades Laborales, según lo dispuesto en el artículo segundo de la presente Orden.

Art. 9.º Para la designación de los componentes de las Asambleas generales de las Mutualidades de ámbito provincial o interprovincial no se aplicará el procedimiento establecido en el artículo anterior; en su lugar, el Servicio de Mutualidades Laborales solicitará del Delegado Nacional de Sindicatos que por las respectivas Juntas Económicas y Sociales Provinciales se elijan, además de los Vocales de las respectivas Comisiones o Ponencias, aquellos otros que en representación de cada provincia hayan de formar parte de la Asamblea general, con arreglo a la composición determinada previamente por dicho Servicio.

Las personas que se designen para ocupar dichos cargos deberán reunir las condiciones establecidas en el artículo tercero de la presente disposición.

Si la Mutualidad abarcase sectores encuadrados en diferentes Sindicatos, se reunirán en Asamblea Intersindical los Vocales de las Juntas Sociales y Económicas interesadas.

Junta Rectora

Art. 10. Las Asambleas generales, inmediatamente después de su constitución, elegirán los Vocales electivos de su Junta Rectora entre los componentes de las mismas y en la proporción prevista en la resolución dictada al efecto por el Servicio de Mutualidades Laborales.

De la elección de Presidente, Vicepresidente y designación de Secretarios de Actas de los Organos de Gobierno centrales y provinciales

Art. 11. La Junta Rectora, en la misma sesión en que quede constituida, designará de entre sus Vocales electivos los cargos de Presidente y Vicepresidente, que lo serán de todos los órganos de Gobierno centrales de la Institución.

En esta elección deberán tener presente que uno de ellos, al menos, deberá residir en la misma localidad donde tenga su domicilio social la Sede central, y que deberán ser de categorías profesionales distintas.

El Director de la Institución comunicará al Servicio de Mutualidades la composición nominal y profesional de la Junta Rectora den-

tro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la elección de los cargos a que se refiere el presente artículo.

Art. 12. En la reunión que celebren para la toma de posesión de sus cargos los Vocales de las Comisiones Provinciales elegirán de entre sus electivos los cargos de Presidente y Vicepresidente de categorías profesionales distintas, y al menos uno de ellos, con residencia en la misma localidad donde tenga su domicilio la Comisión respectiva.

Art. 13. El Secretario de la Institución actuará de Secretario de Actas, con voz, pero sin voto, en todas las reuniones que celebren las Asambleas generales y Juntas Rectoras.

Art. 14. En las Comisiones Provinciales actuará de Secretario, el de la Delegación Provincial o un funcionario designado al efecto por el Delegado.

Duración del mandato y cese de los Vocales de los Organos de Gobierno

Art. 15. La duración del mandato de las Comisiones Provinciales y de las Ponencias será la misma que la de las Juntas Sindicales que las eligieren, comenzando su actuación el día en que tomen posesión de sus cargos los Vocales elegidos, en cuya fecha cesarán los componentes de los anteriores órganos de Gobierno provinciales.

Art. 16. Igualmente, el mandato de la Asamblea general coincidirá con el de las Comisiones Provinciales que las eligieren. Sin embargo, sus funciones podrán prorrogarse hasta la toma de posesión de los Vocales que para un nuevo mandato hubiesen sido elegidos. Dicha toma de posesión tendrá lugar en la primera reunión ordinaria que la Asamblea general convoque después de practicada la elección.

Art. 17. La Junta Rectora tomará posesión e iniciará su mandato en la misma fecha en que sea designada por la Asamblea general y cesará al tomar posesión la nueva Asamblea.

Art. 18. Los Vocales electivos cesarán en sus cargos, con independencia de la duración de su mandato, en los siguientes casos:

a) Cuando pierdan algunas de las condiciones necesarias para el desempeño del cargo.

b) A la vista de la resolución recaída en expediente seguido conforme se señala en el Reglamento de 2 de febrero de 1948 para la desposesión de los cargos sindicales electivos.

c) Como sanción impuesta a la vista del expediente que se hubiese seguido por acuerdo de la Junta Rectora.

d) Por decisión del Director general de Previsión, como Jefe del Servicio de Mutualidades Laborales, por causa justificada y oído el Delegado Nacional de Sindicatos.

Art. 19. El Servicio de Mutualidades Laborales, en los casos a), c) y d) del artículo anterior, dará cuenta a la Organización Sindical para que tramite, si procede, el expediente desposesorio del cargo sindical que ostentase el Vocal a quien afectase el expediente.

De la provisión de vacantes

Art. 20. Las vacantes que se produzcan serán cubiertas de acuerdo con el procedimiento electoral regulado en la presente Orden, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 13.

De los Vocales natos

Art. 21. Con el fin de que los Vocales electivos se encuentren asistidos en sus gestiones con los asesoramientos técnicos precisos, formarán parte también de los Organos de Gobierno los Vocales natos, con voz y voto, que se detallan a continuación:

a) De las Ponencias

El Delegado de las Mutualidades Laborales.

b) De las Comisiones Provinciales

Un representante de la Delegación Provincial de Trabajo.

Un representante de la Obra Sindical "Previsión Social", nombrado con arreglo a las normas que dicte el Delegado Nacional de Sindicatos.

El Delegado de las Mutualidades Laborales, quien tendrá la facultad de suspensión de los acuerdos.

c) De las Asambleas y Juntas Rectoras

Un representante del Ministerio de Trabajo.

Un representante del Servicio de Mutualidades Laborales.

Un representante de la Obra Sindical "Previsión Social", nombrado con arreglo a las normas que dicte el Delegado Nacional de Sindicatos.

El Director de la Institución, quien tendrá la facultad de suspensión de los acuerdos.

Cuando la Sede de la Institución no resida en la capital de España, el representante del Ministerio se sustituirá por uno de la Delegación de Trabajo, y el del Servicio de Mutualidades Laborales, por otro que designe la Delegación de Mutualidades de la provincia respectiva.

Competencia de los Organos de Gobierno

Art. 22. Será competencia de las Asambleas generales:

1.º Elegir los miembros que han de constituir la Junta Rectora.

2.º Conocer la actuación de la Junta Rectora y sus miembros en relación con el ejercicio de las funciones propias de sus cargos.

3.º Intervenir, en la forma que corresponda, en todos aquellos asuntos cuya competencia no esté reservada a otros Organos de gobierno.

4.º Examinar y aprobar, si procede, la Memoria, Cuentas, Inventarios y Balances.

5.º Estudiar, bien a propuesta de la Junta Rectora o por iniciativa propia, la reforma de sus Estatutos, elevando la propuesta al Servicio de Mutualidades Laborales, para su resolución.

6.º Resolver sobre las propuestas que, siendo de su competencia, le someta la Junta Rectora y las Comisiones Provinciales Permanentes, por mediación de aquélla.

Art. 23. Será competencia de las Juntas Rectoras:

1.º Cumplir y hacer cumplir los preceptos contenidos en los Estatutos de la respectiva Institución y los de carácter general que le sean aplicables.

2.º Proponer a la Asamblea general la reforma de sus Estatutos.

3.º La resolución de los expedientes de prestaciones de las siguientes clases:

a) De concesión y revisión de pensiones de invalidez, previo informe del Delegado provincial respectivo.

b) De concesión de prestaciones extrarreglamentarias con cargo al fondo nacional.

c) De los recursos interpuestos en los expedientes de toda clase de prestaciones.

Los recursos deberán estar informados por la Comisión o Ponencia Provincial que dictó el acuerdo, o por el Delegado provincial en los recursos sobre prestaciones de invalidez.

d) De concesión y revisión de los expedientes de toda clase de prestaciones correspondientes a una determinada provincia, cuando la Comisión o Ponencia respectiva no estuviera constituida o tuviere suspendidas sus facultades resolutorias.

4.º La vigilancia del ejercicio de las facultades resolutorias atribuidas a las Comisiones Provinciales, para lo que puede solicitar la remisión de expedientes completos de prestaciones en proporción moderada, para evitar perturbaciones administrativas de las Delegaciones.

5.º Vetar aquellos acuerdos adoptados por los Organos provinciales que se estimen antirreglamentarios.

6.º Confirmar la suspensión provisional dictada por el Delegado provincial, en uso de sus facultades.

7.º Informar y remitir al Servicio de Mutualidades Laborales, para su resolución, los expedientes a que se refiere el apartado anterior, cuando la Junta no ratifique la suspensión del Delegado provincial.

8.º Estudiar y someter a la aprobación del Servicio de Mutualidades el presupuesto de gastos de administración, y dar conocimiento a la Asamblea general.

9.º Someter a la Asamblea general, para su aprobación, la Memoria anual, los estados de cuentas, inventarios y balances.

10.º Acordar las inversiones en los valores mobiliarios autorizados a este fin.

11.º Proponer al Servicio de Mutualidades Laborales las inversiones en bienes inmuebles u otros distintos a los especificados en el apartado anterior, para que éste, dentro de sus facultades, resuelva lo pertinente.

12.º Imponer las sanciones procedentes, con arreglo a lo establecido en el Título correspondiente de sus Estatutos.

13.º Proveer las vacantes que en su seno se produzcan, entre los Vocales de la Asamblea general del mismo sector laboral y categoría profesional. La designación hecha por la Junta tendrá carácter de interinidad hasta la primera reunión que la Asamblea general celebre.

14.º En general, adoptar las medidas que considere convenientes, siguiendo la orientación y las normas señaladas en los respectivos Estatutos y disposiciones de general aplicación, así como elevar a la Superioridad las sugerencias que estime oportunas para la adopción de resoluciones que redunden en beneficio de los mutualistas.

Art. 24. Las Comisiones y Ponencias Provinciales tendrán las siguientes misiones y facultades:

A) Informativas.

1.º Cuidar y mantener la relación directa con los mutualistas para lograr el más cierto conocimiento de sus aspiraciones y necesidades, y orientarles en sus derechos y obligaciones.

2.º Informar a los Organos superiores de la Mutualidad de los defectos que observen

o comprueben en el desarrollo de la acción social de las Entidades, así como de las medidas que las circunstancias aconsejen adoptar para remediarlas.

3.º Fomentar el espíritu mutualista y divulgar las ventajas del sistema.

4.º Informar los expedientes de las siguientes clases:

a) De prestaciones extrarreglamentarias que con cargo al fondo nacional hayan de resolver las Juntas Rectoras.

b) De recursos contra resoluciones por ellas dictadas.

B) De vigilancia.

1.º Hacer cumplir los preceptos contenidos en los respectivos Estatutos, las disposiciones dictadas con carácter general y los acuerdos de la Asamblea y Junta Rectora.

2.º Examinar las liquidaciones de cuotas.

3.º Cuidar la inmediata entrega a los beneficiarios de las prestaciones acordadas y aprobadas.

4.º Vigilar el estado de enfermedad o invalidez de aquellos asociados a quienes hubiesen sido concedidas prestaciones por estas causas.

C) Resolutivas.

1.º Entender en la resolución y revisión de todas las prestaciones, excepto la de invalidez.

2.º Resolver las peticiones de prestaciones extrarreglamentarias con cargo al fondo provincial.

3.º Constituirse en patronato tutelar de los huérfanos de padre y madre que residan en la provincia.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. La presente Orden entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial del Estado*.

SEGUNDA. Quedan derogados los preceptos de los Estatutos de las Mutualidades y Montepíos Laborales por lo que se refiere a la competencia de Organos de Gobierno y a la designación, renovación y duración del mandato de los Vocales y todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Por el Servicio de Mutualidades Laborales, en el plazo máximo de tres meses se dictarán las normas complementarias que para el cumplimiento de la presente disposición necesitan, por sus características especiales, las Mutualidades que a continuación se detallan:

Caja de Jubilaciones y Subsidios de la Industria Textil.

Mutualidad Nacional de la Industria Harinera.

Caja de Jubilaciones y Subsidios de la Minería Asturiana.

Mutualidades Interprovinciales de la Industria del Carbón.

Mutualidad Nacional de Periodistas.

Mutualidad Nacional de la Industria Papelera.

Mutualidad Laboral de Ahorro y Previsión.

Hasta tanto se dicten las normas a que hace referencia el primer párrafo de esta transitoria, a las Mutualidades anteriormente citadas no les será de aplicación la presente Orden.

SEGUNDA. Los actuales Vocales de los Organos de Gobierno de las distintas Mutualidades Laborales, tengan o no extinguido su mandato, continuarán en sus cargos hasta que se celebren las nuevas elecciones sindicales, al menos que por el Delegado Nacional de Sindicatos se pida al Servicio de Mutualidades Laborales la renovación de aquéllos, en cuyo caso se procederá por el Servicio de Mutualidades a dictar la oportuna resolución, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Orden.

TERCERA. Los expedientes de prestaciones que en la actualidad estén en tramitación, se resolverán por la Comisión Permanente Nacional si ya han sido remitidos por las Delegaciones respectivas para su resolución; los que se hallen en poder de las Delegaciones Provinciales se resolverán, de conformidad con lo dispuesto en la presente Orden, por las Comisiones Provinciales competentes.

232 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—PORTEROS DE FINCAS URBANAS

Orden del Ministerio de Trabajo, de 12 de mayo de 1952. B. O. del E. número 150, del 29 de mayo de 1952.

I. ESTATUTOS.—Se aprueban los Estatutos del Montepío Nacional de Previsión Social de los Porteros de Fincas Urbanas, cuyos preceptos corresponden al siguiente Índice General.

Orden Ministerial.—Aprobación de las Estatutos, derogación de los anteriores y fecha de vigencia (art. 1.º). Normas de carácter transitorio (arts. 2.º y 3.º).

TITULO I.—Naturaleza y extensión del Montepío. (arts. 1 al 7.)

TITULO II.—De los socios beneficiarios.—Capítulo I.—De las clases de socios (art. 8.º). Capítulo II.—De los socios protectores (art. 9.º). Sección 1.ª.—De los socios protectores obligatorios (arts. 10 y 11). Sección 2.ª.—De los socios protectores voluntarios (arts. 12 al 14). Capítulo III.—De los socios beneficiarios (arts. 15 al 18). Capítulo IV.—De los demás beneficiarios (art. 19).

TITULO III.—Organización y funcionamiento.—Capítulo I.—Del Gobierno del Montepío (arts. 20 al 25). Capítulo II.—De los Organos de Gobierno Nacionales, Sección 1.ª.—De la Asamblea General (arts. 26 al 37). Sección 2.ª.—De la Junta Rectora (arts. 38 al 43). Sección 3.ª.—De la Comisión Permanente Nacional (arts. 44 al 47). Sección 4.ª.—Del Presidente, Vicepresidente y Secretario de Actas (arts. 48 al 51). Capítulo III.—De los Organos de Gobierno provinciales (arts. 52 al 57). Capítulo IV.—De los Organos Ejecutivos del Montepío. Sección 1.ª.—Del Director (art. 58). Sección 2.ª.—Del Delegado Provincial (arts. 59 y 60).

TITULO IV.—Régimen económico.—Capítulo I.—Recursos económicos (arts. 61 al 71). Capítulo II.—Presupuestos, gastos y reservas (arts. 72 al 81). Capítulo III.—Sistema contable (arts. 82 y 83).

TITULO V.—Prestaciones.—Capítulo I.—De sus clases (arts. 84 y 85). Capítulo II.—Pensión por jubilación (arts. 86 al 89). Capítulo III.—Pensión por invalidez (arts. 90 al 93).

Capítulo IV.—Pensión o subsidio de viudedad (arts. 94 al 98). *Capítulo V.—Pensión de orfandad* (arts. 99 al 106). *Capítulo VI.—Premio por nupcialidad* (arts. 107 y 108). *Capítulo VII.—Premio de natalidad* (art. 109). *Capítulo VIII.—Auxilio por defunción* (arts. 110 al 112). *Capítulo IX.—Asistencia sanitaria* (arts. 113 al 116). *Capítulo X.—Disposiciones comunes a todas las prestaciones* (arts. 117 al 131).

TITULO VI.—Régimen disciplinario.—*Capítulo I.—De las faltas y sus sanciones* (artículos 132 al 134). *Capítulo II.—Procedimiento y competencia para la imposición de sanciones* (arts. 135 al 137).

TITULO VII.—De los recursos contra los acuerdos de los Organos de Gobierno. (art. 138).

TITULO VIII.—De la inspección e intervención (art. 139).

TITULO IX.—Disposiciones generales.—*Reforma y modificación de los Estatutos* (artículos 140 y 141). *Certificaciones y eficacia de los acuerdos de los Organos de Gobierno* (arts. 142 y 143).

Disposición final. Fecha de entrada en vigor de los nuevos Estatutos.

Disposiciones transitorias.

II. TEXTO LITERAL.—Por Orden ministerial de 15 de enero de 1949 (Ref. 37/49 y 63/49), fué creado el "Montepío Nacional de Previsión Social de los Porteros de Fincas Urbanas", cuyos Estatutos provisionales fueron aprobados, asimismo, por la referida disposición. Institución ésta que surgió, inicialmente, con los trabajadores afectados por la Reglamentación de Trabajo en las Porterías de Fincas Urbanas de Madrid.

Por Orden de 14 de octubre de 1949 (Referencia 262/49) pasaron a incorporarse a este Montepío los productores en porterías de fincas urbanas de numerosas provincias españolas, y asimismo se han ido efectuando con posterioridad incorporaciones diversas, dentro del referido Sector Laboral.

Todo ello ha dado origen a una más amplia base de afiliación y consiguiente potencialidad económica de la entidad, por lo que se considera superada su base de organización y llegado el momento de aprobar un nuevo Estatuto, cuyo capítulo de prestaciones está acorde con sus posibilidades, concediendo prestaciones en su cuantía máxima.

Así se mejoran las pensiones establecidas por Jubilación, Viudedad y Orfandad y se establecen las nuevas prestaciones de Pensión por Invalidez y de Asistencia Sanitaria para los pensionistas y sus familiares. Igualmente la experiencia obtenida ha indicado factible prescindir del requisito de abono de la vivienda por la viuda, que los Estatutos provisionales establecían, medida esta que este Ministerio desea hacer retroactiva al objeto de que se beneficien de la misma las viudas de todos los asociados desde la fecha de creación de la entidad.

Visto el proyecto de reforma de los Estatutos en la actualidad vigentes aprobados por la Asamblea General de la Institución, las conclusiones adoptas en la Conferencia celebrada con sus representantes y los estudios realizados por el Servicio de Mutualidades Laborales, a su propuesta.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Se aprueban los Estatutos del "Montepío Nacional de Previsión Social de los Porteros de Fincas Urbanas", que comenzarán a regir el día 1 de mayo de 1952 en sustitución de los actuales de 15 de enero de 1949, que quedan derogados en dicha fecha.

Art. 2.º Los derechos a prestaciones nacidos en virtud de hechos acaecidos con anterioridad al 1 de mayo de 1952, se regularán en cuanto a clases, cuantía y requisitos de las prestaciones, conforme a las normas contenidas en los Estatutos de 15 de enero de 1949, cualquiera que sea la fecha de su solicitud.

Art. 3.º Los expedientes referidos a pensiones de viudedad que hubieran sido denegados, así como aquellos casos que no hubieran llegado a producir solicitud, como consecuencia del requisito establecido en el apartado c) del artículo 88 de los Estatutos de 15 de enero de 1949, serán revisados o iniciados de oficio por la entidad y resueltos en la cuantía que con respecto a los indicados Estatutos corresponda, haciendo excepción del requisito referenciado, que se tendrá por no puesto. Las pensiones que como consecuencia de esta revisión se concedan se devengarán desde la fecha que en cada caso hubiera correspondido, de no haber existido el requisito que ahora se suprime.

Estatutos del "Montepío Nacional de Previsión Social de los Porteros de Fincas Urbanas", aprobado por Orden ministerial de 12 de mayo de 1952

TITULO PRIMERO

Naturaleza y extensión del Montepío

Artículo 1.º El "Montepío Nacional de Previsión Social de los Porteros de Fincas Urbanas", constituido en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden ministerial de 15 de enero de 1949 (Refs. 37/49 y 63/49), se regirá por los presentes Estatutos y disposiciones sobre Mutualidades y Montepíos Laborales.

Art. 2.º Esta entidad tiene por objeto el ejercicio de la previsión social, siendo sus fines la más amplia protección y ayuda a sus asociados y familiares contra circunstancias fortuitas y previsibles, en la forma que disponen los presentes Estatutos y de acuerdo con las órdenes y disposiciones que por el Ministerio de Trabajo se dicten para la concesión de beneficios que deban otorgar la entidad en atención a sus posibilidades económicas.

El Montepío no podrá ejercer más actividades que las de Previsión Social autorizadas o que se autoricen por el Ministerio de Trabajo.

Art. 3.º La duración de esta entidad será indefinida.

Su disolución o incorporación a otro Montepío o Mutualidad de Previsión Laboral corresponderá al Ministerio de Trabajo mediante disposición expresa.

Art. 4.º El "Montepío Nacional de Previsión Social de los Porteros de Fincas Urbanas" tendrá jurisdicción sobre todo el Territorio Nacional y Plazas de Soberanía del Norte de Africa.

Su domicilio social se establece en Madrid.

Art. 5.º Quedarán encuadrados en este Montepío las Empresas y trabajadores afectados por las siguientes Reglamentaciones de Trabajo:

1.º De Porterías de Fincas Urbanas de Madrid, aprobada por Orden de 31 de mayo de 1947.

2.º De Porterías de Fincas Urbanas de las provincias de Barcelona, Santander, Guipúzcoa, Vizcaya, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Navarra y Burgos, en virtud de lo dispuesto en la Orden de 14 de octubre de 1949.

3.º De Portería de Fincas Urbanas de otras provincias, aprobada por Ordenes posteriores a la expresada en el apartado anterior o que se aprueben en lo sucesivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo tercero de la expresada Orden de 14 de octubre de 1949.

El Ministerio de Trabajo podrá disponer queden incorporados a este Montepío las Empresas y trabajadores afectados por otras Ordenanzas Laborales. También podrá acordar la segregación de Sectores Laborales en él encuadrados, por razones sociales o económicas.

Art. 6.º El "Montepío Nacional de Previsión Social de los Porteros de Fincas Urbanas" tiene personalidad jurídica, y, en su consecuencia, gozará de capacidad plena para adquirir, poseer, gravar y enajenar bienes, así como realizar toda clase de actos y contratos relacionados con sus fines, sin más limitaciones que las establecidas en las disposiciones vigentes o que puedan establecerse en el futuro. Igualmente podrá promover y seguir los procedimientos que fueren oportunos y ejercitar los derechos y acciones que le correspondan ante los Juzgados y Tribunales de Justicia, ordinarios y especiales y Organismos y Dependencias de la Administración Pública.

Art. 7.º Esta entidad estará sometida a la jurisdicción del Ministerio de Trabajo, quien ejercerá sobre ella su ordenación, tutela, inspección e intervención a través de los Organismos competentes.

TITULO II

De los socios y beneficiarios

CAPITULO PRIMERO

De las clases de socios

Art. 8.º Los socios de la Institución se clasifican en socios protectores y socios beneficiarios.

CAPITULO II

De los socios protectores

Art. 9.º Los socios protectores podrán ser:

- a) Socios protectores obligatorios.
- b) Socios protectores voluntarios.

SECCIÓN 1.ª—De los socios protectores obligatorios

Art. 10. Serán socios protectores obligatorios todas las Empresas a las que se refiere el artículo quinto de estos Estatutos que, en virtud de las disposiciones aplicables, coticen o deban cotizar preceptivamente a favor del Montepío.

Art. 11. Serán obligaciones de los socios protectores obligatorios:

- 1.º Su afiliación al Montepío, así como la

del personal que trabaje a su servicio, siempre que reúnan las condiciones señaladas en los vigentes Estatutos.

El no uso por parte del productor de la facultad señalada en el apartado primero del artículo 16, no eximirá a la Empresa de la obligación reseñada anteriormente ni de la consiguiente responsabilidad.

2.º Remitir al Montepío, a través de la Delegación Provincial, un padrón inicial de los trabajadores a su servicio, conforme al modelo y con los datos que por aquél se señalen.

3.º Remitir al Montepío, a través de la Delegación Provincial, relación de las altas y bajas causadas en la Empresa, así como de las variaciones de salarios producidas por mejoras voluntarias o cambios de categoría profesional de los trabajadores, dentro de los plazos que la Institución señale.

4.º Abonar las cuotas patronal y obrera en la cuantía, plazos y forma que se determinan en el título de Régimen Económico de los presentes Estatutos.

5.º Presentar oportunamente y tener a disposición de sus trabajadores, en "sitio visible", la liquidación de pago de cuotas.

6.º Proceder al abono de prestaciones—por cuenta y delegación expresa del Montepío—a los beneficiarios que residan en localidad donde la Empresa tenga Centros de Trabajo.

7.º Cumplir todas las obligaciones que se deriven de los presentes Estatutos y demás disposiciones aplicables, así como de los acuerdos que adopten los Organos de Gobierno de la Institución.

Art. 12. Los socios protectores obligatorios tendrán derecho a formar parte de los Organos de Gobierno de la Institución cuando fueren elegidos para ello.

SECCIÓN 2.ª—De los socios protectores voluntarios

Art. 13. Serán socios protectores voluntarios aquellas personas naturales o jurídicas que, por donaciones a la entidad o servicios prestados a la misma, se consideren con méritos suficientes para ser así conceptuadas.

Art. 14. El título de socio protector voluntario será honorífico, y el que lo ostente estará facultado para asistir con derecho a voz a las reuniones que la Asamblea General celebre, a cuyos efectos deberá ser citado oportunamente.

La concesión del título de socio protector voluntario corresponderá a la Asamblea General, a propuesta de la Junta Rectora.

CAPITULO III

De los socios beneficiarios

Art. 15. Tendrán la consideración de socios beneficiarios obligatorios de este Montepío los trabajadores por cuenta ajena encuadrados en las actividades a que se refiere el artículo quinto de estos Estatutos y que tengan derecho a su afiliación, según lo establecido en la Orden de 16 de mayo de 1950 (Ref. 422/50) y Decreto de 17 de noviembre del mismo año.

Art. 16. Los socios beneficiarios tendrán los siguientes derechos:

1.º Solicitar su afiliación al Montepío cuando la Empresa por cuya cuenta trabajen no la efectúe.

2.º Conocer la efectividad del pago por la Empresa de las cuotas correspondientes.

3.º Percibir los beneficios y causar las prestaciones que correspondan con arreglo a lo regulado en el presente Estatuto y en las disposiciones o acuerdos del Servicio de Mutualidades Laborales.

4.º Recurrir contra los acuerdos de los Organos de Gobierno de la Entidad en materia de reconocimiento de derechos, conforme se determina en los presentes Estatutos.

Art. 17. Serán obligaciones de los socios beneficiarios:

1.º Extender y entregar a la Empresa la declaración de afiliación individual, consignando en ella los datos personales, familiares y profesionales que por la Entidad se determinen.

2.º Dar cuenta a la Institución, por medio de las Delegaciones Provinciales, de las variaciones de orden personal, familiar o profesional que puedan modificar la declaración inicial a que se refiere el apartado anterior.

3.º Colaborar en el cumplimiento de los fines de la Institución, facilitando a ésta cuantos datos le sean interesados y allanando, en la medida que esté a su alcance, las dificultades que los funcionarios de aquélla puedan encontrar en el desempeño de sus funciones; si así no lo hicieran podrán incurrir en responsabilidad y ser objeto de sanción.

4.º Cumplir los preceptos de los Estatutos y los acuerdos y resoluciones de los Organos de Gobierno de la Institución.

Art. 18. Los asociados que voluntaria o forzosamente dejen de prestar sus servicios por cuenta ajena serán baja en el Montepío, sin perjuicio de que cuando se reintegren al trabajo en cualquiera de las Empresas encuadradas en esta Entidad se les reconozca la antigüedad laboral y mutualista que con anterioridad a su baja hubieran adquirido.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, y por consiguiente serán considerados como socios en servicio activo:

1.º Los productores enfermos, los que estuviesen cumpliendo el servicio militar y los que se encuentren en situación de paro involuntario, con las limitaciones y requisitos que se establecen en los artículos 20 y 21 de la Orden de 16 de mayo de 1950 y Orden de 24 de julio del mismo año (Ref. 652/50).

2.º Los que se encuentren en situación de excedencia voluntaria o forzosa.

Este derecho quedará limitado al periodo de tiempo que según la Reglamentación de Trabajo esté obligada la Empresa a reservar al productor su puesto en el trabajo. Por parte de los asociados deberán cumplirse a estos efectos los siguientes requisitos:

a) Solicitar su continuidad como socio activo del Montepío dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que hubiera dejado de prestar su trabajo a la Empresa.

b) Abonar por su cuenta, y en los plazos reglamentarios, las cuotas patronales y obreras correspondientes.

Para la determinación de éstas se considerará como salario base de cotización el que fuera regulador de prestaciones, según las cotizaciones efectuadas, al tiempo de su baja en el servicio activo.

No gozarán del beneficio de continuar como socios activos de esta Institución aquellos trabajadores que en situación de excedencia ejerciten otra actividad que lleve consigo su obligada incorporación a otra Institución de Previsión Laboral.

CAPITULO IV

De los demás beneficiarios

Art. 19. Tendrán también la consideración de beneficiarios de este Montepío aquellas personas que sin estar asociadas a la Institución puedan solicitar y tengan derecho a percibir las prestaciones o beneficios establecidos en estos Estatutos, en virtud de la relación familiar en que se hallen con cualquier socio beneficiario causante.

Serán obligaciones de las personas a que se refiere el presente artículo:

1.º Solicitar, dentro de los plazos que en los presentes Estatutos se determinan, y en la forma que se establece para cada caso, los beneficios que puedan corresponderles.

2.º Aportar los documentos y datos que por la Entidad se les exija para la concesión de beneficios, y prestar con exactitud y fidelidad las declaraciones que les fueran exigidas con el mismo fin.

TITULO III

Organización y funcionamiento

CAPITULO PRIMERO

Del Gobierno del Montepío

Art. 20. Los Organos de Gobierno del Montepío Nacional de Previsión Social de los Porteros de Fincas Urbanas son:

- a) La Asamblea General.
- c) La Comisión Permanente Nacional.
- b) La Junta Rectora.
- d) Las Comisiones Provinciales Permanentes.

Art. 21. Son ejecutores de los acuerdos de los Organos de Gobierno:

- a) El Director del Montepío.
- b) Los Delegados Provinciales.

Art. 22. La Junta Rectora de la Institución propondrá al Servicio de Mutualidades la composición de los Organos de Gobierno a que se refiere el artículo 20.

Para formular dicha propuesta deberá tenerse en cuenta la proporcionalidad existente entre el número de afiliados de los distintos sectores laborales y categorías profesionales, así como las normas establecidas en las disposiciones vigentes sobre proporción entre las representaciones empresaria y obrera y demás requisitos que en ellas se exijan.

En la Resolución que a estos efectos dicte el Servicio de Mutualidades Laborales se concretará el número de vocales natos y electivos de cada uno de los Organos de Gobierno, categorías profesionales, elección y renovación de aquéllos y duración de su mandato.

Art. 23. Para ser Vocal electivo de los Organos de Gobierno de esta Institución se precisará: ser asociado, mayor de edad, estar en pleno disfrute de sus derechos civiles y profesionales, tener antigüedad laboral mínima de diez años y pertenecer a la Organización Sindical.

No podrán ostentar cargos representativos en la Entidad aquellos socios que no cumplan normalmente las diversas obligaciones que estos Estatutos imponen.

Para ser Vocal de las Comisiones Provinciales Permanentes se preferirá a aquellas personas que residan en la localidad donde

tenga su sede la respectiva Comisión o en sus cercanías.

Art. 24. La Asamblea General estará constituida por vocales electivos de las Comisiones Provinciales Permanentes, y elegirá de entre sus miembros los componentes de la Junta Rectora.

La Junta Rectora elegirá de entre sus miembros electivos los cargos de Presidente y Vicepresidente, que lo serán de todos los Organos de Gobierno Nacionales.

El Servicio de Mutualidades Laborales podrá poner su veto a los nombramientos efectuados previas las informaciones que considere precisas para fundar su resolución.

Art. 25. Los miembros de los Organos de Gobierno percibirán por su asistencia a las reuniones reglamentariamente convocadas, dietas de asistencia o de asistencia y desplazamiento, según los casos. La cuantía de estas dietas será fijada por la Junta Rectora.

CAPITULO II

De los Organos de Gobierno Nacionales

SECCIÓN 1.ª—De la Asamblea General

Art. 26. La Asamblea General es el Organismo supremo de la Institución constituida por representantes de los socios protectores y beneficiarios. En ella concurren la orientación del presente y futuro de la Entidad, la adopción de medidas y estudio de sugerencias que entrañen modificaciones de estos Estatutos y la superior vigilancia de los Organos de Gobierno de ella derivados, en el cumplimiento de sus misiones.

Art. 27. Será competencia de la Asamblea General:

1.º Elegir los miembros que han de constituir la Junta Rectora.

2.º Conocer la actuación de la Junta Rectora y de sus miembros en relación con el ejercicio de las funciones propias de sus cargos.

3.º Intervenir, en la forma que corresponda, en todos aquellos asuntos del Montepío cuya competencia no esté reservada a otros Organos del mismo.

4.º Examinar y aprobar, si procede, la Memoria, Presupuestos, Cuentas, Inventarios y Balances del Montepío que le someta la Junta Rectora.

5.º Esudiar, bien a propuesta de la Junta Rectora o por iniciativa propia, la reforma general de los Estatutos o la concesión de otros beneficios que mejoren los establecidos, elevando la propuesta al Servicio de Mutualidades Laborales.

6.º Resolver sobre las propuestas que le someta la Junta Rectora y las Comisiones Provinciales Permanentes, por mediación de aquélla.

Art. 28. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias o extraordinarias. Las reuniones ordinarias tendrán lugar una vez al año; las extraordinarias, siempre que, con la suficiente justificación, lo acuerde la Junta Rectora por su iniciativa o por solicitarlo la tercera parte de los asambleístas.

En las reuniones extraordinarias sólo podrán tratarse aquellos asuntos expresamente consignados en el orden del día, el que deberá ser sometido a la previa aprobación del Servicio de Mutualidades Laborales.

Art. 29. Las convocatorias de la Asamblea General se harán por su Presidente con una

antelación mínima de veinte días y por duplicado, a fin de dejar un ejemplar en poder del convocado y de que el otro sirva para poder acreditar en cualquier circunstancia el momento en que fué recibido por su destinatario.

A las convocatorias deberá acompañarse el orden del día de la sesión correspondiente.

Art. 30. Las reuniones de la Asamblea General podrán celebrarse en primera o segunda convocatoria. Desde el momento en que debiera haberse celebrado en primera convocatoria, al señalado para celebrar sesión en segunda, mediará un espacio de veinticuatro horas, sin que por ningún motivo ni en ningún caso pueda reducirse este lapso de tiempo.

Art. 31. Para que la Asamblea General se considere válidamente constituida, será necesaria la asistencia de la mitad más uno de sus componentes en primera convocatoria; en segunda será suficiente con que asista la tercera parte de sus miembros.

Art. 32. Los miembros de la Asamblea General podrán hacer uso de la palabra:

1.º Para una cuestión previa o de orden.

2.º Para defender o impugnar una proposición.

3.º Para contestar cuando hayan sido aludidos personalmente.

4.º Para rectificar una sola vez, cuando hayan tomado parte en algún debate.

Art. 33. Siempre que los miembros de la Junta Rectora hagan uso de la palabra en reuniones de la Asamblea General, se entenderá que no consumen turno a los efectos reglamentarios.

Art. 34. Cuando un miembro de la Asamblea General se halle en el uso de la palabra, no podrá ser interrumpido sino para ser llamado al orden por la Presidencia.

El Presidente podrá retirar la palabra al miembro de la Asamblea General a quien hubiese llamado al orden, e incluso ordenará su expulsión del local, si ello fuere necesario.

Art. 35. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría de votos entre los miembros que se hallen presentes. Cuando resulte empate en una votación decidirá con su voto el Presidente.

Art. 36. Las votaciones serán nominales cuando así lo solicite la tercera parte de los miembros asistentes.

Art. 37. De las deliberaciones de la Asamblea General se harán constar en el libro de Actas correspondiente—debidamente diligenciado por la Delegación de Trabajo—, las conclusiones y acuerdos adoptados, autorizándose las actas con las firmas del Presidente y Secretario.

SECCIÓN 2.ª—De la Junta Rectora

Art. 38. La Junta Rectora es el Organismo que, en nombre de la Asamblea General, tiene a su cargo el gobierno constante y directo del Montepío.

Art. 39. Será competencia de la Junta Rectora:

1.º Cumplir y hacer cumplir los preceptos contenidos en los presentes Estatutos y los de carácter general que sean aplicables al Montepío.

2.º Proponer a la Asamblea General la creación de nuevos beneficios cuando las posibilidades económicas del Montepío lo permitan, y la reforma de estos Estatutos, si lo estimare necesario.

3.º El estudio y resolución, previo informe de la Comisión Provincial respectiva y de la Dirección del Montepío, de los expedientes sobre las siguientes prestaciones:

- Pensión por Jubilación.
- Pensión por Invalidez.
- Pensión o Subsidio de Viudedad.
- Pensión de Orfandad.

Igualmente resolverá los expedientes de prestaciones extrarreglamentarias con cargo al tanto por ciento que del fondo a este fin destinado le corresponde, según lo establecido en el artículo 80 de estos Estatutos.

4.º Acordar que sea mensual el pago de las cuotas por parte de aquellas Empresas en las que concurran alguna de las circunstancias prevenidas en el artículo 64 de estos Estatutos.

5.º Conocer y aprobar, en su caso, las solicitudes formuladas por las Empresas, relativas al ingreso conjunto del importe total de cuotas correspondientes a Centros de Trabajo establecidos en distintas provincias.

6.º Nombrar el Vocal representante del Montepío en las Entidades de Previsión Social que pudieran constituirse por las Empresas.

7.º Estudiar y someter a la aprobación de la Asamblea General los presupuestos anuales de ingresos y gastos.

8.º Someter a la Asamblea General para su aprobación la Memoria anual, los estados de cuentas, inventarios y balances del Montepío.

9.º Aprobar la distribución de fondos.

10. Acordar las inversiones.

11. Imponer las sanciones procedentes con arreglo a lo establecido en el título correspondiente de estos Estatutos.

12. Proveer interinamente, hasta la inmediata renovación de los Organos de Gobierno, las vacantes que se produzcan con anterioridad a la extinción del mandato de sus miembros o los de la Asamblea General.

13. Resolver o informar a la Superioridad, según los casos, en los desacuerdos entre las Comisiones Provinciales Permanentes y los Delegados provinciales.

14. Resolver los acuerdos que sean de su competencia.

15. En general, adoptar las resoluciones que considere convenientes, siguiendo la orientación y las normas señaladas en los presentes Estatutos, así como elevar a la Superioridad las sugerencias que estime oportunas para la adopción de medidas que redunden en beneficio de los beneficiarios.

Art. 40. La Junta Rectora se reunirá, por lo menos, una vez cada tres meses, a fin de estudiar y resolver cuantos asuntos tenga pendientes.

Además de estas reuniones preceptivas, se reunirá siempre que sea convocada por el Presidente, bien por iniciativa de éste, o por haberlo así solicitado la tercera parte de los miembros, o porque el Director lo proponga atendiendo a razones justificadas.

Art. 41. Las convocatorias para las reuniones de la Junta Rectora deberán hacerse con una antelación mínima de ocho días y en la forma prevenida para la Asamblea General.

Art. 42. En todo lo referente al número de asistentes necesarios para que la Junta Rectora se considere válidamente constituida, deliberaciones, acuerdos y actas de las sesiones,

se aplicarán las normas relativas a la Asamblea General.

Art. 43. Cuando por circunstancias especiales se hallen reunidos en el domicilio social la totalidad de los miembros de la Junta Rectora, sin previa convocatoria, podrán celebrar sesión y tener plena validez los acuerdos adoptados en la misma, sin más requisito que la aprobación previa, y por unanimidad, de declarar la conveniencia de celebrarla en tal forma, debiendo levantarse el acta correspondiente, al igual que en las demás reuniones.

SECCIÓN 3.ª—De la Comisión Permanente Nacional

Art. 44. La Comisión Permanente Nacional es el Organismo Delegado de la Junta Rectora, que se constituye para la más ágil y rápida resolución de los expedientes de prestaciones y asuntos de trámite de la Entidad.

Art. 45. Corresponden concretamente a la Comisión Permanente Nacional las funciones y cometidos que se regulan en los apartados primero, tercero y noveno del artículo 39 de los presentes Estatutos, así como todas aquellas funciones que, siendo de la competencia de la Junta Rectora, sean expresamente delegadas por ésta.

Art. 46. La Comisión Permanente Nacional se reunirá por lo menos una vez al mes.

Además de esta reunión preceptiva, se reunirá siempre que sea convocada por el Presidente atendiendo a razones justificadas, bien por iniciativa de éste, por haberlo solicitado así la tercera parte de sus miembros o por proponerlo el Director.

Las convocatorias para las reuniones deberán hacerse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas y en la forma prevenida para la Asamblea General.

Art. 47. En todo lo referente al número de asistentes necesarios para que la Comisión Permanente Nacional se considere válidamente constituida, deliberaciones, acuerdos y actas de las sesiones se aplicarán las normas relativas a la Asamblea General.

SECCIÓN 4.ª—Del Presidente, Vicepresidente y Secretario de Actas

Art. 48. En el Presidente de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional concurren la alta representación y orientación de la Entidad, de la que es primera jerarquía y máxima figura representativa de los asociados.

Serán funciones del Presidente del Montepío o de quien reglamentariamente le sustituya:

1.º Representar al Montepío, en unión del Director del mismo, en todos los actos y contratos que se celebren.

2.º Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional, dirigiendo la discusión, así como decidir las votaciones en caso de empate.

3.º Fijar el orden del día de las reuniones de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional.

4.º Ejercitar funciones de fiscalización en todos los servicios y actividades del Montepío cuando lo considere oportuno, asistido del Director.

5.º Designar, de acuerdo con la Junta Rectora, las personas que deban cubrir interinamente hasta la inmediata renovación de los Or-

ganos de Gobierno, las vacantes que se produzcan con anterioridad a la fecha de terminación del mandato de sus Vocales.

Art. 49. El Vicepresidente sustituirá al Presidente, con iguales atribuciones y deberes, en caso de ausencia, enfermedad, fallecimiento u cualquier circunstancia que así lo requiera, otra cualquier circunstancia que así lo requiera, como igualmente en aquellos casos en que mediare delegación.

Art. 50. El Secretario del Montepío actuará como Secretario de Actas de la Asamblea General y de los Organos derivados de ésta sin derecho a voto.

Art. 51. Serán funciones del Secretario de Actas:

1.º Actuar como tal en las sesiones que celebre la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional, redactando las actas, que habrán de ser autorizadas con el visto bueno del Presidente, así como llevar los correspondientes libros de las mismas.

2.º Asistir al Presidente en la redacción del orden del día de las sesiones y cursar las convocatorias para ellas.

3.º Autorizar, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones que se expidan en relación con el contenido de dichas actas.

CAPITULO III

De los Organos de Gobierno provinciales

Art. 52. Se constituirá Comisión Provincial Permanente en las provincias y en la forma que se indique en la Resolución correspondiente del Servicio de Mutualidades Laborales.

También se constituirán Ponencias en las provincias que se determinen.

Art. 53. Las Comisiones Permanentes y las Ponencias se reunirán cada quince días, siempre y cuando existan expedientes de prestaciones pendientes de resolver o informar.

Podrán celebrar sesión, aun cuando no se dé la circunstancia expuesta en el párrafo anterior, si así lo acordase el Presidente de la Comisión o Delegado Provincial del Mutualismo Laboral por estimar que existen asuntos urgentes a deliberar.

Art. 54. Las convocatorias se harán con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas y en la forma prevenida para la Asamblea General. Deberá constar el día y hora fijado para la reunión y se hará saber que, de ser necesaria, la sesión en segunda convocatoria se celebrará media hora después de la señalada para la primera.

Art. 55. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, siendo necesario para que tengan validez que concurren en primera convocatoria la mitad más uno de sus componentes con voto, y un mínimo de la tercera parte de sus miembros, en segunda.

Las Comisiones de cuatro miembros podrán reunirse en segunda convocatoria con sólo dos de ellos.

En caso de empate, decidirá con su voto el Presidente.

Art. 56. La constancia y cumplimiento o suspensión de los acuerdos adoptados se sujetará a lo prevenido en el artículo 7.º de la Orden de 19 de noviembre de 1948.

Art. 57. Las Comisiones Provinciales Permanentes, como delegadas de sus Organos Je-

rárquicos Nacionales, tendrán las misiones y facultades informativas, de representación, de vigilancia y resolutivas que regula el artículo segundo de la Orden de 19 de noviembre de 1948.

CAPITULO IV

De los Organos Ejecutivos del Montepío

SECCIÓN 1.ª—Del Director

Art. 58. Corresponderán al Director y serán funciones del mismo:

1.º Representar al Montepío, en unión del Presidente, en todos los actos y contratos que se celebren, así como ante las Autoridades, Tribunales y Juzgados, Centros de Administración del Estado y particulares o cualesquiera otros Organismos, Entidades, Oficinas y personas con los poderes oportunos de la Junta Rectora cuando sean necesarios a los indicados efectos.

2.º Asistir al Presidente, cuando proceda, en la fiscalización de las actividades y los servicios administrativos del Montepío.

3.º Ejecutar los acuerdos de los Organos de Gobierno.

4.º Proponer las reuniones de dichos Organos cuando los estime oportuno.

5.º Ordenar los pagos correspondientes a la aplicación de los distintos conceptos presupuestarios y los derivados de la concesión de beneficios o prestaciones.

6.º Autorizar con su visto bueno los justificantes de ingreso y demás documentos análogos que se expidan por el Montepío.

7.º Ostentar la Jefatura del personal y de los servicios administrativos.

8.º Cumplir y hacer cumplir, respondiendo ante sus Organos de Gobierno y Servicio de Mutualidades Laborales del fiel cumplimiento de los Estatutos, normas y procedimiento administrativo.

9.º Informar los expedientes y documentos que se determinen o así lo requieran.

10. Todas las atribuciones de Dirección y gestión que no estén específicamente reservadas a la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional.

SECCIÓN 2.ª—Del Delegado provincial

Art. 59. A efectos análogos a lo establecido con respecto al Director, el Delegado provincial del mutualismo Laboral ostentará, dentro de su respectivo ámbito provincial, la representación legal de la Institución ante las Autoridades, Tribunales, Juzgados, Centros de Administración del Estado y particulares y cualesquiera otros Organismos o personas.

Art. 60. Corresponden al Delegado provincial y son funciones del mismo:

1.ª Realizar y ejecutar los acuerdos administrativos de los Organos de Gobierno Nacionales y Provincial, debiendo estar en contacto y dependencia con el Servicio de Mutualidades Laborales, a los efectos de unificación, coordinación y régimen interior.

2.ª Proponer al Presidente de la Comisión Provincial, siempre que lo considere preciso, la reunión de sus miembros.

3.ª Asistir a las reuniones de la Comisión Provincial, con derecho a voz, pero sin voto, con el carácter de Asesor Técnico.

4.ª Suspender, en su caso, por considerarlos antirreglamentarios, los acuerdos adoptados por la Comisión Provincial, dando cuenta

INDICE CRONOLOGICO

MARZO 1952

Día		Ref.
7	Empresa Municipal de Transportes de Madrid.—Caja de Empresa. (D.)	214
7	Viviendas Protegidas. (D.)	213
24	Industrias Químicas.—Montepío Laboral. (O.)	208
26	Magistraturas de Trabajo.—Alguaciles. (O.)	212
26	Magistraturas de Trabajo.—Secretarios. (O.)	210
28	Industria Pimentonera.—Reglamento de Trabajo. (R.)	209
31	Accidentes del Trabajo.—Asistencia Médico-Farmacéutica. (O.)	223
31	Industrias de Turrón y Mazapán y Obradores de Confitería, Pastelería y Masas Fritas.—Reglamento de Trabajo. (O.)	229
31	Mutualidades y Montepíos Laborales.—Derechos de registro e inscripción. (O.)	222

ABRIL 1952

4	Industria de la Madera.—Reglamento de Trabajo. (R.)	207
4	Subsidio Familiar.—Funcionarios, empleados y obreros del Estado. (D.)	215
5	Seguros y Subsidios Sociales.—Salario Base. (O.)	226
8	Seguros y Subsidios Sociales.—Cotización. (O.)	211
15	Accidentes del Trabajo.—Tarifas Mínimas. (R.)	218
15	Subsidio de Viudedad y Orfandad.—Compatibilidad. (O.)	228
30	Mutualidades y Montepíos Laborales.—Organos de Gobierno. (O.) ...	231
30	Sector Sedero de la Industria Textil.—Reglamento de Trabajo. (R.)	220

MAYO 1952

3	Colegios Oficiales de la Propiedad Inmobiliaria.—Incorporación. (R.)	216
8	Industrias de la Alimentación.—Montepío Laboral. (R.)	219
8	Magistraturas de Trabajo.—Días Inhábiles. (O.)	217
12	Porteros de Fincas Urbanas.—Montepío Laboral. (O.)	232
18	Industrias Químicas.—Montepío Laboral.	221
20	Industrias de la Alimentación.—Montepío Laboral.	225
20	Readmisión en el puesto de trabajo.—Rehabilitación física. (O.)	230
21	Subsidio de Paro por Escasez de Energía Eléctrica.—Supresión de la Caja de Compensación. (O.)	227
28	Transportes y Comunicaciones.—Montepío Laboral.	224